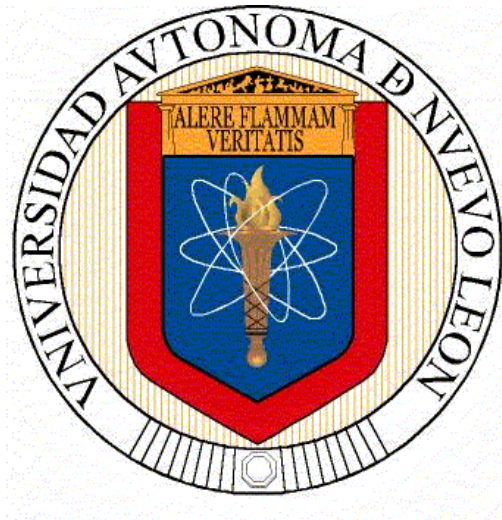


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**TESIS**

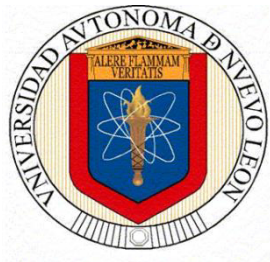
**EFICIENCIA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  
LOCALES.**

**PRESENTA**

**ANTONIO DE JESÚS CORRAL ÁLVAREZ**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO**

**JUNIO 2015**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**  
**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**



**TESIS DOCTORAL**

**EFICIENCIA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  
LOCALES**

**PRESENTA**  
**ANTONIO DE JESÚS CORRAL ÁLVAREZ**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO**

**DIRECTOR DE TESIS: DR. RAFAEL AGUILERA PORTALES**

**JUNIO 2015**

## **DEDICATORIA**

A mis Padres, en agradecimiento a todo su ejemplo de vida.

Ciro Corral Payan y Carolina Álvarez Torres.

A mi esposa e hijas.

Ana Bertha, Ana Gabriela, Alejandra Carolina y Alondra Anelisse, por su amor incondicional, su paciencia y comprensión, gracias por estar siempre a mi lado.

Al señor Ing. Héctor López Pardo, por su apoyo incondicional.

Al Señor Gaspar Muñiz Palacios y Familia. Gracias.

## **AGRADECIMIENTO**

Al Dr. RAFAEL AGUILERA PORTALES, por sus aportaciones para alcanzar a elaborar este trabajo ahora mi tesis doctoral, pero aún más por su amistad.

A mis Sinodales, por su voto de confianza al aprobar esta Tesis.

A mis Maestros, quiero decirles este es el primer intento de lo que vendrá.

## ÍNDICE.

### PÁGINA

INTRODUCCIÓN	6
--------------	---

## PRIMERA PARTE. ARTICULACIONES CONSTITUCIONALES, UN ESTADO CONSTITUCIONAL.

### CAPITULO I. ESTADO CONSTITUCIONAL

1.1	Estado Constitucional	10
1.2	Supremacía Constitucional	13
1.3	Control de Convencionalidad	28
1.4	Bloque de Constitucionalidad	36

### CAPITULO II FEDERALISMO EN MÉXICO

2.1	Federalismo	44
2.2	Régimen interior	62

SEGUNDA PARTE.  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

CAPITULO I.

SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

1.1	Competencia Constitucional	75
1.2	Jurisdicción Constitucional	76
1.3	Sistemas de control Constitucional	88

CAPITULO II.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. FEDERAL Y LOCAL.

2.1	Las reformas Constitucionales para el fortalecimiento del Tribunal Constitucional Mexicano	110
2.2	Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Constitucional Mexicano	122
2.3	Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal de Legalidad	131
2.4	Tribunal Local de Constitucionalidad	135
2.5	Análisis comparativo entre la normativa de la Federal y el Estado de Nuevo León. (Artículo 105 de la Constitución Federal y el artículo 95 de la Constitución del Estado de Nuevo León)	141
2.6	Violaciones indirectas a la Constitución	168
CONCLUSIONES		177
BIBLIOGRAFÍA		187

## INTRODUCCIÓN

La presente Tesis, “LA EFICIENCIA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES”, es el resultado de una investigación, iniciada durante mi estancia como estudiante del Doctorado en Derecho, en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La tesis hoy presentada está dividida en dos partes y cada una en dos capítulos buscando la simetría en cuanto su desarrollo y contenido.

En la primera parte observaremos las disposiciones Constitucionales donde se encuentra el sustento de varias figuras que en conjunto nos permitirán tener a la vista la estructura del Estado Constitucional Mexicano.

Donde se realizara un recorrido conceptual y teórico de diversas figuras donde se fijan la cimentación del Estado Constitucional, como Supremacía constitucional, control de convencionalidad, bloque de constitucionalidad, federalismo y régimen interior. Analizaremos la jerarquización de las normas, en su caso el valor de los tratados como se deben de observar y hacer valer los mismo en nuestro sistema jurídico, al hablar de bloque de constitucionalidad, es estar construyendo ya lo que unas voces desconocen y otras le conceden observancia generalizada bajo diversa composición conceptual, pero esto permitirá no perder de vista la contradicción de tesis 293/2011, ya que en este momento ofrece información importante que debemos de atender, en busca de una resolución apegada a derecho y conforme a los principios constitucionales. Así mismo estas reflexiones se harán en las dos esferas de poder federal y local. Para ello se visualizara la figura del federalismo Mexicano y la pauta que sigue el régimen interior de las entidades federadas, figura que merece un tratamiento que haga resaltar su importancia dentro del tema de federalismo.

En busca de esta posición veremos el fortalecimiento teórico que nos ofrecen diversos temas que se han tratado dentro de esta aparte, podría hablar de varias necesidades teóricas

como alcanzar el derecho a la jurisdicción y con ella observar las diferencias que de las mismas se derivan cuando hablemos del jurisdicción constitucional; por lo que tendríamos que explicar la posición que guarda nuestro derecho interno en forma globalizada, es por lo que debemos de atender los presupuesto que se derivan del control de convencionalidad, y apreciar las dos formas de implementarla sin que ello trastoque el entorno de los derechos humanos en pugna, pero con especial interés a los pronunciamiento de nuestro máximo Tribunal ya que en la práctica jurisprudencial tiene un tratamiento muy diferente a la figura utilizada de forma universal ya que fue acotado su radio de alcance a los contenidos constitucionales de nuestro país; nos haremos varios cuestionamientos sobre el bloque de constitucionalidad en México hay o no hay bloque de constitucionalidad, partiremos de los parámetros del caso Radilla y los preceptos que componen la resolución que fuera emitida en contra del estado Mexicano, ahí y la jurisprudencia podríamos indicar que si existen parámetros a seguir (control de convencionalidad).

En la segunda parte, se observara la construcción de nuestro Tribunal Constitucional Federal, las reformas constitucionales que se realizaron para la adecuación de nuestro entorno constitucional, para darle forma y estructuras al ahora Tribunal de Constitucionalidad Mexicano, un órgano con matices de un tribunal hibrido, realizado, estructurado, acorde a los planteamientos constitucionales que se realizaron.

Un tribunal de constitucionalidad celoso de la legalidad, ya que sigue expresando los lineamientos de transcendencia de legalidad en nuestro país.

Reformas constitucionales que guardan un gran interés, ya que de ellas se desprende el nacimiento del derecho procesal constitucional local así como los Tribunales locales de Constitucionalidad, pero también nos indican el yugo de la federación a no permitir alcanzar una madurez como Tribunal de Constitucionalidad, por lo que sus resoluciones no alcanzan una eficacia y la eficiencia de sus contenidos. Se realizara un comparativo entre las disposiciones federales y la muy reciente ley reglamentaria de los mecanismos procesales para la salva guarda de la supremacía constitucional en el Estado de Nuevo León, pero sin dejar pasar el estudio que es pertinente para el tema de las violaciones



indirectas a la constitución federal, no otra pauta que el estudio de la legalidad realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la legalidad de las resoluciones emitidas por los Tribunales de Constitucionalidad Local.

## **PRIMERA PARTE**

# **ARTICULACIONES CONSTITUCIONALES, UN ESTADO CONSTITUCIONAL**

## CAPITULO I

### ESTADO CONSTITUCIONAL

#### 1.1 ESTADO CONSTITUCIONAL

Estado Constitucional, se refiere a los límites de acción señalados por la ley, idea que fue clave dentro del pensamiento liberal europeo, es decir: “que el estado restringe y su práctica al acotarse con el objeto de asegurar a cada ciudadano el máximo grado de libertad posible”. En el estado constitucional, lo que se busca es instaurar una norma jerárquicamente superior, que sea vinculante para la autoridad y para la ciudadanía en su conjunto. El principio de legalidad en este tipo de Estado significa el sometimiento del estado a la ley, pero a la ley legítimamente establecida conforme al texto de las praxis constitucionales.<sup>1</sup>

El maestro Rafael AGUILERA<sup>2</sup>, indica la ley ha dejado de ser la única, suprema y racial, fuente del derecho y comienza el síntoma de crisis irreversible del paradigma jurídico. Lo anterior es refrendado por Jaime Cárdenas, al indicar “. . . el Estado de derecho ya no es el imperio de la ley sino el imperio del derecho, esto es de la Constitución, de los principios y de la labor de intérpretes y argumentadores”<sup>3</sup>.

Para Michael NÚÑEZ, el Estado Constitucional actúa y regula la actividad social siguiendo diversos principios, para indicar los principios rectores se apoya en lo expresado por el maestro español Pedro DE VEGA, quien propone, los siguientes: el principio democrático, el principio liberal y el principio de división de poderes.

Donde el principio democrático es el legitimador de las instituciones por efecto del voto y que por medio de la integración de una mayoría realice el mandato del pueblo pero al ejercer el poder no deben olvidarse de las minorías. El principio liberal trae consigo el reconocimiento de diversos presupuestos, se deberán de reconocer y respetar los derechos

---

<sup>1</sup> BEGNÉ GUERRA Cristina. *Jueces y democracia en México*. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, D.F., 2007, pág. 10

<sup>2</sup> AGUILERA PORTALES Rafael Enrique. *Teoría Política y Jurídica*. Ed. Porrúa. México, D.F., 2008. Pág. 94.

<sup>3</sup> CÁRDENAS GRACIA Jaime. “Diez Tesis sobre el atraso jurídico”. En TORRES Estrada Pedro. Compilador. *Neoconstitucionalismo y Estado de derecho*. Limusa. México, 2006. Pág. 41

humanos, deberá de existir una plena división de poderes, y con ello acotar el poder en manos de las instituciones, efecto de libertad para impedir el ejercicio arbitrario del poder. Supremacía Constitucional, debemos entender que esa supremacía da la categoría de que no hay poder alguno sobre la constitución.<sup>4</sup>

Como resultado de estar en presencia de un estado constitucional tendremos que observar diversa nomenclatura como es el paradigma de nuevo derecho constitucional que lo han llamado Neoconstitucionalismo; el derecho constitucional de acuerdo a diversos principios, los cuales podrán salir del esquema, actualizarse o adicionar nuevos principios, esto según se vaya evolucionando el entorno teórico del Neoconstitucionalismo.

Debemos señalar que el nuevo paradigma del Neoconstitucionalismo interpreta el derecho no solo como un conjunto de normas jurídicas, sino como una combinación armónica de principios, valores y reglas.<sup>5</sup>

Al respecto se han pronunciado diversos tratadistas como, Gustavo ZAGREBELSKY<sup>6</sup>, con su manifestación dentro de la teoría del Derecho Dúctil, expone que acertadamente el derecho se hace más flexible y dúctil (maneable, manejable) menos rígido y formal, y con ello se amplían las expectativas de la aplicación del derecho al caso concreto.

Neoconstitucionalismo, para PRIETO SANCHIS, se expresa como “... constitucionalismo contemporáneo o, a veces también, constitucionalismo a secas son expresiones o rubricas de uso cada día más difundido y que se aplican de modo un tanto confuso para aludir a distintos aspectos de una, presuntamente, una nueva cultura jurídica. Son tres las acepciones principales. En primer lugar, el constitucionalismo puede encarnar un cierto tipo de Estado de derecho, designado por tanto el modo institucional de una determinada forma de organización política. En segundo término, el constitucionalismo es también una teoría del Derecho, más concretamente aquella teoría apta para explicar las características de

---

<sup>4</sup> NÚÑEZ TORRES Michael. *La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución*. Ed. Porrúa. México, D.F., 2006. Pág. 101-121.

<sup>5</sup> Ob. cit. AGUILERA PORTALES Rafael Enrique. Pág., 93.

<sup>6</sup> ZAGREBELSKY Gustavo. *El Derecho Dúctil*. Ed. Trotta. España, 2005.

dicho modelo. Finalmente, por constitucionalismo cabe entender, también, la ideología que justifica o defiende la formula política así asignada”.<sup>7</sup>

El maestro Rafael AGUILERA, hace una acotación de los rasgos más sobresalientes del Neoconstitucionalismo, tomando en cuenta los postulados de PRIETO SANCHIS, por lo que indica:

- a. Mas principios que reglas,
- b. Mas ponderación que subsunción,
- c. Omnipresencia de la constitución,
- d. Omnipresencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario,
- e. Coexistencia de la constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior se retoma una línea casi olvidada que será el incremento de la habilidad para argumentar e interpretar. De los operadores del derecho en todas sus manifestaciones.

Así mismo debemos de tomar en cuenta otra figura que es la retórica, Gerardo DEHESA nos indica que: *En la actualidad la retórica ha cobrado una importancia y un carácter extraordinario como resultado de múltiples estudios realizados con una visión que han dejado completamente olvidada una visión reduccionista y accesorio de la retórica, limitada al simple ornato del discurso y empleada como sinónimo de discurso engañoso y falaz. La retórica se nos presenta en la actualidad como una ciencia y técnica de la comunicación que, con dos milenios y medio de existencia, tiene hoy una gran vitalidad. La multiseccular ciencia del discurso no solo ha perdido su vigencia en estos fines de siglo y de milenio, sino que la ha visto incrementarse [...]*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> PRIETO SANCHIS Luis. *Derechos fundamentales, Neoconstitucionalismo y ponderación judicial*. Ed. Palestra. Lima, 2007. Pág. 109.

<sup>8</sup> DEHESA DÁVILA Gerardo. *Introducción a la retórica y la argumentación*. Editado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Quinta Edición. México, D.F. 2009. Pág. 3

Aunado a lo anterior debemos de tener en cuenta que hoy en día, aun utilizando cualquier medio o método interpretativo como argumentativo, no debemos dejar a un lado la interpretación conforme; interpretación conforme a los preceptos constitucionales, y con ello traeremos en todo momento el enfrentamiento de cualquier disposición de ley con la Constitución.

Debiendo quedar firme, que en el Estado Constitucional la Constitución pase a ser realmente, el acto constituyente que contiene las cláusulas del contrato social.<sup>9</sup>

## 1.2 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Por supremacía Constitucional, Rafael Matos Escobedo, citado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,<sup>10</sup> expresa, es *“la piedra angular de la estructura jurídico-institucional de todo país organizado democráticamente.”*

### **Marbury versus Madison: origen del principio de supremacía constitucional**

Iniciamos abordando el antecedente más remoto del principio de supremacía constitucional. Donde tenemos como protagonista a John MARSHALL, presidente en ese momento de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Llega a la Suprema Corte, en el invierno de 1800, cuando el tercer presidente de la Corte, Oliver ELLSWORTH, renuncia a su cargo. Por ese motivo el señor Presidente de los Estados Unidos, John Adams, quien fuera nombrado John Jay para sustituirlo, mismo que ya había tenido la distinción de ser Presidente de la Suprema Corte, cargo que en ese momento no acepto. Considerando en ese momento que podría recaer en la persona de Marshall, quien se desarrollaba profesionalmente como Secretario de Estado. El 27 de

---

<sup>9</sup> Ob. cit. NÚÑEZ TORRES Michael. Pág. 141.

<sup>10</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*. Tercera Edición, 2014, pág. 7.

enero del año siguiente el Senado ratificó su nombramiento tomando posesión el día 4 de febrero del mismo año. Cabe indicar que en ese momento la Suprema Corte no gozaba de un respeto generalizado de la población.

Su inicio en la Suprema Corte, no le fue fácil ya que tuvo que luchar para imponerse en cuanto a sus criterios jurídicos, para la observancia del derecho. Para que esos criterios que se observan en sus resoluciones dieran un lugar de respeto a dicha institución y por añadidura a sus miembros.

Durante su larga permanencia dentro de Suprema Corte, diversos tratadistas han indicado que le bastaron cuatro grandes razones para lograr su éxito, mismo que fueron estructurados por Miguel CARBONELL:<sup>11</sup>

- a. Su férrea y tenaz voluntad de imponer, sus propios puntos de vista, lo que género no pocos enfrentamientos con las otras ramas de gobierno,
- b. Su sentido partidista a favor de los federalistas, lo que le hizo dirigir su talento jurídico hacia la construcción y consolidación de un gobierno de alcance nacional;
- c. El dato jurídicamente más relevante es que supo combinar el poder judicial que la Constitución le reconocía a la Corte en su artículo III con la cláusula de *supremacía* el artículo VI de la misma Constitución, creando el mecanismo de la *judicial review*; y
- d. La fuerte personalidad de Marshall y su don de mando le permitieron que cada uno de los jueces que sirvieron en la Corte durante su mandato (fueron un total de quince) se acomodaron de una u otra manera a sus puntos de vista; no hubo en la Corte de Marshall un gran disidente y de hecho el propio Marshall solamente se quedó en minoría de votos en una ocasión durante toda su carrera judicial.

---

<sup>11</sup> CARBONELL, Miguel. Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Visible DEL ROSARIO Rodríguez, Marcos. Supremacía Constitucional. Porrúa. México, 2009. Pág. 35

Difícil circunstancia para resolver, por Marshall:

Primero. El enfrentamiento de normas, ley ordinaria o un precepto constitucional, existiendo entre ellas una contradicción.

Segundo. Expresión, Supremacía Constitucional, la Constitución se impone contra cualquier norma secundaria.

Tercero. El resultado de lo anterior, no concluyen el círculo queda abierto. La norma que se enfrenta a una articulación o principio constitucional, realizando una declaración de inconstitucional. Pero que sucedía, simplemente se implicaba o se declaraba su inconstitucionalidad. Fué hasta años después donde Kelsen explica el tratamiento que deberá seguir, la forma de cómo debe imponerse la Constitución en contra de cualquier normatividad secundaria, (. . . los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución y la Constitución es superior a toda ley ordinaria del legislativo, -luego- entonces la Constitución y no la tal ley ordinaria tienen que regir aquellos casos en que ambas sería aplicables).<sup>12</sup> El nombre del ensayo presentado por Kelsen es La garantía jurisdiccional de la Constitución, publicado en 1928.<sup>13</sup>

A raíz de esta resolución el poder jurisdiccional en Estados Unidos dejó de ser considerado como débil así como poco influyente en las decisiones políticas en relación a los otros poderes.

## **La modernidad. Contenidos constitucionales**

Recordemos que la Constitución en la época moderna es considerada una limitación contra los posibles excesos del poder político. Esta limitación que tratamos de cimentar es lo que dio pauta al fortalecimiento de la división de poderes, porque debemos de analizarla como un todo, y de ahí podremos tomar otro tipo de limitaciones, basado en la teoría de los pesos y contrapesos de dichas entidades de poder. Que con el paso del tiempo en una característica fundamental del Estado Constitucional. En conjunto la división de poderes

---

<sup>12</sup> Ibídem. CARBONELL, Miguel. Pág. 39

<sup>13</sup> Ibídem. CARBONELL, Miguel. Pág. 44



así como el reconocimiento a los derechos fundamentales, eran la pauta a considerar al constitucionalismo, en su primera fase de existencia.<sup>14</sup>

El siguiente momento que debemos de considerar es la inclusión de las declaraciones de derechos en las Constituciones, tanto la Americana como la Francesa, esto obedecía a dos motivos según HABERMAS:<sup>15</sup> el primero, legitimidad, ya que se reconocían los derechos naturales existentes, colocándolos como parte de las cláusulas pétreas que deben de tener (acorde al principio de progresividad de los derechos humanos), el contenido constitucional; segundo, valores, que debemos de transmitir, por medio de los derechos individuales, como primera etapa, posteriormente en la segunda etapa se observarían los derechos sociales, que algunas constituciones en ese momento ya los contenían.

Concepto.

Tomando en cuenta los postulados doctrinarios se puede expresar como concepto: *supremacía constitucional se traduce en la cualidad que tiene la constitución de ser la norma fundada y la validez a la totalidad del ordenamiento jurídico de un país determinado.* Ahora bien la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto indicando que:

*La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la constitución, y que por ello coloca a esta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de estas deben (sic) ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquella. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus facultades. [...]*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> GUASTINI, Ricardo. *Sobre el concepto de constitución. Teoría de la Constitución.* Ensayos escogidos. Porrúa. México, 2005. Pág. 99

<sup>15</sup> HABERMAS, Jürgen. *Teoría y praxis.* Tecnos. España, 2002.

<sup>16</sup> Tesis P./J. 73/99, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. X, agosto de 1999, p.18.

Principios que deberán ser observados. Realizados bajo la herramienta de la interpretación jurídica por Poder Judicial Federal. Diversas Jurisprudencias.

a. “...las normas, al momento de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con lo que establece la Constitución y -siempre que no haya una restricción en la Constitución misma de conformidad con lo que establecen los tratados internacionales...”<sup>17</sup>

b. “...cuando la norma sea susceptible de interpretarse en diversos sentidos, los juzgadores tienen la obligación de optar por aquella interpretación que sea conforme con la Constitución...”<sup>18</sup>

c. “...análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos...”<sup>19</sup>

d. “... los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo

---

<sup>17</sup> Registro: 2007735, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CCCLI/2014 (10a.) Página: 615. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA. SON APLICABLES A LOS JUICIOS CIVILES.

<sup>18</sup> Registro: 2007735, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CCCLI/2014 (10a.) Página: 615. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA. SON APLICABLES A LOS JUICIOS CIVILES.

<sup>19</sup> Época: Décima Época Registro: 2006223, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2014 (10a.) Página: 94.

de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea...”<sup>20</sup>

e. “... ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella...”<sup>21</sup>

f. “... finalidad es salvaguardar la jerarquía de la Constitución Federal sobre las normas inferiores, inaplicando disposiciones que son contrarias a ella...”<sup>22</sup>

g. “...deben nulificarse o dejar sin efectos las leyes o los actos que violenten lo dispuesto en la Constitución, pues los principios, valores y reglas que el propio ordenamiento consagra deben prevalecer con supremacía y en todo tiempo...”<sup>23</sup>

## **Reforma constitucional Junio 2011**

El principio de supremacía constitucional, no fue alterado, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, ya que su contenido se respetó enteramente, el artículo 133 sigue igual, lo que ha cambiado es la reflexión indicada por la Suprema Corte de Justicia, al realizar diversos ejercicios argumentativo como de interpretación de forma sistémica con todo el entorno constitucional.

Se puede tomar de la jurisprudencia emitida al respecto que no habiendo sido reformados los artículos 103, 105 y 107, Constitucionales, lo cual seguirá permitiendo someter al control de constitucionalidad tanto al derecho interno, como los tratados

---

<sup>20</sup> Época: Décima Época, Registro: 2003771, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A. J/6 (10a.) Página: 1031.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011.

<sup>21</sup> Época: Novena Época Registro: 165713 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXXV/2009 Página: 14

<sup>22</sup> Época: Novena Época, Registro: 173844, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a. CLXXX/2006 Página: 178.

<sup>23</sup> Época: Novena Época, Registro: 177591, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/41 Página: 1656.

internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Como es visible en la siguiente tesis:

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE 2011, RESPETA ESTE PRINCIPIO.<sup>24</sup>

La reforma al artículo 1o. de la Carta Magna, publicada el 10 de junio de 2011, en modo alguno contraviene el principio de supremacía constitucional consagrado desde 1917 en el artículo 133 del propio ordenamiento, que no ha sufrido reforma desde el 18 de enero de 1934, y en cuyo texto sigue determinando que "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión", lo cual implica que las leyes y los tratados internacionales se encuentran en un plano jerárquicamente inferior al de la Constitución, pues en el caso de las leyes claramente se establece que "de ella emanan" y en el de los tratados "que estén de acuerdo con la misma". Por otra parte, la reforma de 2011 no modificó los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, en la parte en que permiten someter al control constitucional tanto el derecho interno, como los tratados internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Además, el propio artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados; disposición que resulta acorde con el

---

<sup>24</sup> Época: Décima Época; Registro: 2002065; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012; Tomo 3; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a. LXXV/2012 (10a.); Página: 2038

principio de supremacía constitucional. Principio que también es reconocido en el ámbito internacional, en el texto del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, al prever la posibilidad de aducir como vicio en el consentimiento la existencia de una violación manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

Amparo directo 30/2012. Gustavo Janett Zúñiga. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedades Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.

Nota: Por ejecutoria del 9 de octubre de 2013, el Pleno declaró sin materia la contradicción de tesis 26/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Al realizarse la modificación al artículo primero de la Constitución, cambio que también fuera analizado por nuestro Tribunal Constitucional, ya que de las nuevas reflexiones dio pauta a principios que deberán de ser observados en todo momento. Por indicar algunos, principio pro persona, control difuso de la constitucionalidad y demás.

Conforme al principio *pro homine*, constituye la obligación de la autoridad de ponderar ante todo la aplicación de los derechos humanos, a razón de estar siempre a favor de la dispersión que más lo favorezca o que menos limite al hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o una interpretación extensiva, cuando se trate de derechos protegidos o al contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites para su ejercicio<sup>25</sup>; en este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al explicar el alcance de este principio, en relación con las restricciones de los

---

<sup>25</sup> “*PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS*. Época: Décima Época; Registro: 2000630; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.); Página: 1838.

derechos humanos expresó que “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido”, que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que nos lleve a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.

Ahora bien el principio Pro Persona, trae en cascada otro principio que deberán de observar los operadores del derecho de forma jurisdiccional, mismo que se puede conceptualizar como la tutela judicial efectiva definida como; a) el derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional, la cual es un derecho público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales independientes e imparciales a plantear su pretensión o defenderse de la demanda en su contra; b) debe garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá la seguridad de recibirla por el órgano jurisdiccional competente, sin más condición que las formalidades esenciales del propio procedimiento, logrando con ello la tramitación y como consecuencia la resolución al caso en concreto; y, c) la implementación de los mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar la prerrogativa de defensa. Estos principios son parte del criterio jurisprudencial que al rubro dice: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Época: Décima Época; Registro: 2000479; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: III.4o.(III Región) 6 K (10a.); Página: 1481.

Cronología de resoluciones. Emitidas por la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a la jerarquía de normas.

En diversos criterios judiciales nuestro más alto Tribunal ha sustentado en torno a la jerarquía en el orden jurídico mexicano respecto de los Tratados Internacionales frente a la propia Ley Suprema y a las normas federales.

Primer pronunciamiento, resolución dictada en el amparo en revisión 2069/1991, en el año de 1992, en el cual se expresa que los Tratados en el mismo nivel que a las leyes federales, señalando que ambos cuerpos normativos ocupaban un rango inmediatamente inferior a la Constitución y que uno no podía ser empleado como parámetro de validez o regularidad del otro<sup>27</sup>.

Segundo al resolver el amparo en revisión 1475/1998, donde el Pleno determinó, que los tratados internacionales que estaban de acuerdo con la Constitución, por cumplir con los requisitos formales y materiales para tal efecto se ubicaban jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales.<sup>28</sup>

Tercero al resolver el amparo en revisión 120/2002, el Tribunal en Pleno expresa la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional integrado por la Constitución los Tratados Internacionales y las leyes generales; la supremacía de los Tratados Internacionales frente a las leyes generales, federales y locales; y la existencia de una visión internacionalista de la Constitución, como lo indica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el estado Mexicano no puede invocar su derecho interno como excusa para el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a otros actores

---

<sup>27</sup> LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.

<sup>28</sup> TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

internacionales, ya que todo tratado vigente obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.<sup>29</sup>

Cuarto pronunciamiento y el cual es que impera en este momento. Nace de la contradicción de tesis número 293/2011:

CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA

SECRETARIOS AUXILIARES: ARTURO GUERRERO ZAZUETA Y SANTIAGO JOSÉ VÁZQUEZ CAMACHO

Vo. Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil trece.

Cotejó:

V I S T O S para resolver los autos de la contradicción de tesis 293/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. \*\*\*\*\*, por conducto de su autorizado \*\*\*\*\*, mediante ocurso recibido el veinticuatro de junio de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver

---

<sup>29</sup> TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.



el amparo directo 1060/2008 y los criterios sostenidos por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos directos 344/2008 y 623/2008.

El citado precedente resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito dio lugar a las tesis aisladas de rubros “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE AL NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN”,<sup>30</sup> y “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO”.<sup>31</sup>

Por su parte, el criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo directo 344/2008 dio origen a la tesis aislada de rubro “DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS”,<sup>32</sup> mientras que al resolver el amparo directo 623/2008, dio origen a la tesis aislada “JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Novena Época; Registro: 164509; Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.45 K; Pág. 2079.

<sup>31</sup> Novena Época; Registro: 164611; Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.47 K; Pág. 1932.

<sup>32</sup> Novena Época; Registro: 169108; Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Materia(s): Común; Tesis: I.7o.C.46 K; Pág. 1083.

<sup>33</sup> Novena Época; Registro: 168312; Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; Materia(s): Común; Tesis: I.7o.C.51 K; Pág. 1052.

De la contradicción que se indica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo a bien indicar dos criterios jurisprudenciales que son la esencia de la contradicción de tesis denunciada.

Primero. En cuanto a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales,<sup>34</sup> y que hayan pasado por lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, ostentan el mismo rango que la constitución, salvo que se dé una contravención con algún supuesto o principio constitucional, en tal sentido deberá de prevalecer la Constitución sobre el tratado que contenga los derechos humanos.

Segundo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos Humanos, es vinculante para los todos los operadores jurisdiccionales nacionales incluso en los casos en que el estado Mexicano, no haya sido parte, del procedimiento.

De los anteriores supuestos, se indicaron las siguientes tesis de jurisprudencia donde pone claro los puntos anteriores.

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.<sup>35</sup>

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la

---

<sup>34</sup> Solo el alcance jurisprudencial es a los tratados de derechos humanos o en su parte específica sobre derechos humanos de algún tratado internacional.

<sup>35</sup> Época: Décima Época, Registro: 2006224, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Página: 202.

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar LELO DE LARREA, quien

manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario PARDO REBOLLEDO, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente; Luis María AGUILAR MORALES, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. VALLS HERNÁNDEZ, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites; Alberto PÉREZ DAYÁN, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan N. SILVA MEZA, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón COSSÍO DÍAZ. Ponente: Arturo Zaldívar LELO DE LARREA. Secretario: Arturo BÁRCENA ZUBIETA.

Tesis y/o criterios contendientes.<sup>36</sup>

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA  
DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES

---

<sup>36</sup> Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.<sup>37</sup>

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

### **1.3 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD**

A razón de la reforma constitucional del 2011, y nueva interpretación al artículo primero constitucional así como las nuevas reflexiones que ha expresado nuestro máximo Tribunal, estamos en un cambio de paradigma, y ello tiene una gran presencia la convencionalidad, ahora control de convencionalidad, podría ser el momento para que se diera inicio a una nueva época de nuestra literatura jurisprudencial ya que ha cambiado de forma total los indicadores que dieron origen a la décima época.

---

<sup>37</sup>Época: Décima Época, Registro: 2006225, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 21/2014 (10a.) Página: 204,

Esta reforma ha tenido un gran impacto, en los tres órdenes de poder del Estado Constitucional Mexicano: federal, estatal y municipal. Quienes deberán de revisar hacia su interior y adecuar su normatividad a este nuevo paradigma.

### **México. Adherencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, “pacto de San José de Costa Rica”.**

La Corte Interamericana de derechos Humanos, con base a sus pronunciamientos han construido una teoría importante de convencionalidad, donde se pueden observar resoluciones de gran trascendencia como el caso de Chile, conocido como la tentación de cristo, donde el alcance de la resolución era modificar su estructura constitucional para dar cabida a un derecho fundamental que carecían en cuanto a la libertad de expresión; en cuanto a México la primera resolución en contra se dictó dentro de la causa que se conoce como caso Radilla, trajo una revolución escrita propiamente, aunque la Suprema Corte ha indicado que en nuestro país no existe, o no se debe de estar, a un supuesto bloque de constitucionalidad, el caso Radilla no es otra cosa que la contradicción a las indicaciones de la Corte en cuanto al bloque de constitucionalidad, ya que los preceptos o principios de esta resolución han sido utilizado como referencia para varias circunstancias donde la Corte ha manifestado su posición en la décima época<sup>38</sup> del Semanario Judicial de la Federación. Hasta el día de hoy nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas tesis asiladas o de jurisprudencia, habiéndole asignado los siguientes números y rubros:

Número de Registro: 2002992

---

<sup>38</sup> Las Épocas son las etapas cronológicas en los que la SCJN agrupa los criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación. Se dividen en dos grandes periodos: antes y después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917. Los criterios de la Primera a la Cuarta Época, por ser anteriores a la vigencia del Texto Fundamental de 1917, hoy son inaplicables, es decir, carecen de vigencia y por tanto, se agrupan dentro de lo que se denomina "jurisprudencia histórica". Los criterios de las Épocas Quinta a la Novena, es decir, de 1917 a la fecha, integran el catálogo de la llamada comúnmente "jurisprudencia aplicable" o vigente. Es importante destacar que no por el hecho de que un criterio pertenezca a este último periodo, necesariamente implica que tiene vigencia y es aplicable, ya que esos atributos están supeditados a múltiples factores, entre ellos, que su vigencia no haya sido interrumpida de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable o bien, que el criterio no haya sido superado en virtud de la resolución de una contradicción de tesis.

[https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que\\_hace\\_SCJN.aspx](https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx)

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CAUSA PENAL SEGUIDA A UN MILITAR POR EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 248 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES.

Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 360. P. XVII/2013 (10a.).

Número de Registro: 2002996

COMPETENCIA PARA CONOCER Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS POR MILITARES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, QUE AFECTEN LOS DERECHOS HUMANOS DE CIVILES. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES.

Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 361. P. VII/2013 (10a.).

Número de Registro: 2003005

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA.

Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 363. P. V/2013 (10a.).

Número de Registro: 2003047

FUERO MILITAR. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CONTRAVIENE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 364. P. VI/2013 (10a.).

Número de Registro: 2003156

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS.

Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 368. P. III/2013 (10a.).

Número de Registro: 2002271

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, APLICACIÓN DE SU ARTÍCULO 25. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO PREVÉ COMO FIGURAS DE DEFENSA RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CUYO OBJETO ES TUTELAR EL DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL RECONOCIDO EN DICHO PRECEPTO.

Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1116. VI.1o.A. J/3 (10a.).

Número de Registro: 2002268

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PARÁMETROS PARA EJERCERLO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL CONFORME A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 912/2010.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1303. IV.3o.A.10 K (10a.).

Número de Registro: 2002269



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PUEDE EJERCERSE RESPECTO DE CUALQUIER ACTUACIÓN U OMISIÓN DEL ESTADO: ACTOS Y HECHOS.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1305. IV.3o.A.11 K (10a.).

Número de Registro: 2002270

CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1306. VII.2o.C.30 C (10a.).

Número de Registro: 2001276

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. HIPÓTESIS QUE PUEDEN SUSCITARSE EN SU APLICACIÓN EX OFFICIO POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y FORMA EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PROCEDER EN CADA UNA DE ELLAS.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1732. XXX.1o.2 K (10a.).

Número de Registro: 2001402

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1875. I.4o.A.2 K (10a.).

Número de Registro: 2000334

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU

COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2; Pág. 1100. XVI.1o.A.T.1 K (10a.).

Número de Registro: 2000084

DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4334. VI.1o.A.5 K (10a.).

### **Control convencional difuso ex officio en México.**

Por medio de este control se faculta a todo juez, a realizar dentro del entorno normativo que se pretenda aplicar al caso concreto haciendo, un enfrentamiento conforme a lo establecido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, para que en su caso si existe una disposición que más le favorezca o menos le restrinja, será la que el juez o cualquier tipo de operado jurisdiccional deberá de utilizar al resolver la causa que les fuera planteada. En consecuencia la resolución será dictada con parámetros diferentes a los proyectados por las partes, pero siempre en búsqueda de su mejor derecho.

El control convencional de officio, será aquel donde la manifestación directa de las disposiciones convencionales, las proporcionaran las partes y será la autoridad judicial quien las analizara, y determinara si son procedentes dichas manifestaciones dentro del causa planteada, que deberán ser todas en cuenta al momento de emitir la resolución al caso en concreto.

Cabe destacar que la labor de la autoridad judicial no es, el tomar o dejar de considerar normas internas contra las convencionales sino deben de armonizar el entorno jurídico al caso en concreto, utilizando los mecanismos de interpretación conforme. Adicionalmente los jueces deberán de aplicar el control constitucional material, esto es dejar de aplicar en su caso las disposiciones que sean contrarias o menos favorables a los derechos humanos en conflicto.<sup>39</sup>

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por medio de una tesis aislada ha determinado los parámetros de análisis que deberán de ser observados por los jueces al momento de ejercer el control convencional ex officio<sup>40</sup>:

a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;

b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;

c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y

d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

### **México. Después de la resolución del caso Radilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la resolución asuntos varios<sup>41</sup> 912/2010.**

---

<sup>39</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Serie cuadernos de jurisprudencia #7. El control de convencionalidad y el Poder Judicial en México, mecanismo de protección nacional e internacional de los derechos humanos. México, D.F., 2012. Pág. 61

<sup>40</sup> Época: Novena Época, Registro: 160526 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.) Página: 551  
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

<sup>41</sup> EXPEDIENTE VARIOS. LÍMITES A LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL CONOCER DE ESE TIPO DE ASUNTOS. Las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son preponderantemente jurisdiccionales, con algunas excepciones previstas en las leyes. Con independencia de ello, este alto tribunal recibe un gran número de promociones en las que se plantean consultas o solicitudes, sin que exista una causa específica que las genere conforme a las vías de impugnación

El contenido de dicha resolución, fue determinar el alcance de las obligaciones que le corresponderían al estado Mexicano así como al Poder Judicial de la Federación, en relación a las violaciones de derechos humanos, que se desprendían del contenido del expediente formado por tal motivo así como de la multicitada resolución.

El control de convencionalidad, implica enfrentar las normas internas del Estado, con la normatividad internacional (tratado o convención), en busca de un mejor o más amplio derecho. Es el andar en nuestro sistema jurídico de las disposiciones contenidas en los Tratados o Convenciones, que nuestro sistema carece o son menos protectoras o en su caso es menor su restricción, de ese derecho humano, que es observado en lo individual.

El control de convencionalidad es el medio por el que se concretiza el *ius commune*, pues ha sido el conducto donde convergen la protección de los derechos humanos nacionales e internacionales.

Eduardo FERRER MAC-GREGOR, como juez ad hoc de la Corte Interamericana de derechos Humanos, en caso Cabrera GARCÍA y Montiel FLORES Vs México, manifestó voto razonado, de su contenido se puede precisar que estableció consideraciones sobre el *ius constitutionale commune* en América al indicar:

*La interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional resulta ineludible y sus brazos comunicantes se estrechan. Por una parte, la “internacionalización” de diversas categorías existentes en el ámbito nacional de los Estados constitucionales se evidencian, especialmente con los pactos internacionales en materia de derechos humanos y con la creación de los sistemas universal y regionales de protección de los mismos, con la finalidad de que dichos instrumentos internacionales se aplique y sean realmente efectivos por los estados se transita de las tradicionales*

---

formalmente establecidas. Dicha situación motivó la creación de los expedientes “Varios”, cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la misma tiene la facultad para determinar por sí misma los límites que circunscriben sus funciones y, en general, su competencia, estando constreñida a otorgar una respuesta congruente a las promociones que reciba.

[https://www.scjn.gob.mx/Primera\\_Sala/Tesis\\_Aisladas/TEsis%20AISLADAS%202013\\_PRIMERA%20SALA.pdf](https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Aisladas/TEsis%20AISLADAS%202013_PRIMERA%20SALA.pdf)

*“garantías constitucionales” a las “garantías convencionales”, teniendo su máximo grado de desarrollo con las sentencias que dictan los tribunales internacionales.*<sup>42</sup>

## **1.4 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**

Expresión y contenido bloc de *constitutionnalité* tiene su formación en el derecho Francés, en los años setentas del siglo pasado.

Estamos en presencia de la una construcción doctrinal estructurada por el jurista Luis FAVOREAU, donde debemos de entender lo siguiente, son normas que sin estar contenidas en la constitución les otorga el mismo valor las cuales se imponen a la ley. Luis FAVOREAU, expone la noción de bloque ha servido por tanto, para identificar al conjunto normativo integrado por principios y reglas, al que debe reconocerse estatus constitucional.<sup>43</sup>

El bloque de constitucionalidad ha evolucionado incluyendo en su espacio virtual de fuentes de derecho, mismas que se les otorga reconocimiento constitucional. Cabe aclarar que hacia su interior el bloque de constitucionalidad no existe jerarquización de normas, sino que toda la normatividad que compete el citado bloque participa en el mismo rango.

En nuestro país el parte aguas en referencia al bloque de constitucionalidad que se ha dado, fue la resolución de la contradicción de tesis 293/2011,<sup>44</sup> pero cabe destacar que hasta el día de hoy faltan más pronunciamientos doctrinales al respecto así como más claridad de nuestro máximo Tribunal al tener el contacto con esta figura.

---

<sup>42</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Serie cuadernos de jurisprudencia #7. El control de convencionalidad y el Poder Judicial en México, mecanismo de protección nacional e internacional de los derechos humanos. México, D.F., 2012. Pág. 33

<sup>43</sup> ASTUDILLO, Cesar. *El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México*. Ed. Tirant lo Blanch. México, D.F., 2014. Pág. 23

<sup>44</sup> La contradicción de tesis 293/2011, ya se ha cita en este trabajo, ya que la Suprema Corte de justicia dentro de esa resolución también se pronunció en cuanto la jerarquización de normas y los tratado que contengan disposiciones de derechos humanos.

Ahora bien la acepción de bloque de constitucionalidad y la nueva reflexión de la Suprema Corte de Justicia al indicar *parámetro de constitucionalidad*, podrán ponerse a la vista desde una acepción descriptiva o prescriptiva, indica Cesar ASTUDILLO;<sup>45</sup> la primera se limita a realizar la exegesis de un fenómeno determinado a partir del ser, mientras que la segunda se dirige a aportar datos para la reconstrucción del fenómeno en estudio a partir del deber ser.

Antes de seguir con el tema precisemos que debemos de tener presente por parámetro constitucional, para ello me permito consultar el diccionario<sup>46</sup> temático, donde nos indica que:

Como en el léxico común, el lema parámetro indica un término de referencia, de confrontación, utilizado por los tribunales Constitucionales para verificar la constitucionalidad del objeto puesto en la base del juicio.

Cabe destacar que el contenido del parámetro (o, dicho de otra forma, bloque de constitucionalidad) no varía solo de un ordenamiento a otro, sino también en el interior de un mismo ordenamiento, bien puede cambiar, en función del tipo de juicio pendiente ante el Tribunal Constitucional.

En primer lugar. Hay que observar la extensión Textual de las Constituciones. Estas a veces, no incluyen directamente en el texto algunas materias constitucionales, por lo cual es necesario realizar una ampliación del parámetro con el fin de ejercitar un pleno control de constitucionalidad de las normas.<sup>47</sup>

Segundo lugar. El parámetro puede incluir otras fuentes, (no constitucionales) internas al ordenamiento nacional. Es el caso de las llamadas normas interpuestas es decir disposiciones sin rango constitucional, previstas en las constituciones cuya violación configura una violación indirecta de la carta.

---

<sup>45</sup> Ibídem. ASTUDILLO, Cesar. Pág. 35.

<sup>46</sup> FERRER MAC-GREGOR y otros coordinadores. Giorgia Pavani. *Parámetro de constitucionalidad. Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional*. Segunda edición. Universidad autónoma de México y el Instituto de ciencia Jurídicas. México, 2014. Pág. 999.

<sup>47</sup> Ejemplo histórico el *Bill of Rights* fue incorporado en la Constitución de los Estado Unidos de América algunos años después de su aprobación.

En tercer lugar, se debe evidenciar la propensión a medir fuentes externas al ordenamiento nacional como los tratados, las convenciones internacionales, y, sobre todo las declaraciones de la tutea de los derechos, típica de los países que en los últimos decenios han reformado o adaptado una nueva constitución.<sup>48</sup>

La circunstancia de que hoy la actividad de las cortes se basa especialmente en la judicialización de las libertades se da incluso por la ampliación o dilatación del parámetro: si ello se debilita, el rol de las cortes se relega principalmente a la actividad de regulación y vigilancia del reparto de *competencias*. Por el contrario, la ampliación del parámetro, en relación a la función, de tutela de los derechos, permite a las cortes expandir su propia actividad ocasionando en algunas ocasiones, la modificación del papel del órgano y de la relación con los otros órganos con tendencia a dilatar el parámetro no concierne solo a la justicia constitucional, sino involucra también a las jurisdicciones estatales y extra estatales. Cada vez más a los jueces se les pide realizar el control de convencionalidad de las normas a aplicar respecto a cartas de derechos universales o regionales.

Ahora bien como lo señala CRUZ VILLALÓN:

*[...]el sujeto de control, el derecho aplicable; es decir, el conjunto de ordenamientos que deben entrar en aplicación a la hora de resolver un determinado problema jurídico, se constituye como lo apunta GÓMEZ FERNÁNDEZ, [...]por aquellas disposiciones legales que el juez utiliza como referente a la hora de someter a control de ajuste constitucional las normas con rango de ley, las disposiciones, resoluciones o actos de los poderes públicos centrales o autonómicos y los actos ejecutados por los agentes del poder público.*<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Los precursores en este sentido son los ordenamientos Español y Portugués, por los cuales tales fuentes no son elevadas como normas parámetro, sino constituyen por lo regular un vínculo interpretativo de las normas dedicadas a los derechos. Los Tribunales Constitucionales de ambos países han potenciado así la tutela de los derechos fundamentales; sin embargo esto no significa abrir las puertas a nuevos derechos, sino usar los tratados internacionales “para configurar el sentido y alcance de los derechos que recoge la constitución, así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español.

<sup>49</sup> Citado. ASTUDILLO, Cesar. *El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México*. Ed. Tirant lo Blanch. México, D.F., 2014. Pág. 37.

## **Contradicción de tesis 293/2011.**

La contradicción de tesis 293/2011, se forma por la denuncia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la determinación del criterio que deberá de prevalecer, en relaciona a la posición jerárquica que deberán de tener los tratados internaciones suscritos por el estado Mexicano y que sean parte del sistema jurídico nacional, resoluciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo número 1060/2008, que fuera resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito dio lugar a las tesis aisladas de rubro:

1. “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACION CON LOS DERECHOS HUMANOS, DEBEN DE UBICARSE AL NIVEL DE A CONSTITITUCION”.<sup>50</sup>
2. “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTAN OBLIGADOS A EJERCERLO”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Época: Novena Época Registro: 164509 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T.45 K Página: 2079

TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1060/2008. \*\*\*\*\*, 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.

<sup>51</sup> Época: Novena Época Registro: 164611 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T.47 K Página: 1932

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.



En cuanto lo sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Distrito Judicial Federal, resolvió los siguientes Juicios de Amparo mismos que dieron origen a los siguientes criterios jurisprudenciales:

1. El amparo número 344/2008, mismo que dio origen a la tesis aislada de rubro “DERECHOS HUMANOS, TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MEXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUELLOS”.<sup>52</sup>

---

Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1060/2008. \*\*\*\*\*. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.

<sup>52</sup> Época: Novena Época Registro: 169108 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Agosto de 2008 Materia(s): Común

Tesis: I.7o.C.46 K Página: 1083

DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUELLOS.

Los artículos 1o., 133, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen respectivamente: que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga; que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, y los tratados acordes a la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; y, las bases, los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, según la tesis del rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (IUS 192867). De ahí que si en el amparo es posible conocer de actos o leyes violatorios de garantías individuales establecidas constitucionalmente, también pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los tratados internacionales suscritos por México, por formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión en el nivel que los ubicó la Corte. Por lo tanto, pueden ser invocados al resolver sobre la violación de garantías individuales que involucren la de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 344/2008. Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.

2. Mientras que al resolver el amparo directo número 633/2008, dio origen a la tesis aislada con rubro “JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”.<sup>53</sup>

Cabe destacar que la Corte dentro de esta resolución no se detuvo a realizar un estudio del que se pudiera observar la posición de nuestro máximo Tribunal sobre la figura de *parámetro* de constitucionalidad.

Pero realizo un estudio donde determino el alcance de las disposiciones que contengan derechos humanos contemplados en las convenciones o en los tratados, mismos que deberán ser enfrentados contra las articulaciones constitucionales, para observar que no sean contrarios a un principio constitucional, y de presentarse deberá de prevalecer el cuerpo constitucional. La Primera Sala se ha pronunciado al respecto, expresando que la delimitación legislativa debe someterse a los siguientes parámetros:<sup>54</sup>

*i) el contenido de los derechos humanos de fuente constitucional y los reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ii) la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y los precedentes vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; iii) el estándar de interpretación conforme y el principio pro persona referidos en*

---

<sup>53</sup> Época: Novena Época Registro: 168312 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Común

Tesis: I.7o.C.51 K Página: 1052

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México, en materia de derechos humanos, y dado el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de la República y otras. 23 de octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.

<sup>54</sup> Época: Décima Época Registro: 2006237 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a. CLXIII/2014 (10a.) Página: 798.

DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES QUE SE EMITAN CONFORME A LA CLÁUSULA DE RESERVA CONTENIDA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL.

*el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, y; iv) el principio de proporcionalidad, de manera que dichas leyes y la normativa que derive de éstas puedan considerarse objetivas y razonables, es decir, que persigan fines legítimos, sean idóneas, necesarias y proporcionales.*

La Suprema Corte de Justicia, indica que en nuestro sistema jurídico no existe un bloque de constitucionalidad, y se refiere a parámetro de constitucionalidad en diversas resoluciones posteriores. De lo anterior se puede observar que no hay que utilizarlos como sinónimos. Entendiéndose por bloque de constitucionalidad diversas estructuras legislativas, resoluciones emitidas por tribunales locales así como por tribunales trasnacionales, de donde se obtienen diversas posiciones que son las vertientes que se utilizaran para resolver la litis constitucional planteada por los gobernados. Sin olvidar. Que debemos de tener en cuenta que un parámetro será algo que se considera imprescindible y orientativo para la realización de un objetivo, en caso para la expresión de los tribunales por medio de sus resoluciones, ahora que forma y podrá complementar el parámetro de constitucionalidad, por lo que el parámetro de constitucionalidad en el Estado Mexicano, estará integrado por diversas estructuras legislativas así como resoluciones de trascendencia emitida por nuestros tribunales así como como las resoluciones emitidas por tribunales supranacionales donde México haya suscrito su adherencia.

CESAR ASTUDILLO, realiza un estudio comparativo de las dos figuras a las que nos hemos referido, del cual podríamos observar, grandes enfrentamientos doctrinales, mismos que debemos de tomar en cuenta.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibídem. ASTUDILLO, Cesar. Pág. 147.

BLOQUE	PARAMETRO
Acepción vinculada a contenidos, sustanciales.	Acepción vinculada a contenidos procesales.
Adquiere la totalidad de su sentido en la lógica del sistema de fuentes.	Adquiere su sentido en el derecho procesal constitucional.
Se dirige a agregar normas que comparten el mismo valor jurídico.	Se dirige a agregar disposiciones de diferente naturaleza, función y jerarquía.
Representa una unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales.	Representa la agregación eventual de derechos y reglas con propósitos procesales.
Tiene finalidad genérica de agregar bajo la misma cobertura constitucional a un conjunto de derechos.	Tiene la finalidad práctica de servir como premisa mayor del enjuiciamiento constitucional.
Se vincula a la noción de “Constitución material”, que hace de la ley fundamental la regla de reconocimiento y racionalización del sistema de fuentes del derecho, y particularmente, de las fuentes de los derechos.	Se vincula con la constitución procesal, la cual ubica a la norma suprema como criterio de enjuiciamiento práctico para la resolución judicial de las controversias pertenecientes a su esfera.

## CAPITULO II

### FEDERALISMO EN MÉXICO

*El marco jurídico del federalismo mexicano*  
*Presenta nuevos derroteros al iniciar el siglo XXI.*  
Eduardo FERRER MAC-GREGOR.<sup>56</sup>

#### 2.1 FEDERALISMO

El distinguido constitucionalista, Dr. CARPIZO realizó un estudio donde trata de justificar la indicación del Sistema Federal en el contenido de la Constitución de 1824:

Sobre el federalismo mexicano se han impuesto tres interpretaciones: la primera, que fue una imitación extralógica del sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, que México durante los tres siglos de la dominación española fue un gobierno central, que los pueblos no estaban acostumbrados, que el sistema federal servía para desunir lo que estaba unido; la segunda, que el sistema federal fue una necesidad, que sirvió para unir lo que se estaba unido, y que los últimos años de la Colonia existió un principio de descentralización política que constituye el germen del sistema federal mexicano; y la tercera, que los pueblos del Anáhuac en la época prehispánica se organizaron de acuerdo con la idea de régimen federal, que existió una confederación de los estados de Tenochtitlan, Tetzaco y Tlacopan, los que a su vez se estructuraron como federaciones.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> FERRER MAC-GREGOR Eduardo. *Hacia un derecho procesal constitucional local en México*. Visible GUDIÑO Pelayo José de Jesús y otros. Coordinadores. *Controles constitucionales*. Ed. Fudap. Querétaro, Qro. 2005. Pág. 39.

<sup>57</sup> CARPIZO, Jorge. *Estudios constitucionales*. México, D.F., 1983. Pág. 88

## Concepto

La palabra federación proviene del latín *federare* que significa unir o entrelazar; es decir, desde el punto de observación de la etimología, federación viene a ser la unión de partes aisladas o desintegradas, independientemente de sus caracteres específicos.

Desde la observación de lo jurídico, “federación es una forma de Estado basada en una organización política -Estado Federal-, donde cada miembro es considerado libre y soberano, en todo lo que sea concerniente su régimen interior y contribuye a la formación del Estado Federal”.<sup>58</sup>

El politólogo Héctor GONZÁLEZ URIBE, nos indica que debemos recordar que son dos los tipos de formas de organizar un Estado Unitario o Central y el Estado compuesto o federal, el criterio para llevar a cabo esta división o clasificación en el ejercicio de la Soberanía en el estado:

*“Si la soberanía en el estado se considera como una e indivisible y se ejerce sobre una sola población en un territorio, estamos en presencia de un Estado simple como pasa en las Repúblicas centralistas, a ejemplo de Francia, Colombia y otros países; sin por el contrario, el ejercicio de la soberanía está repartido entre un Estado mayor y una serie de Estados menores que contribuyen a formarlo, tenemos entonces el Estado compuesto o federal, del cual son muestras claras la república norteamericana, la mexicana y la argentina.”*<sup>59</sup>

Por lo anterior debemos de considerar en consecuencia como lo hace notar Humberto BENÍTEZ TREVIÑO, “que en el Estado Federal encontramos un territorio, formado por entidades federativas y el asiento de los órganos federales, una población propia que es la de la nación entera y un gobierno propio que es el federal al que está encomendada el ejercicio de soberanía constitucional; la Constitución es la ley suprema de todo el país; los

---

<sup>58</sup> SERRA ROJAS Andrés. *Teoría General del Estado*. Ed. Porrúa. México, D.F. Pág. 351.

<sup>59</sup> GONZÁLEZ URIBE Héctor. *Teoría política*. Ed. Porrúa. México, D.F. Pág. 403.

estados federados también poseen un territorio propio, un gobierno propio y una población propia.”<sup>60</sup>

El federalismo, como lo propone CARBONELL,<sup>61</sup> se presume que *es el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas de poder central que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico política traducido entre otras cosas en la posibilidad de crear por si mismos normas jurídicas.*

## **Antecedentes históricos**

### **El federalismo estadounidense**

El federalismo americano tuvo su inicio, con la independencia de las trece colonias inglesas, cuando unidas realizan un frente común para combatir en contra de la corona Británica, pues como ha sido analizado por diversos juristas la Convención de Filadelfia, da origen a la Constitución Estadounidense de 1787, de donde se podía apreciar las discrepancias ideológicas que existían entre ellas, en muchos puntos eran diferentes, pero pudieron realizar la estructura de la primera Constitución formal que hoy en nuestros días se sigue estudiando.

Con la Constitución de 1787, indicaba GARCÍA PELAYO: *[. . .] hace su entrada como concepto y forma de organización política, el estado federal pues las palabras “federal”, “federación”, y “el estado federal” no aparecen ni una vez en el texto de la Constitución de los Estados Unidos.*<sup>62</sup>

Debemos de tomar en cuenta que en la Constitución Norteamericana, tuvieron la visión de indicar en su contenido el principio de distribución de competencias entre la

---

<sup>60</sup> BENÍTEZ TREVIÑO V. Humberto. *La Sala Constitucional del Estado de México como expresión del Federalismo del siglo XXI*. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., México, D.F. Pág. 2

<sup>61</sup> CARBONELL SÁNCHEZ Miguel. *El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias*. Visible. CIENFUEGOS Salgado David. Compilador. Constitucionalismo local. Ed. Porrúa. México, D.F., 2005. Pag.84

<sup>62</sup>MORENO Daniel. *Derecho constitucional mexicano*. Pax-Porrúa. México, 1983. Pág. 334.

recién constituida Federación y las entidades federadas. Diferente posición se optó cuando se propone la finalidad de la forma de gobierno, en cuanto a la conservación de la paz pública y en su caso la defensa de los miembros, ya de forma interna como externa; el comercio y su reglamentación entre los estados y el exterior, y la dirección de las relaciones políticas de los estados miembros con el exterior.<sup>63</sup>

Ahora bien otro principio y que se debe de observar por la importancia que representa es el efecto soberano, por lo que en la Constitución de Norteamérica, también fue observado por los participantes, lo es señalado en un trabajo coordinado por Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, *“El sistema federal estadounidense, el pueblo conserva su soberanía básica, delega ciertos poderes al gobierno nacional y reserva otros a los Estados, siendo estos los que realmente formulan la política en el sistema federal, al ser mayores sus atribuciones. Esto es, el sistema estadounidense se configura como una federación no centralizada, en la que el poder se dispersa entre muchos centros que coordinan entre si a fin de que funcione la estructura política”*.<sup>64</sup>

Como lo han tratado de explicar diversos autores naciones o extranjeros en cuanto que los Estado Unidos de Norteamérica, el sistema federado implementado es considerado por muchos como el sistema federal puro ya que nace de estados libres y soberanos que deciden formar una federación, donde los estado celosos de sus atribuciones como lo indica Alicia HERNANDEZ, no están dispuestos a ceder en demasía tales atribuciones, lo que les permiten a dichas entidades federadas estar fortalecidas y dependientes de una centralización, con efectos de competencias bien delimitados, recordemos el caso conocido como *“AVENA”*<sup>65</sup>, donde habiéndose emitido medidas precautorias en contra del estado Americano por la Corte Internacional, no fueron acatadas por no tener competencia la federación, ya que el caso de referencia era de competencia estatal y no obligaba al estado de Texas, el mandamiento realizado por un Tribunal supranacional.

---

<sup>63</sup> HAMILTON A., MADISON J. y JAY J. *El federalista*. Fondo de Cultura. México, D.F., 2006. Pág. 92 y 93.

<sup>64</sup> HERNÁNDEZ CHÁVEZ Alicia. Coordinadora. *¿Hacia un nuevo Federalismo?* El Colegio de México/Fideicomiso de Historia de las Américas/Fondo de Cultura Económica. México, 1996. Pág. 155. Visible en SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. El federalismo. Serie Grandes Temas del Constitucionalismo Mexicano. Comité editorial, Dr. Armando de Luna Ávila. México, D.F. 2005. Pág. 23.

<sup>65</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. La corte internacional de justicia y la protección de los derechos del individuo: EL CASO AVENA. México, D.F. 2013.



## El federalismo. En México

*“El federalismo en uno de los factores importantes de nuestro sistema jurídico político, y sus relaciones con las ramas de poder así como con instituciones como los partidos políticos, grupos de presión, etc. Determinan y precisan el funcionamiento del gobierno”. Jorge Carpizo.<sup>66</sup>*

Mucho se ha indicado que nuestro sistema federal, fue creado al revés, que va en contra de las estructuras formales del sistema federal, que nosotros primero formamos una federación y después se dio el nacimiento de las entidades federadas.

Existen estudios históricos magistrales realizados por el Dr. Rafael ESTRADA MICHEL,<sup>67</sup> en diversos artículos así como obras completas, donde apasionadamente nos relata diversos momentos que se deben de tomar en cuenta en la actualidad para formación de la figura del federalismo en México, y más allá porque nos servirán dichos estudios de pauta para el fortalecimiento de los estados y sus municipios desde el marco teórico histórico de la figura.

Ahora bien otra corriente de estudio indica que el Federalismo Mexicano, no es una imitación del estadounidense, sino que se desarrolló a través de un largo desarrollo propio.

La primera República Federal se estableció el 31 de Enero de 1824, en el ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION, fueron considerados y aprobados diversos principios:

- Principio de soberanía;

---

<sup>66</sup> CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales: Porrúa, México, D.F., 2003. Pág. 81.

<sup>67</sup> Son visibles sus aportaciones en diversas publicaciones realizadas en obras múltiples, dentro de CONTITUCIONALIMO LOCAL, artículo Teoría constitucional en la profecía del padre MIER sobre la federación Mexicana. Copilado por David Cienfuegos Salgado, editorial Porrúa. México, D.F., 2005. Pág. 627.

- El derecho de adoptar la forma de gobierno y las leyes fundamentales, propias para el buen funcionamiento;
- La religión católica como única;
- El gobierno republicano, representativo y federal;
- Los estados integrantes libres y soberanos;
- La división de poderes;
- Gobierno tripartita en cada Estado.

La organización que se relata como lo han indicado diversos tratadistas se debió a la influencia del modelo americano. El régimen constitucional federal fue indicado en la primera Constitución Federal Mexicana, misma que fuera restituida por el Acta de Reforma de 18 de Mayo de 1847, así como por las Constituciones de 1857 y de 1917.

Al constituirse la República Federal se crearon los órganos necesarios para que dentro del territorio funcionaran dos órdenes jurídicos, el federal y el local, pero en nuestros días y debido al fortalecimiento del municipio y a las reformas constitucionales al artículo 105, debemos de entender tres niveles de orden jurídico, lo que los diferencia entre ellos, es el ámbito de competencia, en la actualidad esa formación ya fue estudiada por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, y su pronunciamiento lo indico cuando se desarrolla la tesis jurisprudencial (temática) de la jerarquización de normas. Ahora se deberá de estudiar ese ámbito de competencia en adición al territorio.

Ahora el paradigma ha cambiado por una reflexión de nuestro Tribunal Constitucional, donde al resolver la contradicción de tesis 293/2011<sup>68</sup>, forma y estructura las bases a seguir

---

<sup>68</sup>Época: Décima Época. Registro: 2006224 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Página: 202

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se

para todos los operadores jurídicos como se deben de observar las resoluciones de la Corte

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Interamericana de los Derechos Humanos, donde tiene a bien determinar que todas las resoluciones dictadas por ese Tribunal supranacional vinculan a nuestro país, entre otras vertientes que se pueden observar en dicha ejecutoria.

### **Preceptos constitucionales donde se contempla al Federalismo como forma de estado.**

Al realizar el estudio del cuerpo Constitucional nos damos cuenta cuales son los preceptos constitucionales donde se cimienta el sistema federal, concluyendo que son los artículos 39, 40, 41 y 116. Articulaciones Constitucionales que se analizaran para determinar el contenido que ofrecen para el fortalecimiento del Federalismo Mexicano.

Artículo 39 Constitucional.<sup>69</sup> Al realizar el estudio del artículo 39 de la constitución se aprecia que como indica Eduardo Andrade Sánchez, “es la Constitución de la Constitución”, ya que de este precepto se desprende el efecto soberano, que residirá en el pueblo, y lo más importante es que no lo pierde solo lo cede pero podrá recuperarlo en cualquier momento para su ejercicio.<sup>70</sup>

Ahora bien, ese efecto soberano hay que transformarlo, primero estudiábamos que tenía dos efectos uno interno y otro externo, que la soberanía no se pierde y que es imposible ceder parte hacia el exterior. En la actualidad, debemos de analizarlo desde la forma que la entidad federativa cede a la federación y la federación podrá ceder a organismos transnacionales, permitiendo al país, ser partícipe de ese tipo de jurisdicciones, ahora bien ese ejercicio trae consigo que debemos de adoptar las decisiones que se emitan por dichos Tribunales, sean vinculadas en nuestro actuar jurisdiccional, sino que efecto trae. El observar si la causa que nos ocupa ya fue analizada por dichos Tribunales, si fuera así, ya que siendo el mismo presupuesto, la autoridad se pronunciara a corde a dicha resolución ello para no cae en la circunstancia de resoluciones contradictorias, de no ser así eso solo

---

<sup>69</sup> Artículo 39. Constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

<sup>70</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada. Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Tomo II. Ed. Porrúa. México, D.F., 2004. Pág. 97.

indica que no estamos al pendiente de la Magistratura Constitucional universal y sus resoluciones.

Para el maestro Jaime Cárdenas, al analizar dicho precepto constitucional debemos de hacer hincapié en diversos puntos que por su propia naturaleza deberían ser conceptualizados para una mejor comprensión y sistematización del precepto, me refiero que nos propone estudiar, que se entiende por pueblo y si en verdad que el poder lo tiene el pueblo, así como el origen de las instituciones de las autoridades, de los poderes y de los organismos públicos es el beneficio del pueblo, esto se le conoce como legitimidad de ejercicio, es decir una autoridad no solo debe originarse en la voluntad del pueblo, sino que su funcionamiento debe estar en consonancia con la voluntad del pueblo.<sup>71</sup>

Artículo 40 Constitucional.<sup>72</sup> En este precepto lo relevante es analizar, que es república, democrática, federal, el derecho interno de los estados miembros del pacto federal. Donde República, proviene de los términos latinos *res*, *cosa*, y *publica*, perteneciente a la comunidad, república o república, significa lo que a todos nos concierne, lo que a todos nos atañe, lo que es de todos, el gobierno de la comunidad como algo en lo que tienen que ver todos aquellos que pertenecen a esa comunidad.

El efecto democrático, se entenderá como la voluntad de las mayorías seguidas por las minorías, en un efecto de integración. Donde no podemos dejar de tomar en cuenta la figura de régimen interior en adición a lo que plantea el Maestro Jaime CÁRDENAS, el efecto democrático traer consigo que se tengan en ello tres elementos:<sup>73</sup>

- Diversos Partidos políticos, con propuestas doctrinarias diferentes,
- El uso del sufragio, y que las elecciones sean de altura limpias y reconocimiento de quien haya ganado,
- El respeto a los derechos humanos.

---

<sup>71</sup> CÁRDENAS Jaime. Artículo 39. *La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Para entender. Ed. Nostra. Ediciones. México, D.F. 2007. Pág. 157.

<sup>72</sup> Artículo 40. Constitucional. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

<sup>73</sup> *Ibídem*. Pág. 160-163.

En adición debemos de tomar en cuenta, sobre el estado federal que es orden compuesto de normatividad que deberán ser validas en todo territorio nacional y una normatividad cuyo ámbito de validez se limita a la estructura del régimen interior de las entidades miembros de la federación, lo anterior se reduce a la esfera de competencia de las estructuras normativas en conflicto, de donde se debe de observar que no existe superioridad entre dichas entidades, lo que se debe de aceptar que se está en presencia de diversos ámbitos de competencia, los cuales no chocan ni se enfrentan.

Artículo 41 Constitucional.<sup>74</sup> Articulación constitucional donde se aprecian circunstancias indirectas para nuestra democracia ya que el poder que reside en el pueblo, se ejercita por medio de nuestros representantes que conforman los poderes, ellos elegidos por medio de las estructuras democráticas. Existen diversos medios de impugnación para la defensa de ese efecto democrático, hemos alcanzado una proyección importante en la protección de los derechos políticos, pero falta que nuestros cuerpos legislativos se pronuncien en la defensa del derecho electoral por el ciudadano, para que no tengamos que ceder esa legitimación activa de nuestro derecho a una organización política para hacerlo valer.

Artículo 116 Constitucional.<sup>75</sup> El planteamiento de la división de poderes, sus alcances y su integración. Hablar de un poder ejecutivo, representado en una persona, que deberá de ser electa bajo la forma de elección popular, el poder legislativo que se forma con la integración de las cámaras alta y baja, también electos de forma directa bajo el sufragio popular, aquí se inicia una problemática, la figura de la democracia delegada, ya que una muy importante cantidad de los miembros del poder legislativo son propuesto en una lista indicada por los partidos políticos y dependiendo el monto de votos obtenidos tendrán legisladores de representación proporcional, miembros ya no cubiertos con el manto del

---

<sup>74</sup> Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

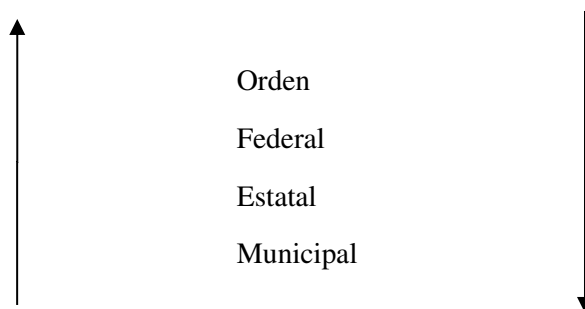
<sup>75</sup> Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

efecto democrático, el poder judicial, es o no un poder con efecto democrático, de forma cruda no lo es, se hace uso de la figura democracia delegada, para decir que efectivamente el poder judicial es un poder democrático, ya que un poder ejecutivo propone a los miembros del Poder Judicial y el poder Legislativo los ratifica.

El planteamiento de la postura clásica de la división de poderes, trae una línea imaginaria horizontal donde se colocaran los diversos poderes, ya que dicha línea servirá adicionalmente para delimitar el poder, ya que no podrán ir más allá del ámbito de sus competencias, pero basando dicha posición en la teoría de pesos y contrapesos, lo cual dará como resultado el auxilio de los poderes para llevar a la conclusión diversos actos de su competencia.

Pero en nuestros días, como lo han hecho valer diversos tratadistas, el poder no solo se debe tutelar de una forma horizontal sino deben contemplar su competencia en sentido vertical.

La división en sentido vertical, se observa basado en dos líneas una iniciada de abajo hacia arriba y la otra en sentido contrario. En nuestro país podríamos ejemplificarlo de la siguiente forma:



De donde se desprende que la Federación podría ir hacia abajo contra el Estado y el Municipio; el Estado sube contra la Federación y baja contra el Municipio y el Municipio subiría contra el Estado y la Federación, a hacer valer su ámbito de competencia.

Como lo ha expresado Karl LOEWENSTEIN, por muchos considerado como uno de los padres del constitucionalismo moderno: el federalismo es una institución de la distribución vertical del poder, esta distribución del poder implica necesariamente una limitación tanto para el estado general como para los estados miembros, se lleva a cabo mediante el otorgamiento o concesión de facultades entre ellos, la forma en que se realiza, el monto de lo que se otorga o concede, el punto de equilibrio de tal distribución está directamente relacionados con las circunstancias y condiciones de cada estado en particular.<sup>76</sup>

En nuestro país se logró con la reforma constitucional al artículo 105, Constitucional y el nacimiento de su Ley Reglamentaria, una estructura procesal eficiente así como eficaz para la salvaguarda de los órdenes de competencia, me refiero a la Controversia Constitucional, aunque ya existía su utilidad era casi nula por carecer de una ley reglamentaria así por la hegemonía en el poder, es el caso histórico conocido como Delicias (Ciudad Delicias, Chihuahua), la instrucción procesal se tomó del juicio de amparo y es el caso que la Corte al pronunciarse dictó la procedencia de la misma, pero en ningún momento indicó observación alguna sobre el procedimiento realizado por las partes. Ahora bien en la nueva estructura procesal no fue suficiente ya que nuestro Tribunal Constitucional ha manifestado que no puede estarse sometidos a un “sentido literal o limitativo sino armar una armonía con las normas que disponen el sistema federal y el principio de división de poderes”,<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> TRIGUEROS GAISMAN, Laura. *El federalismo en México autonomía y coordinación de las entidades federativas. Derecho constitucional comparado*, México-Estados Unidos. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1990. Pág. 247.

<sup>77</sup> Época: Novena Época, Registro: 170808, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 21/2007, Página: 1101

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVE LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA.

El citado precepto no debe interpretarse en un sentido literal o limitativo ni que establezca un listado taxativo de los entes, poderes u órganos legitimados para promover controversias constitucionales, sino en armonía con las normas que disponen el sistema federal y el principio de división de poderes, con la finalidad de que no queden marginados otros supuestos; de ahí que la aplicación del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe favorecer hipótesis de procedencia que, aunque no estén previstas expresamente en su texto, sean acordes con la finalidad manifiesta de ese medio de control constitucional, que es precisamente salvaguardar las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución Federal.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora



aunado con lo dispuesto por diversas articulaciones se desprenden los entes legitimados para hacer valer dicho procedimiento ante nuestro Tribunal Constitucional, de donde se puede observar que la Controversia Constitucional es el mecanismo procesal idóneo para tramitar ante el Tribunal Constitucional cualquier violación sobre invasión de esferas de competencia.

En la actualidad la división de poderes no debe de ser observada desde el punto de vista de legalidad si no que debe ser analizada desde la expectativa de un Estado Constitucional, como lo propone Michael NÚÑEZ, “El principio de la división de poderes, desde el punto de vista institucional, tiene que ser interpretado siguiendo las exigencias del Estado Constitucional de lo que se sigue que las funciones tienen que ser adecuadas con la realidad. . .”<sup>78</sup>

De lo anterior, ahora tendremos que observar para su estudio que es un Estado Legalidad y que es un Estado Constitucional; el primero será el Estado que su actuar estará sometido a lo que establezcan las normas, en un entendido de que se estará en una plena y verdadera división de poderes, que se observaran y tutelarán los derechos humanos y que la constitución contendrá diversos mecanismos procesales para hacer valer el principio de legalidad; el segundo el Estado Constitucional, donde los preceptos constitucionales serán los que fijen el ámbito de competencia, de los poderes que forman el Estado, pero en adición deberá de contar con los elementos: democrático, liberal así como una real división de poderes. Los elementos que se indican no permitirán que se pueda dar la figura de “*los poderes metaconstitucionales*”,<sup>79</sup> concepto acuñado por el Dr. Carpizo<sup>80</sup>.

---

Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 21/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

<sup>78</sup> NÚÑEZ TORRES Michael. *La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución*. Ed. Porrúa. México, D.F., 2006. Pág. 143.

<sup>79</sup> 1. Jefatura del PRI, 2. Designación de su sucesor, 3. Designación de los gobernadores, 4. Remoción de los gobernadores. CARPIZO, Jorge. *El presidencialismo mexicano*. Siglo XXI, México, D.F. 2006

<sup>80</sup> Ob. Cit. CARPIZO, Jorge. Pág. 348.

Otra posición que debemos de tomar en cuenta es la de Rubio LLORENTE, “los poderes del estado son las instituciones concretas que forman y actúan la voluntad del Estado en general o de cada Estado Particular”.<sup>81</sup>

Con dicha observación podremos hacer valer que los elementos del sistema vertical pudieran ser diferentes partiendo de la teoría de los mínimos. El sistema vertical, puede ser un gran laboratorio de cambios constitucionales, y ello permitirá el fortalecimiento de los niveles que son parte de este sistema.

A partir de la teoría de los mínimos, entenderemos que lo que se establezca en la Constitución Federal será lo mínimo que deberán de observar las entidades federativas y lo que incrementen en cuanto a los derechos del gobernado cada una de las entidades federadas será acorde a las posibilidades de reacción de cada una de dichas entidades.

## **El municipio**

El fortalecimiento del municipio en la nueva estructura del federalismo, desde la realización a la reforma al artículo 105 Constitucional y el nacimiento de la ley reglamentaria, en ese momento se fortalece la división de poderes en sentido vertical donde nace la legitimación del municipio de ir contra el estado o la federación en un momento determinado donde se vea lesionada su ámbito de competencia, aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia ha manifestado la legitimación activa del municipio para hacer uso de los medios de control constitucional.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> RUBIO LLORENTE Francisco. *Los poderes del Estado*. En el libro España: Un presente para el Futuro, las Instituciones, Tomo II Instituto de Estudios Económicos, Madrid. Pág. 51 Visible en NUÑEZ Torres Michael. La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución. Ed. Porrúa. México, D.F., 2006. Pág. 143.

<sup>82</sup> Época: Novena Época, Registro: 176928, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 134/2005, Página: 2070

MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.

A partir de la reforma al citado precepto en mil novecientos ochenta y tres los Municipios han sido objeto de un progresivo desarrollo y consolidación de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad a través de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados. Asimismo, como consecuencia de la reforma al artículo 105 de la

Aunado al fortalecimiento que se les dio, en la reforma al artículo 115 constitucional donde se inicia una batalla por la autonomía económica y política en la toma de sus decisiones.

### **La propuesta jurisprudencial, de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, sobre el Federalismo.**

El fortalecimiento del sistema federal y las competencias de órganos creados por los estados han estado en pugna en los últimos años, donde sujetos que no creen que el estado es cada día más independiente de la federación por su ámbito de competencias, la Corte Suprema de justicia, por medio de sus decisiones ha cambiado la óptica de ver estos planteamientos, ya que con el procedimiento de controversia constitucional, donde su procedencia es la violación de ámbitos de competencias, ha podido pronunciarse e indicar la constitucionalidad de actos creados por organismos creados por el Estado, que en ningún momento violentan competencias de la federación.<sup>83</sup>

---

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al Municipio la potestad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defender una esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas. Por último, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo la sustitución, en el primer párrafo de la fracción I del mencionado artículo 115, de la frase "cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa", por la de "cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa", lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evolución del Municipio, desde la primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite concluir la existencia de un orden jurídico municipal.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarías: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 134/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil cinco.

<sup>83</sup> Novena Época. No. Registro: 170284. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P. VIII/2008. Página: 1868

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. SU CREACIÓN COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO ENCARGADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, ES CONSTITUCIONAL.

La característica principal que distingue a los órganos constitucionales autónomos es que atienden necesidades o funciones torales del Estado que no han sido tomadas en cuenta, o bien, que no se ha considerado conveniente que las realicen los poderes tradicionales. En este sentido, si el órgano reformador de la Constitución del Estado de Jalisco decidió crear un órgano público autónomo denominado Instituto de Transparencia e Información Pública (independiente de los tres poderes constituidos) como garante del derecho a la información en la entidad, porque a su juicio, de esa forma se cumple cabal, eficazmente y con mayor transparencia con ese derecho, no se viola disposición alguna de la Constitución Política de los Estados

En el otro aspecto cuando se analiza el precepto de Supremacía Constitucional, por nuestro máximo Tribunal, es de observarse que el precepto en estudio el artículo 133, en su contenido no se consagra garantía individual alguna, si no que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los Tratados celebrados con potencias extranjeras, negociados por el Ejecutivo de la República, ratificados por el Senado constituyen parte del sistema jurídico de la toda la unión, debiendo los jueces de cada Estado sujetarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera existir en las Constituciones o leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal porque deben permanecer en unión con la federación según los principios de la ley fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben de predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la constitución local correspondiente. Esta es otra de las arduas tareas de nuestro Tribunal Constitucional el separa las legislaciones en razón de su competencia y en su caso contradictorias con el pacto federal.<sup>84</sup>

---

Unidos Mexicanos, tomando en cuenta, por una parte, que la garantía constitucional del derecho a la información contenida en el artículo 6o. de la Ley Suprema deja implícitamente a cada una de las entidades federativas su regulación y por ende, el establecimiento de las estructuras necesarias para el adecuado desarrollo de la garantía en comento en el ámbito de su esfera territorial y, por la otra, que conforme a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número VIII/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

<sup>84</sup> Novena Época. No. Registro: 180240. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 80/2004. Página: 264

Época: Octava Época Registro: 206982 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Civil Tesis: 3a. LXXII/91 Página: 37

COMPETENCIA POR RAZON DEL FUERO FEDERAL O LOCAL. ES PRORROGABLE EN EL CASO DE COMPETENCIA CONCURRENTES, PUDIENDOSE CONVENIR PREVIAMENTE EL FUERO AL QUE SE SOMETEN LAS PARTES.

Establece el artículo 104, fracción I, constitucional que corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano pero que

---

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

cuando sólo se afecten intereses particulares podrán conocer también de estas controversias, a elección del actor, los tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Por tanto, cuando se está en el supuesto de competencia concurrente porque se trate de asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales y sólo se afecten intereses particulares, el precepto citado de la Carta Magna autoriza la prórroga de jurisdicción por razón del fuero federal o local, ya que las partes pueden convenir libremente el fuero al que desean someterse. En efecto, si bien el precepto constitucional dispone que queda "a elección del actor" el que conozca de la controversia el juez federal o el local, lo cierto es que no existe dispositivo legal ni razón lógica jurídica alguna para establecer que tal elección deba efectuarla cuando adquiere la calidad de actor por haber iniciado el juicio ante el tribunal federal o local, sino que dicha elección puede llevarla a cabo con anterioridad, pactándola en un contrato o convenio, es decir, previendo cualquier controversia sobre la interpretación o cumplimiento de un contrato o convenio, puede prorrogarse por consentimiento expreso la jurisdicción por razón del fuero federal o local, de tal suerte que en caso de controversia, debe entenderse que la parte que la inicia y adquiere por ende la calidad de parte actora ya había elegido determinado fuero y a él deben someterse las partes, siempre que se esté en el caso de competencia concurrente, que es en el que autoriza la Carta Magna la prórroga de jurisdicción por razón del fuero. Lo anterior no significa que el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles sea contrario a la Constitución Federal por autorizar sólo la prórroga de la jurisdicción territorial porque si a las disposiciones legales ordinarias debe dárseles una interpretación armónica con la Ley Fundamental para lograr una legislación coherente, debe entenderse que el precepto procedimental citado prevé y regula la prórroga de jurisdicción territorial, pero no prohíbe la específicamente contemplada por la Constitución Federal, en su artículo 104, fracción I.

Competencia civil 208/90. Suscitada entre los jueces Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 15 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

## **2.2 Régimen interior**

De una revisión sistémica de la constitución se podrá indicar que lo que no está previsto para una competencia federal le corresponde a las entidades federadas, con excepción a la competencia municipal (delimitada bajo lo dispuesto por artículo 115 constitucional).

Del contenido del artículo 115 Constitucional, tomaremos lo indicado sobre el régimen interior. Ya que el régimen interior de las entidades federadas está íntimamente ligado al concepto de soberanía. Cada entidad federativa aspira a materializar sus decisiones en su propio ámbito territorial, de esa manera esa capacidad decisoria constituye una forma de soberanía, limitada a su interior.<sup>85</sup>

Cada estado es soberano en cuanto a las decisiones tomadas hacia dentro de la estructura del estado, basándose en el régimen de competencia interior previamente delimitada por diversas disposiciones constitucionales. Régimen interior al que nos referimos será la pauta de indicar el concepto de soberanía dentro de una entidad federada.

En cuanto al alcance del efecto de soberanía, de los estados miembros del pacto federal cabe destacar que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, se ha pronunciado, indicando que el contenido del artículo 40 Constitucional, de su texto se desprende que el estado es libre y soberano, pero que dicho principio nunca debe de enfrentarse con el contenido del pacto federal.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> CAMARGO GONZÁLEZ Ismael. *El régimen interior de las entidades federativas*. Visible GAMIZ Parral *Máximo N. Derecho Constitucional Estatal*. Ed. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2009. Pág. 71

<sup>86</sup> Novena Época, No. Registro: 180240, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 80/2004, Página: 264

Sin llegar a entender que dentro del sistema federal existe una superioridad sobre la estructura local, lo que tenemos que observar y sentir es que estamos en presencia de dos sistemas. Que no chocan que no se contraponen, ya que son delimitados en base a sus efectos de competencias. Debe de aclararse que el aspecto de espacio o territorialidad en cuanto la aplicación de la normatividad, es lo que podría significar, su esfera competencia ya que su validez y aplicación se extiende a todo el territorio que forma la federación.

Debiendo tomar en cuenta que leyes de carácter federal son realizadas de acuerdo a las facultades que el artículo 73 constitucional y en contraindicación en el artículo 124 constitucional indica que por exclusión la competencia para legislar otorgada a los

---

#### SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.



estados. En conjunto indican las limitaciones de competencia para la elaboración de contenidos legislativos, los cuales en todo momento deben ser observados por las partes.

Al tomar en cuenta el contenido del alcance conceptual de soberanía, debemos de estar ciertos que los estados que conforman la federación como sistema de gobierno, son entes soberanos, soberanía que ha permitido la formación de las jerarquías de gobierno: federal o estatal (local). Y de ahí se deriva la competencia ahora una federal y otra estatal. No hay que perder de vista el *efecto de competencia*. Ya que para la creación y fortalecimiento de la federación las entidades federativas cedieron parte de sus facultades.

### **Características**

1. Los estados federados preceden a la creación del Estado Federal y por consecuencia los estados federados conservan su propia identidad.
2. Dualidad de jerarquías;
3. Ceden atribuciones;
4. No existe relación de supra a subordinación, (es por lo que los funcionarios de las entidades federadas no dependen de las autoridades de la federación) y
5. Esfera de competencia.<sup>87</sup>

### **Facultades indicadas a los Estado miembros de la Federación**

Alcances del artículo 124 constitucional. Las facultades que no están expresamente concedidas por la constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

---

<sup>87</sup> CARMAGNANI, Marcelo Ha expresado que: “El principio federal indicado en las constituciones que contenga esa estructura de gobierno, se sustenta en la existencia de dos esferas dotadas de cierta autonomía, la del gobierno federal y la de los gobiernos estatales. CARMAGNANI, Marcelo (coordinador). Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina. El Colegio de México- Fondo de cultura económica. Pág.9

Cabe aclarar que esta disposición constitucional no ha sufrido modificación alguna, sigue siendo el texto original y aún vigente.

Diversos tratadistas indican, que es una forma norteamericana para señalar ámbitos de competencia. En nuestro país, de la norma suprema, se puede desprender que la Federación así como el Municipio, son los entes de poder que tienen delimitadas sus facultades y atribuciones, pero no así las entidades federadas por lo que debemos entender que si no está señalado expresamente para una estructura de gobierno (federación o municipio), le corresponde al estado.

De la propia constitución se pueden apreciar una serie de principios a la problemática que se puede presentar sobre ámbitos de competencia, facultades que se desprenden de diversas articulaciones constitucionales:

- a. Facultades atribuidas a la Federación;
- b. Facultades atribuidas a las entidades federativas;
- c. Facultades prohibidas a la Federación;
- d. Facultades prohibidas a las entidades federativas;
- e. Facultades coincidentes;
- f. Facultades coexistentes;
- g. Facultades en auxilio y
- h. Facultades que emanan de la jurisprudencia.

Lo que indica es que las entidades federadas no están limitadas como para legislar, pero lo que hay que descubrir la estructura infinita por apreciar como de su competencia ya que el actualizar al estado a las nuevas estructuras económicas, sociales, políticas, jurídicas, etc., existe una línea inagotable donde las entidades federadas podrán legislar sin trastocar a la federación, nuestro Tribunal Constitucional ha dado en varias ocasiones el aval a los estados donde se asienta su legitimación para legislar al respecto. Y las cuales se podrán identificar de la siguiente manera:

- a. Normas estrictamente federales;
- b. Normas estrictamente locales;

- c. Normas federales solo por su ámbito espacial de validez y
- d. Normas locales solo por ámbito especial de validez.

## **Armonización, unificación y colaboración**

### **Armonización**

Dentro de sistema federal, la armonización normativa, debe de entenderse como la forma idónea por lo que el derecho local, se llega a asemejar al derecho de las entidades federadas, al tiempo de realizar o tomar las medidas propias para conservar su identidad como derecho local.

Por medio de esta figura, se presenta el principio de espejismo legislativo, ya que la semejanza entre las estructuras de ley de la misma materia es muy alta. En la misma circunstancia estaban las constituciones locales pero a raíz de la reforma integran en el estado de Veracruz, diversas entidades han realizado ajustes significativos en cuanto al apartado de los derechos humanos.

Del resultado de la armonización indicada en el estado trae como consecuencia otra figura. Esta figura, ha sido duramente criticada por la poca inventiva legislativa de nuestros legisladores, ya que en muchos de casos solamente copian y copian mal, pero en estos momento donde gran carga de la eficacia de las normas se la han trasladado a la Suprema Corte de Justicia, para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad o en su caso por constitucionalidad o inconstitucionalidad; que al dictar sus resoluciones pueden tener un alcance mayor en cuanto su manto protector, ya que las normas analizadas, en caso pueden ser tomadas, en adición diversas entidades federativas al ser tomadas como legislaciones análogas. Como es el caso de la siguiente jurisprudencia:

Época: Décima Época, Registro: 2009591, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación,

Publicación: viernes 10 de julio de 2015 10:05 h, Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.)

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y *LEGISLACIONES ANÁLOGAS*).

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el

otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

#### PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 32/2013, dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.15 C (10a.), de rubro: "DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3051, con número

de registro digital 2005339, y el juicio de amparo directo 339/2012, que dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.10 C (10a.), de rubro: "DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3050, con número de registro digital 2005338; y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1020/2013 (cuaderno auxiliar 44/2014), en el cual sostuvo que, conforme a lo establecido en la Norma Fundamental, en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, lo que por sí mismo excluye la posibilidad de resolver asuntos en conciencia; que el artículo 4o. de ese mismo ordenamiento establece el interés superior de la ley en preservar la unidad familiar, lo que conlleva a establecer, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el matrimonio es una de las bases de la familia, por ende, constituye una figura jurídica en comento implica, aunque de naturaleza sui géneris, un contrato civil que no puede disolverse unilateralmente, sino que el vínculo jurídico que se crea con su celebración sólo puede desaparecer cuando se surtan los supuestos establecidos expresamente en la ley.

Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La aproximación, de las norma jurídicas, misma que puede ser voluntaria y obligatoria. Sera voluntaria cuando la entidad federativa, tiene la facultad de decisión si realiza la adecuación a su normatividad o no, y será obligatoria cuando la estructura normativa propiamente constitucional impone la obligación de ajustarse a la normatividad estándar. Del análisis de esta figura, nos lleva a determinar el soporte de fondo de la omisión legislativa, en cuanto a la obligación de adecuar la normatividad local con la federal, la primera ocasión que fuera presentada esta opción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene documentado como el caso *SAN PEDRO*.

## **Unificación**

Figura que debemos de entender, la trasferencia de facultades para legislar sobre la misma materia, en cuanto al aspecto jurisdiccional es el tomar el criterio de la forma que se utilizó para resolver así como el precedente que se desprenda de la resolución.

## **Colaboración**

Principios, reglas y mecanismos, previstos en las constituciones de los estados miembros de la federación, será lo que permita cierta integración y que ello dará como resultado una colaboración. Ante los mismos estados federados así como con la federación.

## **Coordinación o concurrencia**

El régimen constitucional, se pueden analizar las relaciones del sistema de colaboración dentro de sistema federal mexicano y podríamos indicar que se admiten cuatro modalidades básicas. Ya que al hacer referencia a la “coordinación o la concurrencia”.

- a. coordinación como principio de organización;
- b. coordinación como título competencial formal o procedimental;
- c. coordinación como fórmula de cooperación y
- d. concurrencia como título competencial material.

Cuando alcancemos como estado el significado a de la coordinación, será cuando los niveles de gobierno actúen en una posición de igualdad jurídica, ya que ninguno tiene capacidad de dirección, ni formal ni material, en el ámbito de competencias de los otros niveles. Es decir las partes involucradas ejercen de común acuerdo ciertas competencias que la constitución prevé para ejercitarlas de forma separada e independiente, sin que en ningún momento ninguna de ellas tenga facultad de imponerse a las demás y condicionar así el ejercicio de las competencias de los involucrados.<sup>88</sup>

Fenómeno contemplado en nuestra constitución la figura de la concurrencia, misma que debemos de entender como una atribución de una competencia material o sustantiva también puede ser representada por los niveles de gobierno, mismo que le permitirán incidir sobre las competencias de los otros niveles en su aspecto sustantivo. Ahora bien esta figura no debe ser tomada en cuenta como en otros sistemas jurídicos donde contempla que se pueden legislar ambos sobre la misma materia, ambas estructuras. En México el alcance que se tiene es la ejecución de la normatividad, por ambos esquemas de gobierno.<sup>89</sup>

### **Competencia concurrente o coincidente**

Se contemplaban originalmente como una excepción dentro del sistema federal, como la finalidad de resolver cuestiones técnicas en cuanto su aplicación o en su distribución de competencias. Las facultades concurrentes son las que ejercitan las entidades federativas en cuanto la Federación no haya utilizado su estructura de derecho.

---

<sup>88</sup> SERNA DE LA GARZA José María. *El sistema federal mexicano*. Editorial Porrúa. México, 2009. Pág. 102

<sup>89</sup> *Ibidem*. SERNA DE LA GARZA José María. Pág. 105



En cuanto las coincidentes son las que realizan de forma simultánea los dos entes de gobierno.

El maestro Jorge CARPIZO,<sup>90</sup> en cuanto a las facultades coincidentes expresa una división en cuanto su ámbito de aplicación: de forma amplia o de forma restringida. Será de forma amplia cuando la Constitución no otorga a ningún orden de gobierno la facultad para expedir las bases o criterios de división. Este tipo de competencia en nuestro país solo podrá presentarse, en cuanto a la reglamentación de los Derechos Humanos.

Y de forma restringida, cuando se concede a un nivel de gobierno las atribuciones para indicar las bases o criterios de división de las materias. Por su parte de forma restringida son las más comunes en nuestro sistema Constitucional. Para indicar los niveles de operación de dicha competencia, y con lo anterior se está, a un efectivo equilibrio del poder.

### **Competencias coexistentes y de auxilio**

Donde la facultades coexistentes, se le otorga al legislador federal para indicar los criterios de división de atribuciones en la leyes federales secundarias. El contenido constitucional no contempla ningún parámetro para medir el efecto de la competencia hacia los diversos órdenes de gobierno, es por lo que no es operante este tipo de competencia en nuestro país, ya que puede presentar diversas confusiones. Que en su momento deberán ser sopesadas e indicadas por medio de resoluciones de nuestro máximo tribunal.

Competencias que emanan de la Jurisprudencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo la facultad de ser el intérprete de nuestra Constitución, utilizando los mecanismos interpretación así como de argumentación

---

<sup>90</sup> CARPIZO, Jorge. *La Constitución Mexicana de 1917*. Porrúa. UNAM. México, D.F. 1990. Pág. 253.

jurídica podrán disipar las confusiones que se presenten en su caso para delimitar la competencia, sobre los niveles de gobierno en sentido vertical.

## **SEGUNDA PARTE**

### **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

## CAPITULO I

### SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

#### 1.1 COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

Concepto.

Para Fernando FLORES GARCÍA.<sup>91</sup> Encuentra su raíz etimológica en las voces latinas *competentia*, *ae apto*, *competente*, *conveniencia*. En castellano se usan como sinónimos los vocablos aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia, disposición.

En el sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. La competencia, como concepto específico, obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales.

El artículo 16 constitucional, es donde se encuentra el contenido constitucional del término de competencia.<sup>92</sup> Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

#### Competencia Constitucional

Se entiende como la capacidad que conforme a los contenidos constitucionales, corresponde a una autoridad para intervenir en determinado procedimiento, ello constituye una garantía individual<sup>93</sup> en los términos de lo contemplado por el artículo 16 “... Constitucional... mandamiento escrito de la autoridad competente”, en caso de no respetarse ese precepto se puede plantear como una violación directa a la Constitución.

---

<sup>91</sup> FLORES GARCÍA, Fernando. Competencia. Visible en: VALADES, Diego. Presidente Diccionario Jurídico Mexicano. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, D.F. 2005. Pág. 639.

<sup>92</sup> Primer párrafo del artículo 16 Constitucional, Constitución Política de México.

<sup>93</sup> Entendiendo por garantía constitucional, los mecanismos procesales para salvaguardar la supremacía constitucional.

## 1.2 JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

La opinión de procesalistas clásicos que se deben de tomar en cuenta para determinar el alcance teórico de la figura de jurisdicción.<sup>94</sup>

El primero D'ONOFRIO, la define como “la facultad conferida al juez al declarar la voluntad de la ley, con efecto obligatorio para las partes y en relación al objeto de tal declaración y de efectuar todo cuanto la ley le ordena o le consiente para realizar tal fin.”

El segundo CHIOVENDA. Sostiene las mismas ideas en términos semejantes: “es la función del estado que tiene por fin la actuación la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actitud de los particulares o de los otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley sea de hacerla prácticamente efectiva.”

Para Ugo ROCCO, la tercera opinión, con el deseo de abarcar todos los aspectos que encierra el concepto, sostiene que “jurisdicción es la actividad con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviniendo a petición de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, se sustituye a los mismos en la actuación de la norma que tales intereses ampara, declarando, en vez de dichos sujetos, que tutela concede una norma a un interés determinado, imponiendo al obligado, en lugar del titular del derecho, la observancia de la norma realizando, mediante el uso de su fuerza coactiva en vez del titular del derecho, directamente aquellos intereses cuya protección está legalmente declarada”.

Eduardo J. COUTURE define jurisdicción como: función pública, realizada por órganos competentes del estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Citado por. BECERRA BAUTISTA, José. *El proceso Civil en México*. Porrúa. México, D.F., 2003. Pág. 5.

<sup>95</sup> COUTURE, Eduardo. *Fundamentos del derecho procesal civil*. Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1958. Pág. 40.

El pensamiento y estructura de los procesalistas contemporáneos tiene pequeñas modificaciones, OVALLE FAVELA, indica por jurisdicción, como la función que ejercen órganos del estado independiente o autónomos, a través del proceso, para conocer de los litigios o controversias que les planteen las partes y emitir su decisión sobre ellos; así como para en su caso, ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia.<sup>96</sup>

Para Domingo GARCIA BELAUNDE, jurisdicción constitucional, la separa en dos conceptos de todos conocidos y por muchos ya analizados donde jurisdicción, es un atributo del Estado para decir el derecho, es decir declararlo, aplicarlo y hacerlo efectivo, referido generalmente a conflictos, diferencias o acciones que buscan la paz social, ahora solo habría que agregar Constitución.<sup>97</sup>

### **Diversas tipologías de jurisdicción constitucional y los sistemas de control de constitucionalidad que operan en América Latina.**

Se ha desarrollado diversas clasificaciones sobre los tipos de jurisdicción constitucional acorde al pensamiento y línea de estudio de diversos tratadistas. Nos permitimos señalar algunas en la cuales soporta el sustento teórico de diversos sistemas que en la actualidad se encuentran en práctica:

#### **La tipología de Manuel GARCÍA PELAYO**

Realiza una clasificación de los tipos de jurisdicción constitucional atendiendo simultáneamente a dos criterios: la existencia o no de una jurisdicción especializada en la

---

<sup>96</sup> OVALLE FAVELA, José. Teoría general del proceso. Oxford. México, D.F., 2010. Pág. 112.

<sup>97</sup> GARCIA BELAUNDE, Domingo. *Jurisdicción Constitucional*. Visible en: FERRER Mac-gregor, Eduardo. Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional. Segunda edición. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2014.

materia, como así mismo, si dicha jurisdicción es centralizada o descentralizada.<sup>98</sup> Así la clasificación permite distinguir los siguientes tipos de jurisdicción constitucional:

a) *Jurisdicción descentralizada y no especializada*. Esta estructura existe en el caso de los países donde la jurisdicción constitucional es desarrollada por todos los tribunales ordenados de justicia.

Históricamente nace en Estados Unidos con el fallo *Marbury vs. Madison*, seguida por algunos países de América Latina, entre los que destacan Argentina y Honduras.

*Jurisdicción descentralizada especializada*. En este caso nos encontramos con órganos creados con el único objeto de concretar la defensa de la Constitución y su supremacía formal y material, por medio de una serie de órganos distribuidos a través del territorio nacional.

b) *Jurisdicción centralizada y no especializada*. Se refiere cuando la jurisdicción constitucional se concentran en un solo órgano que constituye normalmente la cúspide de la pirámide de la judicatura ordinaria.

Como está contemplada en Uruguay y en Panamá entre otros, donde las Cortes Supremas concentran el control de constitucionalidad en sus manos, junto con las demás competencias propias de su carácter de máxima instancia de la judicatura ordinaria.

c) *Jurisdicción centralizada y relativamente especializada*. Este es el caso el control de la defensa y supremacía constitucional se ha entregado a una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia.

Como ocurre en Paraguay y Venezuela, aunque en este último caso, tiene una adecuación ya que el Tribunal Constitucional es operando dentro del Poder Judicial.

---

<sup>98</sup> GARCÍA PELAYO, Manuel. Obras completas, Tomo 3. Centro de estudios Constitucionales. Madrid, 1991. Pág. 3225.

d) *Jurisdicción centralizada y especializada en un tribunal único.* Corresponde a esta realidad el modelo germano austriaco, que crea un Tribunal Constitucional, mismo que concentra la competencia de defensa del orden constitucional.

Sistema adoptado por el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia, y luego el Tribunal de Garantías Constitucionales de España en la Constitución de 1931. Al término de la Segunda Guerra Mundial se ha expandido dicho modelo por Europa (Alemania, Italia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Turquía, Polonia, Hungría, República Checa, Rusia, Croacia, Bulgaria, Andorra, Rumania, entre otros países) y América Latina (Guatemala, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador), incluyendo Costa Rica con la Constitución de 1848, reformada en 1989, que generó la Sala Constitucional de la Corte Suprema (Sala Cuarta), con competencia exclusiva y centralizada en materias constitucionales.

### **La tipología de Francisco RUBIO LLORENTE**

Rubio Llorente<sup>99</sup> diferencia los modelos de jurisdicción constitucional en razón si se centra en preceptos legales o en los derechos fundamentales.

Rubio Llorente “*considera que el modelo centrado en la ley tiene como institución más característica la acción o recurso de inconstitucionalidad directo o abstracto, mientras el modelo centrado en la defensa de los derechos utiliza mayormente el recurso concreto de inconstitucionalidad y el recurso de amparo*”.<sup>100</sup>

### **La tipología de Lucio Pegoraro.**

Pegoraro distingue cuatro *modelos de jurisdicción constitucional*, partiendo de los dos modelos clásicos de *control difuso americano* y del *control concentrado del modelo germano austriaco*; agregando un *tercer modelo* o *«tertium genus»* en que se *mezclan*

---

<sup>99</sup> RUBIO LLORENTE, Francisco. *Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa*. En libro Homenaje a Manuel FRAGA, Fundación Canovas del Castillo. Madrid, 1977. Pág. 1417

<sup>100</sup> NORIEGA ALCALÁ, Humberto. *Justicia y tribunales constitucionales en américa del sur*. Editorial Palestra. Lima, 2006. Pág. 92.



*los dos anteriores*, donde la jurisdicción ordinaria a través del control incidental tiene la facultad de solicitar el pronunciamiento del órgano que ejerce el control centralizado que es el Tribunal Constitucional, que tiene el monopolio del pronunciamiento sobre la materia, como en los casos de Alemania, Italia y España; y un cuarto *modelo en que se desarrolla paralelamente control jurisdiccional difuso en mano de los tribunales ordinarios, produciendo sus sentencias efectos inter partes y control concentrado en manos de un Tribunal Constitucional, cuyas sentencias producen efectos erga omnes, que se aplica en Portugal, diversos países de América Latina y de Europa Central y oriental.*<sup>101</sup>

### **La tipología de Michel FROMONT**

A su vez, FROMONT<sup>102</sup> en Francia, desarrolla la clasificación considerando tanto la naturaleza de la decisión jurisdiccional como el procedimiento utilizado para llegar a tal decisión, así distingue los procedimientos concretos de los procedimientos abstractos de control de constitucionalidad, donde los primeros se basan en una lógica subjetiva en que la persona se encuentra en primer plano, mientras los controles abstractos responden a una lógica objetiva en que el interés del Estado es prioritario, sin desconocer la existencia de procedimientos objetivos y abstractos, generando una tipología de cinco grupos. En el primero, existen únicamente procedimientos subjetivos y concretos (Estados Unidos de Norteamérica); en segundo lugar, los que tienen procedimientos fundamentales subjetivos y concretos, admitiendo también procedimientos abstractos y mixtos (Alemania); los que poseen procedimientos especialmente mixtos (Italia); los que tienen procedimiento esencialmente objetivos y abstractos.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> PEGORARO, Lucio. *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata* Editorial Giappichelli. Torino, 1998. Pág. 27.

<sup>102</sup> FROMONT, Michel. *La justice constitutionnelle dans le monde*. Editorial Dalloz. Paris, 1996. Pág. 42

<sup>103</sup> *Ibidem*. NORIEGA Alcalá, Humberto. Pág. 93.

## La tipología de Francisco FERNÁNDEZ SEGADO

Francisco FERNÁNDEZ<sup>104</sup> inicia su tipología con la distinción de si el control constitucional es un control de la ley, con independencia de su aplicación, con independencia de todo tipo de conflicto de intereses subjetivos o se trata de un control con ocasión de la aplicación de la ley, el cual considera más amplio y más pertinente que la contraposición control abstracto y control concreto.

“En cuanto a la modalidad de control de la ley, distingue dos modalidades, la primera, que es el *momento en que se produce el control*, que permite distinguir entre control preventivo o control represivo, la segunda, *atendiendo a la naturaleza del interés constitucional que se trata de salvaguardar*, permite distinguir un control objetivo en interés del orden constitucional general o un control competencial, en el marco de un Estado compuesto que pretende proteger la distribución de competencias entre el estado y los distintos entes territoriales”.<sup>105</sup>

En cuanto al control que se lleva sobre de la aplicación de la ley, deben considerarse tres variables<sup>106</sup>.

1. *atiende a que la competencia se atribuya a un órgano único o a una pluralidad de órganos*, diferenciando así un control concentrado de un control difuso.
2. *atiende a la instancia que desencadena el control*, lo que posibilita diferenciar cuatro modalidades: a) el control instado por un órgano jurisdiccional, b) el control que insta una persona lesionada en sus derechos e intereses legítimos, c) el control instado por los propios órganos constitucionales del Estado, y d) el control desencadenado por entes territoriales en el caso de un Estado compuesto.

---

<sup>104</sup> FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. *La Justicia Constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americanos y europeo-Kelseniano*. En *La justicia constitucional en Bolivia*. Tribunal Constitucional- AEI, Sucre, Bolivia, 2003. Pág. 268.

<sup>105</sup> *Ibíd.* NORIEGA ALCALÁ, Humberto. Pág. 94.

<sup>106</sup> *Ibíd.* NORIEGA ALCALÁ, Humberto. Pág. 95.

3. en relación con la eficacia de las sentencias, especialmente las sentencias estimatorias, distinguiendo si ellas tienen efectos para el caso concreto (*efectos inter partes*) o tienen efectos generales (*erga omnes*).

Las distintas tipologías se articulan empleando distintas variables en cada caso para conformar la respectiva clasificación. La complejidad actual de los sistemas de jurisdicción constitucional exige considerar simultáneamente diversas variables que posibiliten estructurar un mapa que refleje la realidad actual, la que no puede explicarse basada solamente en los modelos clásicos.

En todo caso, nos parece necesario considerar los modelos clásicos, como lo hace Pegoraro, como un punto de partida del análisis, para luego analizar la existencia de estos modelos más la existencia de otros tipos diferentes de control en la realidad de América del Sur, que es el objeto central de atención de nuestro estudio, aplicando las demás variables en cada caso.

### **La tipología de Alfonso CELOTTO**

El profesor italiano Alfonso CELOTTO, en un trabajo reciente,<sup>107</sup> ha planteado que la variable fundamental para diferenciar los modelos de jurisdicción constitucional está dada por la existencia o no de un Tribunal Constitucional *ad hoc* como el existente en el modelo europeo continental o su variante de Corte Suprema o sección de ella con funciones de Corte Constitucional, encontrándonos así ante una jurisdicción centralizada, si, en cambios el análisis de constitucionalidad compete a todos los jueces, estamos en presencia de una jurisdicción difusa o descentralizada. El profesor CELOTTO señala que la diferencia fundamental entre estas dos formas de control centralizado o difuso, está referido a los efectos de la decisión de inconstitucionalidad, considerando que en el sistema de jurisdicción centralizado la ilegitimidad constitucional de una ley tiene efectos generales o

---

<sup>107</sup> CELOTTO Alfonso. *La revista constitucional en el mundo: formas y modelos*. En Revista Iberoamericana de derecho procesal Constitucional, enero junio de 2004. Editorial Porrúa. México, 2004. Pág. 3.

*erga omnes*, mientras que en el sistema difuso, la decisión de inconstitucionalidad vale sólo para el caso particular en el cual fue pronunciada (efectos *inter partes*). Esta afirmación del profesor CELOTTO, centrada en la diferenciación modelo *judicial review* americano vs. modelo germano austriaco, no tiene validez general para América del Sur e induce a error ya que hay sistemas concentrados en los cuales las sentencias sólo producen efectos *inter partes*, como puede señalarse a manera de ejemplo Paraguay y Uruguay, como analizaremos más adelante.

El profesor CELOTTO señala además otras cuatro variables que considera importantes para la estructuración de los modelos de jurisdicción constitucional, ellas son:<sup>108</sup>

1. el momento cronológico del control (control preventivo / represivo);
2. el tipo de procedimiento (control abstracto / control concreto);
3. la modalidad de acceso al juicio de constitucionalidad (vía principal o directa o vía indirecta o incidental); y
4. las modalidades de composición y de nómina del Tribunal Constitucional, ya que considera que este aspecto influye de manera relevante o significativa en la autonomía e independencia respecto del poder político.

## **Jurisdicción Constitucional**

Observaremos la opinión de procesalistas clásicos que se deben de tomar en cuenta para determinar el alcance teórico de la figura de la jurisdicción.<sup>109</sup>

El primero D'ONOFRIO, la define como “la facultad conferida al juez al declarar la voluntad de la ley, con efecto obligatorio para las partes y en relación al objeto de tal declaración y de efectuar todo cuanto la ley le ordena o le consiente para realizar tal fin”.

---

<sup>108</sup> ibídem. NORIEGA ALCALÁ, Humberto. Pág. 96.

<sup>109</sup> Citado por. BECERRA BAUTISTA, José. El proceso Civil en México. Porrúa. México, D.F., 2003. Pág. 5.

El segundo CHIOVENDA. Sostiene las mismas ideas en términos semejantes: “es la función del estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actitud de los particulares o de los otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley sea de hacerla prácticamente efectiva.”

Para Ugo ROCCO, la tercera opinión, con el deseo de abarcar todos los aspectos que encierra el concepto, sostiene que “jurisdicción es la actividad con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviniendo a petición de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, se sustituye a los mismos en la actuación de la norma que tales intereses ampara, declarando, en vez de dichos sujetos, que tutela concede una norma a un interés determinado, imponiendo al obligado, en lugar del titular del derecho, la observancia de la norma realizando, mediante el uso de su fuerza coactiva en vez del titular del derecho, directamente aquellos intereses cuya protección está legalmente declarada”.

Eduardo J. COUTURE define jurisdicción como: función pública, realizada por órganos competentes del estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.<sup>110</sup>

El pensamiento y estructura de los procesalistas contemporáneos tiene pequeñas modificaciones, OVALLE FAVELA, indica por jurisdicción, como la función que ejercen órganos del estado independiente o autónomos, a través del proceso, para conocer de los litigios o controversias que les planteen las partes y emitir su decisión sobre ellos; así como para en su caso, ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia.<sup>111</sup>

## **Derecho a la jurisdicción**

---

<sup>110</sup> Ob. Cit. COUTURE, Eduardo. Pág. 40.

<sup>111</sup> Ob. Cit. OVALLE FAVELA, José. Pág. 112.

El artículo 17 constitucional,<sup>112</sup> contiene el derecho a la jurisdicción, acceso a la justicia por medio de tribunales previamente establecidos, los cuales darán cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en relación al caso que les sea planteado. La excitación a justicia se dará siempre y cuando el promovente cumpla con los términos y plazos que deben establecer las leyes y estas lo legitimen para ello. Donde termino será una referencia a los pasos contemplados de forma obligatoria, de las normas adjetivas, para dar inicio válidamente al procedimiento, en cuanto los plazos son secuencias de tiempo necesarias para ejercer una acción.

Hay que tener presente el derecho humano que representa el acceso a la justicia como han implementado diversos tribunales trasnacionales, es por ello que el derecho de acudir a los tribunales se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual tratando de lograr una justicia real, entendiendo el alcance como verdadero valor social que debe ser atendido en cualquier momento. Ahora bien en caso de violaciones graves a los derechos humanos y en su caso no se cumple con la regla de la legitimación, algunos tribunales constitucionales han hecho suyo esas manifestaciones y por consecuencia son planteadas en dicho Tribunal Constitucional, en México se planteó el caso Temixco y la facultad de investigación de las violaciones la hicieron propia diversos Ministros de la Suprema Corte de

---

<sup>112</sup> Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

*Artículo reformado DOF 17-03-1987, 18-06-2008, 29-07-2010*

Justicia, lo que le permitió ser aceptado y se le dio curso, resolución por demás diferente, ya que se indicó que no se analizarían las múltiples violaciones de los derechos humanos, sino al contrario se daba por hecho y lo que se tendría era determinar quién o quienes habían violentado los derechos humanos.

## **Jurisdicción Constitucional**

Para Domingo GARCÍA BELAUNDE, jurisdicción constitucional, la separa en dos conceptos de todos conocidos y por muchos ya analizados donde jurisdicción, es un atributo del Estado para decir el derecho, es decir declararlo, aplicarlo y hacerlo efectivo, referido generalmente a conflictos, diferencias o acciones que buscan la paz social, ahora solo habría que agregar Constitución.<sup>113</sup>

Los conceptos tradicionales del derecho procesal constitucional propuestos por Kelsen, desde 1928, han sido acotados por la nueva propuesta del derecho procesal constitucional, en los últimos años.

Esta corriente procesal ha traído consigo que se adhieran un sin número de estudiosos y que con sus aportaciones se ha incrementado la propuesta procesal que se realizara entre unos de los juristas que iniciaron esta corriente, me refiero a los maestros Mauro CAPPELLETTI y Héctor FIX-ZAMUDIO,<sup>114</sup> indicando por el primero que esta disciplina para efectos de estudio se divide en tres sectores:

- a) Derecho procesal constitucional de las libertades. Comprendiendo el estudio de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección de los derechos humanos; en el caso mexicano, por aquellos mecanismos que protegen esencialmente la parte dogmática de la Constitución, así como los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales.

---

<sup>113</sup>GARCÍA BELAUNDE, Domingo. *Jurisdicción Constitucional*. Visible en: FERRER Mac-Gregor, Eduardo. Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional. Segunda edición. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2014.

<sup>114</sup> FERRER MAC-GREGOR Eduardo. *Hacia un derecho procesal constitucional local en México*. Visible GUDIÑO Pelayo José de Jesús y otros. Coordinadores. Controles constitucionales. Ed. Fudap. Querétaro, Qro. 2005. Pág. 39.

b) Derecho procesal constitucional orgánico. Mismo que se encarga del análisis de los procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias constitucionales de los distintos órganos de poder, donde también se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiciones legislativas. Fundamentalmente en México se prevén a las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales.

c) Derecho procesal constitucional transnacional. Constituye un sector que cada día adquiere mayores dimensiones debido a la importancia creciente de los pactos y compromisos internacionales y de la creación de tribunales constitucionales supranacionales especialmente aquellos relativos a la protección de los derechos fundamentales.

Pero los puntos que se indican son el parte aguas del estudio procesal, mismo que otorga el inicio a la corriente hacia el interior del estado constitucional.

Adicionalmente debemos de tomar en cuenta lo que nuestro máximo Tribunal ha indicado para el contexto de en momento estamos en presencia de la jurisdicción constitucional en sus dos variantes ordinaria y en su caso extraordinaria.

“... Finalmente, la Constitución vigente, de 5 de febrero de 1917, conservó tal diferenciación jurisdiccional, encomendando al Poder Judicial de la Federación el conocimiento de ambas clases de controversias y dándole por ello plenitud de jurisdicción constitucional extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los demás, en éstos, cuando sólo se controviertan cuestiones meramente legales en materia federal; y conservó el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo.

Así dicen los artículos relativos: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o por actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal"; y 107, fracciones I y II, en su texto actual:



"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".

La Ley de Amparo, al reglamentar este precepto constitucional, consignó lo siguiente en el párrafo primero de su artículo 76: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".<sup>115</sup>

### **1.3 Sistemas de control Constitucional**

En el México independiente, dentro de la Constitución de las Siete leyes de 1836, se realizó la primera propuesta para llevar a cabo la defensa de la Constitución, medio de un organismo político, pero con democracia delegada, como lo ha manifestado el jurista mexicano FELIPE TENA RAMIREZ "... la Constitución centralista de 36 se encaró con el problema de la defensa de la Constitución y pretendió resolverlo mediante la institución de un órgano político llamado EL SUPREMO PODER CONSERVADOR, se componía de cinco miembros, elegidos mediante selecciones por las Juntas Departamentales, la Cámara de diputados y el Senado; de esos cinco individuos debía renovarse uno cada dos años."<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Época: Séptima Época Registro: 818538 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 68, Tercera Parte Materia(s): Constitucional, Común Tesis: Página: 77

SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS.

<sup>116</sup> TENA Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Porrúa, México, D.F. 2005. Pág. 495

Del referido cuerpo constitucional de 1836, en adición también tuvo el mérito de hacer ver la importancia del control de la constitucionalidad, como lo precisa FELIPE TENA RAMIREZ, en su obra de DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, "... de este modo sirvió de estímulo para que otros corrigieran y mejoraran el sistema que proponía. Frente al órgano político, cuyo fracaso parecía evidente, se pensó en el órgano judicial, para servir de titular de la defensa constitucional. Trasladar a otro órgano (el judicial) las funciones políticas que tenía el poder conservador y que se ejercitaba a solicitud de determinadas autoridades y no de los individuos perjudicados; pero de todas maneras se avizora ya la posibilidad de que la defensa de la Constitución pase a ser facultad del órgano judicial.<sup>117</sup>

Si para NIETZSCHE y sus seguidores entienden que los derechos humanos constituyen una de las ramificaciones de la sombra de dios, y son por tanto, un obstáculo para la gran política (Conill, 1997), y autores como MACÍNTYRE les asignan el estatuto e ficciones útiles, tan sin existencia como las brujas o los unicornios (MACÍNTYRE, 1987:95 ss).<sup>118</sup> Partiendo de lo anterior es por lo que estamos convencidos de que debemos de tener dentro de nuestro aparato de justicia el sistema de control, que identifique las estructuras de nuestro estado.

En busca de la defensa de la supremacía constitucional se debe de observar el contenido de los sistemas de control constitucional cabe destacar que la gran mayoría de los investigadores sobre el tema ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control constitucional de deben de estudiar sobre el sistema americano y sistema europeo.

Diversos investigadores han realizado múltiples manifestaciones donde proponen varios tipos de sistemas de control de la constitucionalidad, pero los que han sido adoptados por la mayoría de las naciones del mundo, son los sistemas concentrado, difuso o mixto, mismos que se han ido transformando de acuerdo a los sistemas jurídicos de cada país, como en el

---

<sup>117</sup> Ob. Cit. 495

<sup>118</sup> CORTINA, Adela. Justicia cordial. Editorial Trotta, Madrid 2010. Pág. 96

caso del nuestro. Se ha manifestado por diversas resoluciones dictadas por el Supremo Poder Jurisdiccional, indicando que el máximo intérprete de la Constitución y Tribunal Constitucional Mexicano, funciones que recaen en la *SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION*. Optando como sistema el concentrado y realizando diversas adecuaciones al modelo clásico, para dar inicio a un Tribunal de Constitucionalidad, híbrido que en diversos momentos será un tribunal de legalidad<sup>119</sup> y en otros de constitucionalidad.

De lo anterior es el punto de partida para la construcción de las variantes que se pueden observar en diversos sistemas jurídicos, ahora se ha llegado a este plano como área geográfica América Latina, cabe destacar que estaríamos en presencia de los sistemas más jóvenes universalmente hablando y que en ello reviste la mixtura que los compone, por se ha tenido el tiempo suficiente para ver el comportamiento de diversas figuras en sentido universal sus experiencias y sus desaciertos, es lo que ha permitido formar una nueva tendencia de los sistemas de control constitucional, pero sin perder su esencia.

## **Concepto**

La Constitución, como cualquier norma, es susceptible de ser vulnerada, es por lo que se contempla en su contenido los mecanismos idóneos para la defensa de la constitución y hacer valer la supremacía constitucional, y que en su caso de haber sido violentado el orden constitucional éste puede ser reparado o resarcido. El control constitucional estará integrado por todos los mecanismos procesales contemplados en la estructura constitucional, los cuales deberá de expresar los entes legitimados para promoverlos y la delimitación de competencia de los tribunales para aceptar la acción que se intenta hacer valer y en su oportunidad cerrar la Litis para en su momento procesal oportuno pueda dictar la resolución que proceda.

---

<sup>119</sup> Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Tribunal de legalidad). primer párrafo de la fracción III del artículo 105 Constitucional<sup>119</sup> faculta a la Suprema Corte que en caso de relevancia y necesidad jurídica para el asentar el precedente que debe de operar dentro de esa estructura de legalidad podrá atraer dicha causa procesal para resuelta en el seno de este, ahora Tribunal constitucional.

La defensa de la Constitución como función esencial de la justicia constitucional no solo tiene como objetivo garantizar los diferentes modos de distribución del poder entre los cuerpos constituidos del Estado y así, la estabilidad y continuidad política de éste, sino que además tiene la función de garantizar los derechos y libertades individuales fundamentales.

Es por ello, que el control de constitucionalidad involucra temas como: el establecimiento de límites al poder, efectividad en el orden jurídico normativo de un Estado y supremacía constitucional ya que a través de los distintos mecanismos políticos y/o jurisdiccionales con los que cuenta la ley fundamental para someter las normas y actos inferiores a la misma se garantiza su prevalencia.

Existencia de dos modelos principales de jurisdicción constitucional los cuales serán analizados en los temas siguientes:

- a).- El europeo Kelseniano (sistema concentrado).
- b).- El norteamericano (sistema difuso).

Para conceptualizar este punto resulta pertinente señalar lo expuesto por el Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz en su obra *El Nuevo Modelo de Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en materia de Derechos Humanos a partir de la reforma de 2011*, al “definir el control de Constitucionalidad como el sistema de garantías de carácter procesal, a través del cual se preserva la supremacía de la Carta Magna, anulando cualquier norma, acto o sentencia, que la contravenga.”

### **Control de constitucionalidad concentrado**

En el continente europeo, la determinación de la función de los Jueces en sociedad no devino de un cuerpo normativo, sino de ideas filosóficas que sirvieron como fundamento filosófico de los movimientos sociales. Esta tendencia se concretó en 1920 al expedirse la Constitución austriaca proyectada por KELSEN, donde se previó instalar un tribunal constitucional dedicado a resolver, de modo exclusivo, las cuestiones de inconstitucionalidad de manera principal y a través de sentencias con efectos *erga omnes*. Este sistema también se le conoce como “austriaco” por su origen.

Ello implica que una vez sancionada una ley, aun cuando irregular o inconstitucional debe considerarse como un acto estatal válido y efectivo hasta que el órgano que lo produjo lo derogue, o hasta que se decida su anulación por la jurisdicción constitucional. En este caso la garantía de la supremacía de la constitución es la anulabilidad de la ley, y al pronunciarse, el acto queda anulado con efectos generales, puesto que es considerado o declarado nulo, no solamente de un caso particular, sino en general, con efectos *erga omnes*. Esto fue lo que llevó a Kelsen a sostener que cuando el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de una ley, la decisión, por tener efectos *erga omnes*, era una acción legislativa, y que la decisión del tribunal constitucional tenía fuerza de ley, pues se le consideraba como el complemento natural del Parlamento.

Este sistema puede clasificarse de concentrado, principal, general y constitutivo. Su naturaleza concentrada radica en que es a un solo órgano al que corresponde determinar si una ley o un acto son o no constitucionales. Es principal en tanto que el punto a dirimir no se desprende de una controversia sino que es la controversia misma. La generalidad responde al alcance de los fallos, que pueden generar no una simple inaplicación, sino la desaparición de una ley del orden normativo, circunstancia válida para todas las personas que se ubicaban bajo los supuestos de aplicación de la ley desaparecida y por último se trata de un control constitutivo porque da lugar a sentencias constitutivas, que fijan una nueva situación de derecho distinta de la previa y con efectos para el futuro.

El control concentrado se deposita en una sola institución con integración y funcionamiento específico, adicional la característica más sobresaliente de este sistema es que no es parte de otra estructura de poder, y como se ha comentado por múltiples tratadistas es un nuevo poder por encima de los demás ya que tendrá la función de interpretar y guardar de los preceptos o de las articulaciones Constitucionales. Es **abstracto**, porque los conflictos a resolver por el Tribunal Constitucional puede no existir la fijación de la Litis.

Lo que caracteriza el control de constitucionalidad concentrado es el hecho de que la potestad anulatoria de las leyes inconstitucionales esté atribuida como se ha comentado a un solo y único tribunal, que puede bien ser el tribunal o Corte Suprema del País. Este se

ejerce vía de acción y en México es ejercido por el Poder Judicial de la Federación a través de vías directas de control como: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto, mecanismos que tienen bien definido su área de competencia así como los entes legitimados para su procedencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de Tribunal Constitucional, ha guardado la facultad de expulsar del orden jurídico nacional las normas que sean inconstitucionales, es decir, la única que puede expulsar una norma del orden jurídico interno (concentrado); los demás jueces solo pueden inaplicar una ley que sea bajo su interpretación contrarias a la constitución (difuso).

### **Control de constitucionalidad difuso o americano**

Sistema difuso o americano, “americano” porque inicia su práctica en los Estados Unidos de América, mismo que hasta nuestros días subsiste. Se documenta doctrinalmente entre octubre de 1787 y mayo de 1788, por la publicación de 77 artículos en tres periódicos de Nueva York, realizados –Alexander Hamilton, John Jay y James Madison – quienes tuvieron a bien comentar la estructura y el contenido de la Constitución. El conjunto de esos artículos, junto con otros ocho, se aglutinaron en forma de libro el cual apareció con el título de “*El federalista*”.<sup>120</sup>

El control difuso nació al resolverse el caso *Marbury vs. Madison*, (1803). John MARSHALL, presidente de la corte a la sazón y autor de la sentencia, aclaró que el poder del juez estadounidense consistía en preferir la Constitución a cualquier otra ley, dado que aquella contralaba todos los actos legislativos. Permitir la eficacia de una norma inconforme con el texto del que debía haber provenido, implicaba destruir el principio de supremacía constitucional, y en consecuencia, acotar las libertades civiles. Así, al estudiar un caso concreto que involucrara una ley inconstitucional, los jueces debían de inaplicar, la totalidad de la ley o parte de la misma. “Al estudiar un caso que involucra una ley inconstitucional, los Jueces debían abstenerse de aplicarla en favor de la constitución. En

---

<sup>120</sup> HAMILTON, Alexander. *El Federalista*, traducido por Gustavo R. Velasco. Editorial Fondo de Cultura Económico. México, 2000.

suma, la razón de ser de este sistema radica en establecer la supremacía del Poder Judicial sobre los otros Poderes, a manera de acto de confianza en los Jueces”.<sup>121</sup>

HAMILTON realizó comentarios relativos a las funciones de los tribunales. Defendió, que pudieran realizar declaraciones de nulidad de los actos de la Legislatura, utilizando *el argumento de que el poder del pueblo, traducido en la formación de la Constitución, prevalece sobre las actividades tanto del Poder Legislativo como del Judicial*. Para HAMILTON, *la voluntad de los legisladores no pueden contravenir a la del pueblo; es decir, la expedición de una ley inconstitucional es, al mismo tiempo, contraria a la voluntad popular*. Lo anterior utilizando como fundamento lo establecido dentro del artículo 6º. , sección segunda, de la propia constitución, *los jueces debían preferirla a cualquier otra ley, con tal de no menoscabar las aspiraciones populares*.<sup>122</sup>

El control difuso se ha extendido en una gran parte del territorio del Continente Americano, en virtud de la influencia de la Constitución estadounidense en los países que lograron su independencia y buscaron organizarse en Estados democráticos, y algo que hay que reconocer del sistema es que las características esenciales no las han variado.

La principal cláusula de este sistema es: *todo Juez debe, ante la presencia de un caso de cualquier materia, inaplicar una ley inconstitucional y fallar mediante una resolución con efectos entre las partes (inter partes)*. ***Ya que la ley no se anula, el juez se concreta a determinar una nulidad preexistente de la norma.***

El sistema de control americano la diferenciación más importante es que: en oposición al sistema de control concentrado es por efecto de competencia para el conocimiento de problemática relacionada con constitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, le corresponde a todos los Jueces (ordinario), sin excepción. La resolución que se dicte tendrá efecto entre las partes (inter partes). En cambio en el sistema concentrado sería por medio de acción; por iniciativa de la parte que se duele de la inconstitucionalidad de la norma o

---

<sup>121</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Elementos de derecho procesal constitucional. México, 2006. Pág. 26

<sup>122</sup> Visible. Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, D.F., 2003. Pág. 42.

por la violación de un derecho humano, donde la resolución que se indique tendrá efectos generales.<sup>123</sup>

### **Control de constitucionalidad mixto**

El control mixto de constitucionalidad es una combinación de los sistemas concentrado y difuso, se ha generado con esa mezcla un sistema de control híbrido de constitucionalidad. El funcionamiento es simple el juez ordinario en cualquier momento que se percate de la probable inconstitucionalidad, suspenderá el procedimiento y turnará al Tribunal Constitucional para que él se pronuncie sobre la probable inconstitucionalidad.<sup>124</sup>

### **Sistema de control difuso en México**

*“Ahora nos toca analizar si los jueces locales pueden dejar de aplicar una ley de su entidad federativa por considerarla anticonstitucional. De la segunda parte del artículo 133 se infiere que sí, pero como la jurisprudencia de la Suprema Corte declara que la constitucionalidad de una ley solo puede examinarla el poder judicial federal a través del juicio de amparo, surge el problema de cuál es la correcta interpretación a esta cuestión.” Jorge Carpizo.<sup>125</sup>*

Nuestro Tribunal Constitucional en la octava época, no admitía que en pudiéramos estar en presencia del control difuso en nuestras resoluciones, y que el juez ordinario pudiera realizar un estudio de constitucionalidad sobre las articulaciones que le fueran presentada en un caso concreto.

---

<sup>123</sup> En el caso de la acción de inconstitucionalidad así como de la controversia constitucional sería si el proyecto de sentencia alcanza una votación de ocho o más a favor del proyecto y en el caso del juicio de amparo se estará a que finque jurisprudencia ya sea por reiteración o por contradicción de tesis.

<sup>124</sup> IZQUIERDO MUCIÑO, Martha E. y otro. Análisis jurídico de la evolución de las acciones de inconstitucionalidad en México. Flores editor y distribuidor. México, D.F., 2010.

<sup>125</sup> Ob. Cit. CARPIZO, Jorge. Pág. 25.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos dejo en claro que en nuestro sistema no era factible el sistema de control difuso. Como lo indica en la siguiente tesis jurisprudencia:

Época: Octava Época Registro: 228225 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Administrativa, Constitucional Tesis: Página: 228

#### CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.

Del artículo 133 de la Carta Magna, se deriva el principio de supremacía constitucional, según el cual una norma secundaria contraria a la ley suprema, no tiene posibilidad de existencia dentro del orden jurídico. Asimismo, se desprende de dicho numeral, el llamado control difuso del Código Político que implica el que todo juzgador, federal o local, tiene el indeclinable deber de preferir la ley de leyes a cualquier otra aplicación de normas secundarias que la contraríen; es decir, toda vez que la Constitución es la ley suprema, ningún precepto puede contradecirla y como a los juzgadores les corresponde interpretar las leyes para decir el derecho, a la luz de ese numeral cimero, éstos tienen el inexcusable deber de juzgar de conformidad o inconformidad de la ley secundaria con la fundamental, para aplicar o no aquélla, según que al código político le sea o no contraria. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes, no ha sido aceptado por la doctrina jurisprudencial. Los Tribunales de Amparo se han orientado por sostener que, en nuestro régimen de derecho debe estarse al sistema de competencias que nos rige, según el cual sólo el Poder Judicial de la Federación puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no tiene intervención alguna la justicia local en la defensa jurisdiccional de la Constitución aun en el caso del artículo 133 de la misma, en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone a los juzgadores la obligación de preferir a la Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la contraría, ya que, de acuerdo con los artículos 103 de la ley suprema y primero de la Ley

de Amparo, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, es de la competencia exclusiva de los Tribunales Federales de Amparo, y los tribunales locales carecen en absoluto de competencia para decidir controversias suscitadas con ese motivo. . . .<sup>126</sup>

Como es visible en la tesis que se agrega, el Tribunal Constitucional Mexicano se había pronunciado que en nuestro país no era posible llevar a la práctica dicho sistema y al mismo tiempo prohibía su observancia.

Ahora bien a razón de la reforma constitucional el panorama interpretativo ha cambiado así lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que en base en una nueva reflexión ha realizado una interpretación del artículo 133 a la luz del artículo primero constitucional y han surgido diversas directrices que dan como punto de encuentro la aceptación de nuestro Tribunal Constitucional, de la existencia del sistema de control difuso de constitucionalidad sin dejar de observar conjuntamente en algunos casos el control difuso de convencionalidad en México, de los precedentes entregados por Poder Judicial Federal podríamos realizar una cronología de la infraestructura interpretativa utilizada, para dar como los parámetros de cómo debemos convivir con este sistema. Como queda establecido en la siguiente tesis jurisprudencial.

a) Observancia general del control difuso de Constitucionalidad.

Época: Décima Época Registro: 2001290 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: I.8o.A.1 K (10a.)

Página: 1747

---

<sup>126</sup> TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1157/85. Offset e Impresos, S. A. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN LOS CASOS EN QUE ÚNICAMENTE SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO SE ELIMINÓ CON MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DIFUSO, ORIGINADA POR LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Con motivo de la mencionada reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de control de constitucionalidad de nuestro país se transformó, ya que *se autorizó el control difuso*, razón por la cual actualmente los Jueces del orden común pueden conocer -en vía indirecta de control- de violaciones directas a la Norma Fundamental. . . <sup>127</sup>

b) Ejercicio de los mecanismos y tipos de interpretación para llegar a concluir con la desaplicación de la norma y efecto de norma individualizada como resolución (efecto entre partes).

Época: Décima Época Registro: 2003523 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.18 K (10a.) Página: 1762

### **CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO**

El "sistema difuso" es aquel en el cual el examen de compatibilidad de los actos frente a la Constitución corresponde a todos los órganos jurisdiccionales y lo ejercitan, incidentalmente, en ocasión de la decisión de las causas de su competencia. La lógica de dicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaer una resolución conocida como "norma

---

<sup>127</sup> OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 513/2011. Margarita Guerrero Sariñana. 29 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Jazmín Robles Cortés

individualizada", la cual se infiere o deduce a partir de la norma general, pero adecuándola o relacionándola con los hechos o circunstancias del caso concreto, por lo que la decisión se compone de un silogismo judicial que se integra por una premisa fáctica determinada por hechos o circunstancias conforme a las cuales, deberá construirse una premisa normativa que otorgue la mejor solución al conflicto, esto es, cuando se ejerce el control difuso se actúa en el problema contingente y propio que impone una comprobación constitucional en el caso debatido; de ahí el efecto de la cosa juzgada -inter partes-.

De manera que en este sistema, el juzgador tiene el deber de realizar una interpretación para llegar a un juicio respecto a la constitucionalidad de la decisión que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto de estimar que la aplicación de cierta disposición, bajo determinadas circunstancias, resulta inconstitucional, sólo puede, en casos extremos, desaplicar tal disposición en el evento concreto, resolviendo como si ésta no existiera. Así, la duda sobre su constitucionalidad siempre debe plantearse en razón de su aplicación en circunstancias particulares, aspecto que marca la diferencia respecto al control concentrado, puesto que, en este último, se cuestiona la inconstitucionalidad de una ley en abstracto; esto es, la propia norma general, pero sin apreciar los hechos concretos del caso ni la regla que rige a casos específicos, sino la ley per se, con generalidad en el pronunciamiento.

Finalmente, cabe considerar que el control difuso, entendido como uno de los medios para consolidar la supremacía constitucional, tiende a buscar y conciliar el sentido o interpretación de las normas que conforman la premisa normativa, a fin de conseguir la:

a) interpretación conforme en sentido amplio, de acuerdo al bloque de constitucionalidad;

b) interpretación conforme en sentido estricto, si hay varios sentidos, debe elegirse el más acorde al bloque de constitucionalidad, esto es, el previsto o pretendido por la Constitución, y sólo cuando esto resulte imposible se deberá;

c) inaplicar, en el caso concreto, la disposición que oriente el sentido de la premisa normativa, cuando sea indefectible un determinado sentido, en oposición al pretendido constitucionalmente, siempre en el contexto de los efectos inter partes que apareja este sistema.<sup>128</sup>

d) Listado de indicaciones a realizar para estar en posibilidad de llevar a desarrollar el sistema de control difuso de constitucionalidad

Época: Décima Época Registro: 2004188 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 15 K (10a.) Página: 1618

#### CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. PASOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS E INSTRUMENTALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA REALIZARLO.

Para realizar el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad- en la modalidad ex officio, no sólo debe considerarse que se colmen sus requisitos de procedencia y admisibilidad, es decir, sus presupuestos de forma, adjetivos y sustantivos, ya que atento a su naturaleza, regida por el principio *iura novit curia*, precisa de una metodología que posibilite su correcta realización, pues su resultado no es cualquiera, sino la expulsión de normas generales del sistema legal. Así, la evaluación de la constitucionalidad de esas normas puede efectuarse siguiendo los siguientes pasos:

---

<sup>128</sup> CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 623/2012. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal. 27 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

- I. Identificar el derecho humano, subderecho o garantía prevista en la Constitución o en un tratado internacional;
- II. Reconocer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan su alcance e interpretación;
- III. Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control;
- IV. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos;
- V. Examinar las posibles interpretaciones que la norma permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano, subderecho o garantía;
- VI. Si no permite interpretaciones conformes, o todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, debe procederse a contrastarla frontalmente, para lo cual deben tomarse en cuenta los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, progresividad y pro homine; y,
- VII. Desaplicarla cuando resulte contradictoria con el derecho humano. Lo anterior sin dejar de observar que en el control difuso de constitucionalidad ex officio, existen otros aspectos sustantivos e instrumentales que a la par deben considerarse, como son:

- a) la presunción de constitucionalidad de las normas del sistema jurídico;
- b) que algunas de éstas tienen por objeto cumplir con las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos, lo cual debe ponderarse para fijar los alcances de una decisión, sin que ello signifique que aquéllas no puedan resultar inconstitucionales; y,
- c) que un incorrecto control difuso de constitucionalidad, también puede ser reparado mediante los recursos en un control difuso de constitucionalidad ex officio a la inversa, es decir, así como un Juez de primer grado en ejercicio oficioso de control puede concluir equivocadamente que una norma general

es inconstitucional, el tribunal de segunda instancia también le puede regresar la regularidad constitucional a la norma oficiosamente, pues de otra manera se permitirá la inaplicación de una norma que sí era constitucional.<sup>129</sup>

Época: Décima Época Registro: 160525 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXIX/2011(9a.) Página: 552

#### PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos:

a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

---

<sup>129</sup> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. Amparo en revisión 29/2013 (expediente auxiliar 207/2013). Brenda Edaly Martínez Pérez. 8 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada P. LXIX/2011 (9a.), de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552.

b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.<sup>130</sup>

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha refiere que control difuso, es aquel en el cual el examen de compatibilidad de los actos frente a la

---

<sup>130</sup> Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Nota:

En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: 'CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.' y 'CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.'", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.



Constitución corresponde a todos los órganos jurisdiccionales y lo ejercitan, incidentalmente, en ocasión de la decisión de las causas de su competencia.<sup>131</sup>

El control de constitucionalidad difuso, permite a cualquier juez, sin importar su fuero, defender la constitucionalidad de las leyes; es decir, todos los jueces deben ante un caso concreto, inaplicar una ley inconstitucional y fallar mediante una sentencia con efectos vinculantes solo para las partes en conflicto.

Precisamente en eso concibe la diferencia con el control de Constitucionalidad concentrado, en que éste, solo le corresponde en base a la competencia de los Tribunales Federales, cuando el difuso, es ejercido por cualquier juez en forma incidental durante los procesos ordinarios, encontrándose autorizados para realizar la interpretación de la constitución mediante la comparación del contenido de la norma con el de la Carta Magna, y de hallar incompatibilidad puede abstenerse de aplicar la primera (norma).

Este modelo se caracteriza porque lo ejercen los tribunales ordinarios y no existe un tribunal especializado que tenga el monopolio del mismo. En segundo lugar porque el control se ejerce en concreto, es decir, que solo se puede promover una objeción o un incidente de inconstitucionalidad dentro de un proceso que se siga ante los Tribunales ordinarios. Por último, las sentencias de inconstitucionalidad de las leyes solo producen la desaplicación de ellas en el caso concreto.

Por lo que podemos indicar el control difuso, será incidental, especial y declarativo.

Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) J/8 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 953

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. Aun cuando el control difuso de constitucionalidad - connotación que incluye el control de convencionalidad- que ejercen los

---

<sup>131</sup> CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO. Tesis: I.4o.A.18 K (10a.). *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Común. Página: 1762.

órganos jurisdiccionales en la modalidad *ex officio* no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, pues se sustenta en el *principio iura novit curia*, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues existen presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que deben tenerse en cuenta. La ley, la jurisprudencia y la práctica muestran que algunos de esos presupuestos, que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de manera enunciativa son:

a) que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma;

b) si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema;

c) debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del procedimiento en el que se actúa;

d) la existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente;

e) inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema;

f) inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la

Federación, porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige al control difuso y,

g) inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.

Época: Décima Época Registro: 2000008 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. I/2011 (10a.) Página: 549

#### CONTROL DIFUSO.

Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.".<sup>132</sup>

Como lo ha especificado en diversos artículos el Jurista Juventino V. CASTRO, cuando se está en tema de abrogar o sustitución de normas que las han considerado injustas, partiendo

---

<sup>132</sup> Solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011. Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2011. Mayoría de nueve votos; votaron en contra y por la modificación de las tesis jurisprudenciales respectivas: Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ignacio Valdés Barreiro, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número I/2011 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil once.

del principio de la fórmula de Gustavo RADBRUCH en cuanto que el derecho extremadamente injusto no es derecho y por consecuencia debe de imperar su no aplicación a aun caso en concreto; CASTRO, se ha manifestado de la siguiente manera: “... la abrogación o sustitución de una ley injusta por otra que si se valore como justa, solo puede llevarla a cabo el poder Legislativo. El juez no puede -poniendo como pretexto que no debe fundar su fallo en una ley que le parezca injusta- dejar de aplicar una norma legal que le es obligatoria, y mucho menos regular para el caso concreto una disposición personalmente concebida por él. Regla de oro del principio de la división de poderes públicos: si el poder Legislativo dicta una ley que la sociedad rechaza por injusta, solo el propio legislativo puede derogarla o sustituirla; nunca el poder Judicial que fue creado para aplicar la Ley, no para evaluarla. Obviamente estoy hablando de la jurisdicción del orden común, federal o estadual; porque la jurisdicción constitucional si puede autorizar –bajo el cumplimiento de su estatuto- la no aplicación o la invalidación, si se encuentra una inconstitucionalidad invalidante.”<sup>133</sup>

### **México. Sistema concentrado de constitucionalidad**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado por medio de tesis de jurisprudencia de que en nuestro país el sistema que opera para el control de constitucionalidad es el sistema concentrado.

Época: Décima Época Registro: 160480 Instancia: Pleno Tipo de Tesis:  
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III,  
Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXX/2011  
(9a.) Página: 557

SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN  
JURÍDICO MEXICANO.

---

<sup>133</sup> CASTRO, Juventino V. Los jueces Mexicanos y su justicia. Editorial Porrúa. México, 2004. Pág. 15.

Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Nota:

En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: 'CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.' y 'CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.'", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

## **CAPITULO II**

### **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. FEDERAL Y LOCAL.**

#### **2.1 LAS REFORMAS CONSTITUCIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEXICANO**

##### **Reforma Constitucional de 1988**

Avance histórico en vías de la transformación que sufría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transformándola en el Tribunal Constitucional Mexicano<sup>134</sup>.

Para ello su reformaron, la constitución, la ley de amparo y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y nacen diversos cuerpos normativos para darle sentido a las reformas realizadas.<sup>135</sup> El control de legalidad, queda a cargo de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Federación.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional se indicó: [...] es necesario que las funciones de Tribunal de control e la legalidad san desempeñadas por los tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se reserva a la Suprema Corte de Justicia el dedicarse preferentemente a la interpretación definitiva de la constitución.<sup>136</sup>

En cuanto a la Suprema Corte, se fija su competencia: [...] fundamentalmente al control de la constitucionalidad y a fijar en definitiva el alcance los textos constitucionales, cuya observancia atañe al interés superior de la nación, evitando que la actuación de los poderes se aparte de la norma superior, contribuyendo así a mantener la solidez del régimen político del país, que depende del cumplimiento de la Ley fundamental que lo establece.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de abril 21/1987, la reforma entre en vigor el 15 de enero de 1988.

<sup>135</sup> Las reformas a la Ley de amparo y ley orgánica del Poder Judicial de la federación, entraron en vigor los días 15 y 5 de enero de 1988.

<sup>136</sup> Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de abril 21/1987, la reforma entre en vigor el 15 de enero de 1988.

<sup>137</sup> *Ídem.*

Con esta reforma, se buscaba la eliminación del rezago, de asuntos por resolver, que por el transcurso del tiempo se fueron acumulando.

En cuanto a las adiciones constituciones que trajo esta reforma está el párrafo sexto del artículo 94 constitucional,<sup>138</sup> a fin de que el Tribunal Constitucional en pleno pudiera emitir acuerdos generales, con la finalidad de que su actividad jurisdiccional tuviera una pronta respuesta en la impartición de justicia, proponiendo una delimitación de competencia entre las Salas que conforman esta estructura de poder. En cuanto al Pleno, las Salas aunque ya determinada su competencia apoyaran de forma activa para la revisión en cuestiones de constitucionalidad. Por lo que refiere la adición del último párrafo de la fracción V del artículo 107 constitucional, se le otorga la Suprema Corte de Justicia facultad de atracción, de amparos directos, donde por su naturaleza, interés y transcendencia, y por consecuencia fijar un precedente sería la razón de por qué nuestro máximo Tribunal deberá de resolver.

## **Reforma Constitucional de 1994**

Iniciativa del ejecutivo. Procesos legislativos. Exposición de motivos. Cámara de origen: Senadores, México, D.F., a 5 de diciembre de 1994. Diciembre de 1994, nuevas reformas constitucionales de realizaron, en búsqueda de la consolidación del Tribunal constitucional Mexicano.

El día 5 de diciembre de 1994, en ejercicio de la facultad que precisa la fracción primera del Artículo 71 constitucional<sup>139</sup>, el titular del Ejecutivo Federal sometió a consideración del Constituyente Permanente, por conducto del Senado de la República, una iniciativa que tenía en su momento como propósito principal el fortalecer la Constitución y al Poder Judicial de la Federación.

---

<sup>138</sup> Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

*Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-1999, 06-06-2011*

<sup>139</sup> Artículo 71 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la República;



Como las anteriores reformas constitucionales no permitieron consolidar a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, con esta la de diciembre del 1994, hay un cambio estructural y muy llamativo hasta se cambió la temporalidad de la época, ando inicio la novena época de Corte y así marcar el parte aguas del nacimiento de nuestro Tribunal Constitucional, a las épocas anteriores se les empezó a señalar como jurisprudencia y tesis históricas, claro en aquellos casos, donde ya existía un nuevo pronunciamiento.

Dos circunstancias que no debemos dejar de acentuar: primera nueva integración; segunda: delimitación de ámbitos de competencia de las Salas.

Son cambios que permitirán un mejor desempeño a las instituciones involucradas en el fortalecimiento y salvaguarda de los principios de un estado constitucional.

Tuvo a bien manifestar que en el cuerpo Constitucional se depositan las facultades así como el ejercicio de los Poderes de la Unión en cuanto a la medula, de la pretendida reforma era enfocada al poder Judicial de la Federación en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito así como a los Juzgados de Distrito; a quien se les ha encomendado la custodia del orden constitucional y legal. Estructurando una Suprema Corte de Justicia, con libertad, autonomía, fortaleza y de excelencia, es esencial para la cabal vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.

En la Suprema Corte de Justicia así como en los otros poderes el efecto democrático de la voluntad popular ha depositado la función de mantener el equilibrio entre los poderes de la Unión (teoría de pesos y contra-pesos), dirimiendo las controversias que pudieran suscitarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así también, la Suprema Corte es depositaria del supremo mandato de velar por la Unión de la República. Sin dejar de analizar en cuanto a la facultad de la Suprema Corte reside asimismo el mandato de asegurar a los mexicanos que todo acto de autoridad deberá de apegarse en todo momento al orden que la Constitución consagra. De ahí que un régimen de plena vigencia del Estado de Derecho y un sistema de administración de justicia y seguridad pública, justa y eficiente, requiere de un Poder Judicial totalmente independiente y fuerte.

En esta iniciativa se sometió a la consideración de los involucrados un conjunto de reformas a la Constitución para avanzar en la consolidación de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones. Estas reformas entrañan un paso sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, creando las bases para un sistema de administración de justicia y seguridad pública que responda mejor a la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado de Derecho pleno.

La fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia. La Suprema Corte a lo largo de estos años ha tenido un desempeño ético y profesional. En los últimos años ha tomado el verdadero papel así como su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública.<sup>140</sup>

Con la reforma se pretendía consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad y en algunas excepciones como un tribunal de legalidad por lo que se exigió otorgar mayor fuerza a sus decisiones, ampliar su competencia para:

1. emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales,
2. para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo.

Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integración a fin de facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar

---

<sup>140</sup> El poder judicial de la Federación se ha ganado la confianza del pueblo mexicano, sin importar las incoherencias de los otros poderes ya que en su momento podremos someter la a actividad realizada por los otros poderes a la vista del poder judicial de la federación para que dicho actuar sea sometido a la luz de la constitución, principio constitucionales así como el bloque de constitucionalidad o legalidad que a lo largo de los años se ha ido formando en nuestro país. Y con ellos en espera de su análisis y determinación de un verdadero derecho.

una interpretación coherente de la Constitución, permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. En esa misma perspectiva, se hace necesaria una diferenciación en el desempeño de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Suprema Corte para facilitar la eficiencia en ambas.

Con la reforma se inscribieron en la larga tradición nacional que ha buscado subordinar la totalidad de los actos del poder público a la Constitución y a las leyes. Esa tradición comprende el establecimiento por la Constitución donde deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito; y les encomienda la custodia del orden constitucional y legal. Por eso, una Suprema Corte de Justicia libre, autónoma, fortalecida y de excelencia, es esencial para la cabal vigencia de la Constitución y el estado de derecho que ella consagra. Así también, la Suprema Corte es depositaria del supremo mandato de velar por la Unión de la República, dirimiendo las controversias entre Estados, Municipios, el Distrito Federal y la Federación. La propuesta de modificaciones al régimen *competencial* y organizativo de la Suprema Corte de Justicia, parte de la convicción de que es el órgano jurisdiccional que ha funcionado con mayor eficiencia y credibilidad en nuestro país. Debido al carácter supremo de sus resoluciones en los distintos litigios que han generado y se generen de forma presente y futura. Las nuevas atribuciones que se proponen en reforma pretenden el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia a partir del fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debemos reconocer que incluso con independencia de los importantes beneficios del juicio de amparo la nueva y compleja realidad de la sociedad mexicana, hace que este proceso no baste para comprender y solucionar todos los conflictos de constitucionalidad que pueden presentarse en nuestro orden jurídico. Por ello, es necesario incorporar procedimientos que garanticen mejor el principio de división de poderes y a la vez permitan que la sociedad cuente con mejores instrumentos para iniciar acciones de revisión de la constitucionalidad de una disposición de carácter general a través de sus representantes (partes legitimadas).

La iniciativa plantea la reforma del artículo 105 constitucional a fin de ampliar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se susciten entre la Federación, los estados y los municipios; entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; entre los Poderes de las entidades federativas, o entre los órganos de gobierno del Distrito Federal, al ampliarse la legitimación para promover las controversias constitucionales, se reconoce la complejidad que en nuestros días tiene la integración de los distintos órganos federales, estatales y municipales.

Asimismo, se propone abrir la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o, en su caso, el Procurador General de la República y otros organismos<sup>141</sup>, puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus atribuciones, la inconstitucionalidad de leyes, previéndose que las resoluciones puedan anular, con efectos generales, la norma declarada inconstitucional.

Adicionalmente a los cambios propuestos en lo concerniente a las competencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa propone que sus *atribuciones administrativas sean asignadas a un órgano de nueva creación*. Este órgano se integraría por personas designadas por los tres Poderes de la Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiempo limitado y serían sustituidos mediante un sistema de escalonamiento. Con la liberación de las cargas de trabajo administrativo, el Pleno de la Suprema Corte contara en adelante con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales.

Este órgano de administración sería responsable de velar por la *independencia de los jueces y magistrados*, y cuidaría que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional.

---

<sup>141</sup> En el supuesto de que la norma sea concerniente a la materia electoral o en su caso de derechos humanos podrán hacer uso de este mecanismo procesal constitucional en el primer supuesto los partidos políticos con registro en cuanto a segundo supuesto la Comisión de los derechos Humanos de carácter Federal.

La iniciativa propone un procedimiento más riguroso para la aprobación por el Senado de la República, de los nombramientos de ministros propuestos, por el titular del Ejecutivo Federal.<sup>142</sup> Su comparecencia pública y el voto favorable de dos terceras partes de los miembros de ese órgano legislativo, serán requisitos para otorgar dicha aprobación. Se propone, asimismo, modificar el régimen de ingreso a la Suprema Corte, estableciendo requisitos e impedimentos más exigentes, que garanticen que la persona propuesta reúna calidad profesional y vocación judicial suficientes para el cabal cumplimiento de su responsabilidad. En congruencia tanto con sus nuevas atribuciones como con la necesidad de facilitar la deliberación se propone la reducción en el número de ministros que integran la Suprema Corte.

A fin de garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se actualice y su función se legitime periódicamente se propone que los ministros que la integran ocupen el cargo por un periodo determinado y que su sustitución se lleve a cabo de manera escalonada. Al constituirse nuestra Suprema Corte en un auténtico Tribunal Constitucional, deberá mantenerse actualizada *para garantizar que la interpretación constitucional sea armónica con las condiciones culturales, sociales y económicas al momento de dictar sus resoluciones y estructurar los precedentes en casos difíciles.* Debido a la duración temporal del cargo, se instituye el derecho de los ministros a un haber por retiro, con lo que se garantiza que la función jurisdiccional se ejerza con independencia.

### **Poder Judicial de la Federación. Integración**

En lo concerniente a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se indicaba reducir el número de ministros de 26 a 11, volviendo así al número de miembros establecido en el artículo 94 del texto original de la Constitución de 1917. A lo larga de nuestra historia moderna, el número de integrantes de la Suprema Corte respondió a la necesidad de abatir los *rezagos acumulados que, en ocasiones, llegaron a ser muy considerables.*

---

<sup>142</sup>Resguardando en todo momento el efecto de la democracia delegada.

En razón de la dinámica institucional de la Suprema Corte, la sola reducción en el número de Ministros no generará un nuevo rezago, pues la reforma que se propone asignaría a un órgano distinto las competencias administrativas que hasta el día de hoy desahoga la propia Corte. Ello permitirá que los Ministros dediquen mayor tiempo a resolver los asuntos de carácter jurisdiccional, estando en posibilidad que se incremente substancialmente el número de sesiones del pleno.

### **Régimen jurídico de los Ministros de la Suprema Corte. Garantía de independencia jurisdiccional.**

Se propone que los Ministros de la Suprema Corte ocupen el cargo durante quince años, y que su sustitución se lleve a cabo de manera escalonada. Al existir tribunales con atribuciones para anular las leyes con efectos generales, es conveniente que sus miembros se renueven periódicamente a fin de evitar un esquema rígido de interpretación constitucional. La dinámica económica y social de México exige una capacidad siempre renovada de interpretación de la Constitución, que guarde coherencia con sus propósitos y principios fundamentales. Así, los criterios de validez de la totalidad de las normas jurídicas podrán actualizarse de acuerdo con las percepciones y aspiraciones de cada generación.

En la iniciativa de reformas se proponen nuevos requisitos de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia para fortalecer su independencia se propone que el Presidente de la República no pueda nombrar a aquellas personas que con seis meses de anterioridad hubieran ocupado los cargos de Secretario de Estado, Jefe del Distrito Federal, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal o Gobernador de algún estado. Con esta propuesta se busca garantizar que *factores de carácter político* no interfieran en la asignación de los ministros y que se tome en cuenta la vocación judicial.

### **Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad**

Adicionalmente a las reformas constitucionales de carácter orgánico y estructural descritas en el apartado anterior, la iniciativa propone llevar a cabo una profunda modificación al sistema de *competencias* de la Suprema Corte de Justicia para otorgarle de manera amplia y definitiva, el carácter de Tribunal Constitucional.

### **Aspectos generales y efectos de sus resoluciones**

Mediante las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1987, se estableció que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte conocerían, por vía de recurso, de aquellas sentencias de amparo dictadas en juicios en que se hubiere impugnado la constitucionalidad de una norma de carácter general o establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución. A la luz del derecho comparado y de los criterios en la materia, tal resignación no bastó para otorgarle a la Suprema Corte de Justicia *el carácter de un auténtico Tribunal Constitucional*.

### **La iniciativa propone mantener plenamente vigente el Juicio de Amparo.**

Se propone que, adicionalmente, los órganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la *constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas*.

La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales será una de las tareas más importantes innovaciones que nuestro orden jurídico haya tenido a lo largo de su historia. En adelante, el solo hecho de que una norma de carácter general sea contraria a la Constitución puede conllevar su anulación, prevaleciendo la Constitución sobre la totalidad de los actos del Poder Público. La supremacía constitucional es una garantía de todo Estado democrático, puesto que al prevalecer las normas constitucionales sobre las establecidas por los órganos legislativos o ejecutivos, federal o locales, se nutrirá

una autentica cultura constitucional que permite la vida nacional. Por las dificultades técnicas que implicará el artículo 105 constitucional de aprobarse la presente iniciativa, será necesaria la promulgación de la correspondiente *ley reglamentaria*. Los problemas técnicos que habrán de ser materia de los procesos previstos en dicha norma constitucional no pueden seguirse tramitando conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento formulado para resolver, en principio, litigios entre particulares; de ahí que la reforma prevea la conveniencia de que sea una ley reglamentaria de esta disposición constitucional la que preceptúe su cabal aplicación.<sup>143</sup>

## **Libro Blanco**

### **Consolidación de la jurisdicción constitucional**

En cuanto a la reforma de 1994 es considerada el primer eje de la transformación que deberá de sufrir en diversas etapas el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de proseguir con la conformación de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIAL de la nación en un Tribunal Constitucional. La línea a seguir planea dos vertientes principales:

- a. diseño institucional, (comprende por una parte la nueva estructura de organización);
- b. redefinición competencial, (estamos en presencia de la reingeniería competencial de nuestro máximo Tribunal, se concretó en el aspecto jurisdiccional y la creación de diversos órganos jurisdiccionales, es el caso de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que partir de ese momento pudieron encargarse de algunas funciones que eran competencia de la Corte, liberándose esta ultima de diversas responsabilidades para aplicarse al resto de sus competencias<sup>144</sup>).

---

<sup>143</sup> Cabe aclarar que el ingenio del jurista mexicano en los procedimiento de Controversia Constitucional realizados antes de la reforma del 1994. Adicional sin pensar de la existencia de la ley reglamentaria. Fueron presentadas conforme al procedimiento del juicio de amparo directo, mismas que la Suprema Corte de Justicia les dio trámite.

<sup>144</sup> La situación que se presentara en cuanto a la reforma de 1994 opta por un cambio de paradigma, profundizado en una de las vertientes de la reforma del 1987, haciendo a un lado los distractores de la Corte para que estuvieran en aptitud de desarrollar las funciones de un órgano de control constitucional (ejerciendo tanto la competencias y funciones que ya tenía, sino también nuevas que le fueran asignadas por medio de la reforma de referencia). El punto principal de esta reforma opto por una clara distinción entre las funciones jurisdiccionales y aquellas de otra índole que correspondían a la Corte, confiriendo las de esta última



## Consolidar el sistema mexicano de defensa de la Constitución

Se ha considerado la inclusión de nuevos sistemas mecanismos, como el control previo de la constitucionalidad en materia de tratados internacionales, legislación o ambos, así como de figuras tales como la cuestión de inconstitucionalidad y la acción por omisión legislativa y quienes estiman que debe mantenerse el actual estado de las cosas. Así mismo existe la solicitud de la unificación procesal constitucional en un solo código procesal, y como consecuencia dejar la supletoriedad con el Código Procesal Civil Federal, ahora bien existen figuras que se han pretendido introducir como la *amicus curiae*<sup>145</sup>, figuras que han determinado no podrían funcionar en nuestro sistema de control de constitucionalidad.

### Reforma Constitucional de 1996.

Llamada la reforma electoral, reformándose nuevamente el contenido constitucional dando inicio a “un sistema integral de justicia electoral”.

---

naturaleza aun nuevo órgano el Consejo de la Judicatura Federal, responsable del gobierno y la administración del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. Cabe aclarar que para el momento de que fuera propuesto este organismo por medio de la reforma que se comenta ya existía un órgano semejante en diversas entidades de la federación Coahuila y Sinaloa.

<sup>145</sup> La figura de la *amicus curiae* es empleada en diversos tribunales con el objeto de permitir que quienes no se encuentren legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tienen interés en el tema controvertido, puedan expresar sus puntos de vista ante el tribunal. Si bien los efectos de dichas expresiones no tienen ningún efecto formal sobre el proceso, los tribunales que escuchan dichas opiniones pueden verse favorecidos al tener puntos de vista adicionales sobre las cuestiones litigadas. La institución es especialmente útil cuando los temas que litigan pueden tener importantes consecuencias sociales. Lo anterior es particularmente relevante repercutir sobre la manera en la que se definen los derechos en la sociedad. Dichos asuntos siempre suscitan expectación y la figura del *amicus curiae* permite que las opiniones puedan ser expresadas al tribunal. Sería de gran importancia tenerla posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia acepte la intervención de actores ajenos a los procesos bajo la figura del amigo de la curia. Dadas las características de la institución, no parece necesaria su incorporación mediante reforma legislativa, sino que se requiere de la implementación de medidas internas que permitan regular la manera en la que los interesados en algún asunto en lo particular puedan expresarse. Se entiende que la incorporación de la figura no implica necesariamente que los argumentos planteados por quienes eventualmente hagan uso de la misma tengan que ser estudiados por quienes tienen la responsabilidad de resolver.

Libro blanco de la reforma judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una agenda para la justicia en México. Primera edición. México, 2006. Pág. 156.

El artículo 105 constitucional sufre adición en su contenido se agrega un párrafo a la fracción II, de donde se desprende que la acción de inconstitucionalidad será la única vía procesal para analizar la constitucionalidad de normatividad de carácter electoral.<sup>146</sup>

Esta reforma da un paso muy significativo para la materia electoral, en su carácter sustantivo como adjetivo, ya que la justicia electoral se incorpora a la estructura del Poder Judicial de la Federación y con ello la jurisdicción de la problemática electoral.

Tribunal Federal Electoral, máxima autoridad en materia electoral. Con la misión de mayor transcendencia, indicada a este tribunal que nace en esta reforma constitucional, es revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales locales, conocer de los mecanismos de control, tales como el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano (por algunos señalado el amparo en materia electoral). Adicionalmente se le faculta para formar o estructurar jurisprudencia dentro de ámbito de competencia  
Reforma constitucional de 1999.

Sigue la ruta de nuestro país, por medio del constituyente permanente, para el fortalecimiento de nuestro Tribunal Constitucional, modificando el párrafo VI del artículo 94 constitucional, aunque ya se había modificado, para esta circunstancia con esta reforma consolida el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la facultad de atracción no se dará cuando no se justifique, o no exista la necesidad de fijar un precedente o criterio para los tribunales inferiores que conforma el sistema jurídico nacional.

Con la modificación al artículo 107 fracción IX constitucional, se fortalece la supremacía constitucional, ya que le otorga competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de constitucionalidad en revisión del juicio de amparo directo.

---

<sup>146</sup> Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 26 de julio de 1996.

Ello permitirá a cualquier gobernado hacer valer ese mecanismo de defensa y ser analizado y resuelto por nuestro máximo Tribunal, donde se realizaran los enfrentamiento de los conceptos de violación del caso en concreto que se hacen valer con los preceptos constitucionales.

## **2.2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEXICANO**

### **Tribunal Constitucional**

El juez se convierte en el mediador entre el derecho y una supuesta conciencia popular, pudiendo incluso dictar sentencias *contra legem*.

El debate contemporáneo sobre la naturaleza jurídica y las funciones de la Suprema Corte de Justicia, tiene sus inicios en las reformas de 1987, donde se separa un tanto la Corte de resolver la cuestión de legalidad. Desde ese momento se ha discutido sobre la conveniencia de evitar que los asuntos de legalidad lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ello en busca de su especialización como un Tribunal de Constitucionalidad. El debate se da por la doble naturaleza de la Corte al momento de resolver ya como un Tribunal de Constitucionalidad y como máxima instancia de la jurisdicción federal, pero no solo debemos de observar ello, también es necesario reconocer que la práctica judicial Mexicana han mezclado los temas de legalidad y de constitucionalidad. Podemos tomar como ejemplo al juicio de Amparo Directo, el asunto llegara a la Corte, toda vez que si bien no suele conocer amparos directos en donde se debata cuestiones de legalidad, si debe resolver las contradicciones que se producen entre las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito en donde el debate suele concentrarse solo en legalidad siempre que se haya hecho valer una inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

conocerá en revisión solo la reclamación de inconstitucionalidad planteada en la demanda original.<sup>147</sup>

## **Reestructura de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

### **Amparo federalismo judicial**

Tema central del debate en torno a cómo deberá ahondarse el proceso de reforma judicial lo constituye el amparo directo, sobre todo por sus repercusiones para la configuración del federalismo judicial. En los extremos del debate se encuentran quienes en forma radical sugieren su supresión, y aquellos que estiman que debe prevalecer en su forma actual. En el sector medio del espectro se encuentra una masa crítica convencida de la necesidad de limitarlo, y para ese efecto surgen diversas opciones, ya que mientras algunos apoyaban una reforma a la Ley de Amparo reforma que no alcanzo esta expectativa, de restringir su procedencia, otros sugieren armonizar las legislaciones adjetivas locales con el amparo directo y limitar este mediante acciones reglamentarias al interior del Poder Judicial de la Federación. Uno de los aspectos de mayor coincidencia es el de acotar las resoluciones para el efecto de amparo casación, sea mediante la explicitación de sus efectos a su restricción como una deferencia hacia la justicia local. Incluso hay quien propugna por su eliminación.<sup>148</sup>

## **La Suprema Corte de justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional Mexicano.**

Antes de la reforma de 1994, tomando como base lo establecido en ese momento el contenido del artículo 105 constitucional, se resolvieron 42 expedientes relacionados con

---

<sup>147</sup> Libro blanco de la reforma judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una agenda para la justicia en México. Primera edición. México, 2006. Pág. 117-118.

<sup>148</sup> Libro blanco de la reforma judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una agenda para la justicia en México. Primera edición. México, 2006. Pág. 90

las Controversias Constitucionales<sup>149</sup>. Como criterios de transcendencia antes de la reforma podríamos indicar:

Época: Quinta Época Registro: 279358 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXVI Materia(s): Constitucional Tesis: Página: 1067

#### CONFLICTOS CONSTITUCIONALES

Si la Federación sostiene que la ley expedida por un Estado, ha invadido las atribuciones exclusivas de aquélla, y el Estado sostiene lo contrario, es inconcuso que la cuestión constituye un conflicto de carácter constitucional, cuya resolución compete a la Suprema Corte de Justicia, atento lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, que, de modo imperativo, define la facultad exclusiva y privativa de la Corte, para conocer de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados. Las disposiciones de los artículos 103 y 107 de la propia Constitución, se refieren a actos de las autoridades federales o locales, que restrinjan o vulneren la soberanía de la Federación o de los Estados, siempre que con ellos se lesione una garantía individual; pero cuando no existe esta última circunstancia y un Estado o la Federación estiman lesionada su soberanía, entonces el juicio de amparo es ineficaz para resolver la pugna entre esas dos entidades, y en tal caso, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución y con la teoría jurídica del Poder Judicial, que encomiendan a la Justicia Federal la función esencial de interpretar la Constitución, es la Suprema Corte de Justicia la única autoridad capacitada para mantener la integridad del Pacto Federal, no mediante el juicio de amparo, sino con arreglo al artículo 105 ya citado, que, como se ha expresado en alguna ejecutoria, resultaría una inmotivada y redundante repetición del 103, si fuera el juicio de amparo el único medio de que pudiera disponerse para resolver esa clase de conflictos. Por otra parte, de no ser así, no habría otro medio que la fuerza armada para resolver los conflictos que se suscitaran entre la Federación y los Estados, y si bien

---

<sup>149</sup> Los procedimientos planteados antes de la reforma se siguieron analizando y se obtuvieron excelentes presupuestas de sus resoluciones. Ahora conocidos como casos históricos. Pero sin olvidar que permitieron el nacimiento de la teoría jurisprudencia en materia de Controversias Constitucionales.

conforme al artículo 98 de la Constitución de 1857, sólo correspondía a la Suprema Corte de Justicia, desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se suscitaban entre los Estados y el de aquellas en que la Unión fuere parte, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la propia Constitución anterior, los Tribunales de la Federación debían resolver, por medio del juicio de amparo, las mismas controversias a que se refiere el artículo 103 de la Constitución vigente, tal circunstancia no es concluyente para resolver en sentido negativo la actual competencia de la Suprema Corte, para resolver esos conflictos, tanto porque la Constitución de 1917, sí incluye esa competencia, cuanto porque es innegable que el constituyente del 57 tuvo una visión incompleta del juicio constitucional, ya que sólo lo tomó en consideración para restablecer la supremacía de la Carta Federal, cuando de su violación resultase la de las garantías del individuo; pero no para restablecer esa misma supremacía, cuando fuese violada alguna de las soberanías que establece, con menoscabo de la coexistencia de las mismas, sin que hubiere agravio alguno individual; de aquí que su sistema resultara, como en efecto resultó, deficiente, toda vez que ni confirió expresamente a la Corte la facultad de resolver las controversias dichas, ni creó órgano alguno jurídico para resolverlas; por esto el constituyente de Querétaro, queriendo implantar el postulado supremo de toda sociedad organizada, de que el imperio de la ley y no la violencia, debe ser la fuente de los derechos y deberes, tanto de los individuos como del poder público, para llenar el vacío de la Constitución anterior, amplió en su artículo 105, la función jurídica de la Suprema Corte, como el más Alto Intérprete de la Constitución, atribuyéndole competencia para conocer de los conflictos de carácter constitucional, entre la Federación y uno o más Estados, reservando al Senado de la República el conocimiento de los conflictos de carácter político; sin que esto implique una supremacía del Poder Judicial sobre los demás Poderes de la Federación, ni de los Estados, ni menos un ataque a la soberanía de aquélla o la de éstos, porque como se ha dicho, en alguna ejecutoria, la Corte, como órgano encargado de aplicar la ley, debe

interpretarla como fue redactada y para los fines con que fue hecha, y no puede decirse que un poder tenga más facultades que otro, ni supremacía sobre los demás, si hace uso de las que le demarca la misma Constitución, que es la Ley Suprema.

Controversia constitucional 2/32. Entre la Federación y el Estado de Oaxaca. 3 y 17 de octubre de 1932. Mayoría de catorce votos, en cuanto al primer punto resolutivo, mayoría de nueve votos respecto de las demás proposiciones. Los Ministros Díaz Lombardo, Calderón y Urbina no asistieron a la sesión en que se decidieron los últimos puntos. Disidentes: De la Fuente y Couto, Guzmán Vaca, Barba y Julio García. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XI, página 969, tesis de rubro "CONFLICTOS CONSTITUCIONALES".

Época: Quinta Época Registro: 279459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXVI Materia(s): Constitucional Tesis: Página: 1095

## CONFLICTOS CONSTITUCIONALES

Conforme al artículo 105 de la Constitución Federal, la Suprema Corte sólo puede conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados; entre los poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos; entre la Federación y uno o más Estados o de aquellos en que la Federación sea parte; y no puede considerarse que la Federación es parte de un conflicto, porque uno de sus órganos esté interesado en determinado asunto, ni que sea parte un Estado, si existe un motivo similar.

Conflicto constitucional. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 10 de junio de 1929. Unanimidad de catorce votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal constitucional, se logra a partir de la reforma de 1994, así como de la entrada en vigencia de la ley reglamentaria del artículo 105, ofreciéndole a la Corte lineamientos procesales a seguir de ya que con la estructura procesal de la controversia constitucional<sup>150</sup> así como de la acción de inconstitucionalidad,<sup>151</sup> nuestro máximo Tribunal ya no tuvo la necesidad de tomar las bases procesales de otro tipo de acción para darle forma a una acción constitucional ante ella presentada y en espera de recibir un pronunciamiento de análisis constitucional. En estos momentos sigue careciendo la Corte de estructuras procesales ya que no se han realizado las adecuaciones para darle entrada a la omisión legislativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha expresado al respecto en las siguientes tesis jurisprudenciales donde se puede observar la negativa de utilizar las estructuras procesales de la Acción de abstracta de Inconstitucionalidad así como de la Controversia Constitucional, para promover la *Omisión Legislativa*.

Época: Novena Época Registro: 178566 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 23/2005 Página: 781

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE LA ENTIDAD A LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN ESTATAL.

---

<sup>150</sup> Las controversias constitucionales son juicios que se promueven en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno; y lo que en ellas se convierte si alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial, contraviniendo con ello a la Constitución Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué son las controversias constitucionales? México, D.F., pág. 18.

<sup>151</sup> Las acciones de inconstitucionalidad, son procedimientos que se llevan en única instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos legislativos minoritarios, partidos políticos con registro federal o estatal o por el Procurador General de la República, mediante estos procedimientos se denuncia la posible contradicción entre una ley o un mandato internacional, por una parte y la Constitución, por la otra con el objeto de invalidar la ley o el tratado impugnados, para que prevalezcan los mandatos constitucionales. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? México, D.F. pág. 13



Del análisis gramatical y teleológico de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la omisión legislativa de ajustar los ordenamientos legales orgánicos y secundarios de una entidad federativa a las disposiciones de un Decreto por el que se modificó la Constitución Estatal, sino únicamente contra la posible contradicción entre la Constitución Federal y una norma general que haya sido promulgada y publicada en el medio oficial correspondiente, dado que a través de este mecanismo constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. Lo anterior se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la reforma del citado precepto constitucional, de donde se advierte que la intención del Órgano Reformador de la Constitución Federal, al crear la acción de inconstitucionalidad, fue la de establecer una vía para que los entes legitimados, entre ellos los partidos políticos, pudieran plantear ante esta Suprema Corte la posible contradicción entre una norma general publicada en el medio oficial correspondiente y la Constitución Federal, características que no reviste la aludida omisión del Congreso Local, dado que no constituye una norma general y menos aún ha sido promulgada y publicada, por lo que resulta improcedente dicha vía constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 7/2003. Partido de la Revolución Democrática. 4 de marzo de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 23/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil cinco.

Época: Novena Época Registro: 172562 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo

XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P. XV/2007 Página: 1534

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.

De la exposición de motivos del 6 de abril de 1995 y del dictamen de la Cámara de Origen del 10 de abril del mismo año, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su artículo 10, fracción II, se advierte que tienen la calidad de demandados en la controversia constitucional contra disposiciones generales los órganos que las hubiesen expedido y promulgado, pues intervinieron en diferentes etapas del proceso legislativo con que culminaron, además de que para su validez se requiere tanto de la aprobación como de la promulgación, lo que justifica que sea indispensable que concurren ambos entes al juicio, aunque no se reclamen vicios propios de cada una de las etapas legislativas, ya que el propósito de que se les llame como demandados es que sostengan la validez de la norma general, pero, principalmente, lograr *una adecuada tramitación y resolución de las controversias constitucionales*. Sin embargo, si lo que se reclama es una omisión legislativa, tampoco será obligatorio llamar a juicio a la autoridad que debió llevar a cabo la promulgación, pues es evidente que a este acto no se le atribuyen vicios propios.

Controversia constitucional 7/2005. Municipio de Carmen, Estado de Campeche. 28 de noviembre de 2006. Mayoría de siete votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz

Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número XV/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

### **Competencia Constitucional.**

La competencia se la otorgan a nuestro máximo Tribunal, los preceptos constitucionales, la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional así como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

### **El derecho a la última palabra.**

Latente se encuentra la circunstancia de que nuestro máximo Tribunal, dicte resolución violatoria de derechos humanos,<sup>152</sup> el derecho a ser considerado la última expresión de la causa que se pone a su consideración ha quedado atrás ya que dicha resolución será la pauta para que un Tribunal Supranacional pueda revisar y hacer el pronunciamiento de la procedencia o improcedencia de la violación manifestada. Ya que a los Tribunales Supranacionales les nace jurisdicción y competencia al agotar el derecho interno.

Tribunal Constitucional, “en el ejercicio de su papel como garante de los derechos fundamentales y de los valores constitucionales. Los Tribunales Constitucionales pueden y deben actuar de manera que no lleguen a cuestionar la dinámica de la integración. Ello será posible si se admiten todas las consecuencias que comporta la apertura de la Constitución...”<sup>153</sup>

“El Tribunal Constitucional limita su actividad a lo que ha determinado tiene la ley respecto de la Constitución, sin interferir en el ámbito de discrecionalidad del legislador,

---

<sup>152</sup> La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en diversas resoluciones que “los Tribunales de Constitucionalidad no son susceptibles de violación de derechos humanos”.

<sup>153</sup> Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Tribunal constitucional y dialogo entre Tribunales. Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid, 2013. Pág. 101.

así como excluir de su competencia todo discurso aplicativo en el que se ventile la validez de las normas, sino solo su preferencia circunstancial en el caso concreto”.<sup>154</sup>

## 2.3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TRIBUNAL DE LEGALIDAD

Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Tribunal de legalidad).<sup>155</sup>

A razón de las múltiples reformas realizadas a la estructura constitucional ello para ir dando la pauta de señalar como Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del primer párrafo de la fracción III del artículo 105 Constitucional<sup>156</sup> faculta a la Suprema Corte que en caso de relevancia y necesidad jurídica para el asentar el

---

<sup>154</sup> PRIETO SANCHIS Luis. *Tribunal constitucional y positivismo jurídico*. Visible. CARBONELL Miguel. Teoría de la constitución. Porrúa. México, D.F., 2005. Pág. 315.

<sup>155</sup> Época: Novena Época, Registro: 200790, Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo I, Junio de 1995, Materia(s): Laboral, Constitucional, Tesis: 2a. XXX/95, Página: 223  
COMPETENCIA. AL RESOLVER LA SUPREMA CORTE UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA, PUEDE DEJAR DE APLICAR UNA DISPOSICION DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO.

. . . es lógico que no por el hecho de desempeñarse como *tribunal de legalidad* pueda sustraerse de su vocación protectora de la Constitución, y decir que lo que sabe cómo tribunal de constitucionalidad lo ignora como tribunal de legalidad pues, ante todo, este máximo Tribunal Federal fue creado para velar y vigilar el respeto a la Carta Fundamental, y la técnica no puede estar por encima de ese propósito, pues ajustarse fundamentalmente a ella conduciría a conclusiones contradictorias pues en el conflicto competencial decidiría que el competente es ese tribunal federal, lo que incluso condicionaría la situación sustantiva del actor, y en el amparo otorgaría la protección constitucional por considerar contrario a la Constitución el precepto referido, determinando que no resulta competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Competencia laboral 67/95. Entre la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz. 21 de abril de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. Sandoval López.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 394, tesis 2a./J. 28/98, de rubro "COMPETENCIA. AL RESOLVER UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PUEDE DEJAR DE APLICAR UNA DISPOSICIÓN DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA."

<sup>156</sup> Artículo 105. Constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: . . .

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

precedente que debe de operar dentro de esa estructura de legalidad, podrá atraer dicha causa procesal para ser resuelta en el seno de este, ahora Tribunal constitucional.

La facultad de atracción, mediante la cual podrá conocer de los amparos directos y del recurso de revisión que se lleven ante los Tribunales Colegiados de Circuito, siendo el soporte las disposiciones indicadas en artículo 40 de la nueva ley de amparo.

La facultad de atracción no podrá ser ejercitada de forma o manera obligatoria sino como lo ha resulto nuestro máximo Tribunal de forma *discrecional*. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Época: Octava Época Registro: 206899 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: 3a./J. 43/91 Página: 62

ATRACCION, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL.

El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular.

Amparo en revisión 321/91. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. y otro. 8 de julio de 1991. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés.

Amparo en revisión 978/91. Gamesa, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 1991. Cinco votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.

Amparo directo 1011/91. Ricardo Sagarena Briones. 23 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo 1013/91. Carlos López Arias. 23 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

Amparo directo 1006/91. Ana Celina Ibarra de Valenzuela. 14 de octubre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

Tesis de Jurisprudencia 43/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, José Trinidad Lanz Cárdenas e Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.

Para que se de dicha facultad deberá de reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. De interés y trascendencia;<sup>157</sup>
2. Puede ser ejercida de oficio o a petición de parte;<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Época: Novena Época, Registro: 182638, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Común, Tesis: 1a. LXXXII/2003, Página: 82

FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA SU EJERCICIO.

De conformidad con el citado precepto constitucional, para que el ejercicio de esa facultad sea procedente deben satisfacerse todos y cada uno de los requisitos que señala, a saber: que se ejerza de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del procurador general de la República; que se trate de un recurso de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito; que la sentencia haya sido dictada en un proceso en que la Federación sea parte y que, por su interés y trascendencia, así lo amerite. En consecuencia, basta con que uno de tales requisitos no se materialice para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia constitucional y legal para conocer del recurso de apelación de que se trate. Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.

<sup>158</sup> Época: Octava Época, Registro: 206371, Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 72, Diciembre de 1993

3. Que se trate de un recurso de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito;
4. Que la Federación sea parte.

Así mismo diversa tesis indica dos requisitos adicionales:<sup>159</sup>

1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y

2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos

---

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 14/93, Página: 16

FACULTAD DE ATRACCION. LAS PARTES NO ESTAN LEGITIMADAS PARA SOLICITAR SU EJERCICIO.

De conformidad con los artículos 84 y 182 de la Ley de Amparo son dos las vías por las cuales este Alto Tribunal puede ejercer la facultad de atracción: a) de oficio y b) a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto o del procurador general de la República. Por lo tanto, las partes a que se refiere el artículo 5o. de la Ley de Amparo no están legitimadas para solicitar de este Alto Tribunal que ejerza la referida facultad, en virtud de que los artículos citados son claros al señalar a los únicos órganos facultados para ello.

Varios 16/89. Ricardo Nevarez Castro. 15 de junio de 1990. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores de Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

Varios 15/91. Ejido Xochimilco. 26 de septiembre de 1991. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: José Cantú Treviño.

Varios 39/91. Junta vecinal de San Pedro Tlalmimilulpan, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 22 de abril de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Noé Castañón León. Secretario: Noé Adonai Martínez Berman.

Varios 10/92. Robles Moreno Paula y Sebastián Alejandro Vargas. 16 de noviembre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Fausta Moreno Flores Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Varios 44/91. Refractarios Mexicanos, sociedad anónima de capital variable. 6 de septiembre de 1993. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: José Luis Mendoza Montiel.

Tesis de Jurisprudencia 14/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.

<sup>159</sup> Época: Novena Época Registro: 169885 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 27/2008 Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

## 2.4 TRIBUNAL LOCAL DE CONSTITUCIONALIDAD

Las resoluciones de las Cortes Constitucionales Estatales deberán ser definitivas e inatacables...<sup>160</sup>

De los primeros tratadistas que voltio sus giros de investigación hacia el derecho constitucional local es sin duda el maestro ARTEAGA NAVA,<sup>161</sup> en sus diversas obras ha hecho latente la necesidad el incremento y fortalecimiento de la teoría constitucional local.

Como el propio ARTEAGA NAVA indica es un intento de llegar a realizar una definición, que da por resultado: *por defensa de la constitución local, debe entenderse el cumulo de principios normativos de naturaleza fundamental que prevén y regulan las instituciones por virtud de las cuales las autoridades y los particulares deben ajustar su actuación a lo que ella dispone, que establecen las vías y acciones por las cuales las autoridades competentes, a petición de la parte interesada, anulen o dejen sin efectos los actos o hechos de autoridad que le son contrarios y, eventualmente, las vías e instancias por virtud de las cuales se sancione a quien haya actuado contra el texto de una norma de naturaleza suprema en el ámbito local.*<sup>162</sup>

Ahora bien resulta transcendental indicar el desarrollo teórico planteado por Cesar CAMACHO, “para dar eficacia a las constituciones locales, es importante que estas establezcan mecanismos que permitan tutelar lo dispuesto por ellas mismas, lo que necesariamente redundaría en el fortalecimiento del régimen interno al que se refiere el

---

<sup>160</sup> GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. *Ingeniería judicial y reforma del estado*. Porrúa. México, D.F. 2003. Pág. 132.

<sup>161</sup> ARTEAGA NAVA Elisur. *Derecho constitucional*. Ed. Oxford. México, D.F., 2008.

<sup>162</sup> ARTEAGA NAVA Elisur. *La Constitución local y su defensa. Elementos para una teoría del control de la constitucionalidad*. Visible en FERRER Mac-gregor Y VEGA Hernández Rodolfo. Coordinadores. Justicia Constitucional Local. Ed. Fudap. Querétaro, Qro. 2003. Pág. 14.



artículo 41 constitución federal.” De ahí la importancia de instituir un sistema integral de medios de control constitucional local que le permita a cada estado contar con Tribunales dotados de potestades Constitucionales, órganos terminales de materia de interpretación y control de las prescripciones jurídicas plasmadas en los respectivos textos constitucionales, así como la legislación secundaria para su adecuada reglamentación y eficacia jurídica. Esto contribuirá en definitiva a la consolidación de un federalismo judicial.

Ahora bien, en búsqueda de la eficacia del control de la constitucionalidad, para que a la eficacia se incorpore la eficiencia, deberán de contar con los elementos indispensables de competencia y que sus resoluciones sean de tribunal terminal, en busca de la interpretación constitucional local. Los elementos a los que nos hemos referido serían los siguientes:

- a) Delimitar competencia entre los tribunales constitucionales federal y local;
- b) Ofrecer la suspensión del acto que se somete a evaluación constitucional;
- c) Ampliar la gama de controles y procedimientos constitucionales;
- d) Ampliar la gama de entes legitimados;
- e) En cuanto a las estructuras legislativas, poner énfasis de que sea eficaz el procedimiento en cuanto a los porcentajes que pretendan establecer para legitimar a esos cuerpos legislativos.

Con lo anterior la incitación sería en la formación o estructuración de un Tribunal Constitucional (*permanente*), que este en funciones en todo tiempo y lo más trascendental es que ese Tribunal deberá de ser estructurado bajo el sistema concentrado. Si un Tribunal que esté por encima de la división de poderes clásica, para poder someterlos a su jurisdicción y competencia, y que sus resoluciones sean ó busquen la eficacia como eficiencia de un Tribunal Constitucional.

Diversos autores hacen ver a quien los estudian que no se puede observar una necesidad latente de tener un Tribunal Constitucional Local; proponen estadísticas de una

determinación de años y sus resoluciones; la forma en cómo están establecidos, como salas, como tribunal, que existe un procedimiento para formar y estructurar al Tribunal Constitucional o al que por diversa denominación realice las funciones de un Tribunal Constitucional, para resolver la problemática Constitucional que se presenta.

Es el caso de Nuevo León, Capítulo VI de la instrucción:<sup>163</sup>

Artículo 29. Recibida la demanda, el Presidente del Tribunal examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Si la controversia de inconstitucionalidad reúne los requisitos establecidos en esta Ley, el Presidente del Tribunal dictará el auto de admisión que corresponda.

Si los escritos de demanda, contestación o ampliación de éstos fueren oscuros o irregulares, el Presidente del Tribunal prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, Presidente del Tribunal correrá traslado al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, en el caso de que no se subsanaran las irregularidades sobre las que se hubiere hecho el requerimiento y si a juicio de éste, la importancia y trascendencia del asunto lo amerita y, con vista en su pedimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Artículo 30. Admitida la demanda, el Presidente del Tribunal ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.

---

<sup>163</sup> Ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del estado de Nuevo León.

La falta de contestación de la demanda, dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que en ellas se hubieren imputado directamente a la parte demandada o a la parte actora, según corresponda, salvo prueba en contrario.

Artículo 38. Una vez concluida la audiencia, el Presidente turnará el asunto al Pleno del Tribunal, quien designará una comisión de tres magistrados, a efecto de que procedan a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a solicitud de alguno de sus integrantes o de las partes, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias, podrá acordar que se difiera la designación de la comisión de magistrados para la elaboración del proyecto de resolución, así como la presentación, discusión y votación de la sentencia, en aquellos casos en que se tenga noticia de que el acto o norma impugnado en la controversia constitucional, también sea materia de un juicio pendiente de resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales de amparo.

La designación de la comisión de magistrados para la elaboración del proyecto de resolución y, por ende, la presentación, discusión y votación de la sentencia, deberá diferirse cuando se encuentre en trámite un recurso de reclamación, hasta en tanto se resuelva éste.

La SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, tuvo la necesidad de estudiar con profundidad y pronunciarse en cuanto el fortalecimiento del incipiente derecho procesal constitucional en materia local, ya que por medio de la controversia constitucional provocada por el Procurado General de Justicia, *caso que se conoce el amparo local en el estado de Veracruz*,<sup>164</sup> de la cual se desprende la facultad del estado de incluir en su menú

---

<sup>164</sup> Novena Época, No. Registro: 186307, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XXXIII/2002, Página: 903

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-

de derechos fundamentales, diversos derechos que a nivel federal aún no han sido positivados, a lo que la Corte resolvió que de acuerdo al régimen interior de los Estados y sin violentar el pacto federal,<sup>165</sup> no existe invasión a las esferas de competencia y por

---

LLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL.

De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la Ley Número 53 mediante la cual aquéllos fueron reformados, se desprende que la competencia que la Constitución Local le otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave, se circunscribe a conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la Constitución de aquella entidad federativa, por lo que dicha Sala no cuenta con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acorde con lo anterior, se concluye que los preceptos citados no invaden las atribuciones de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar los derechos humanos que prevé la Constitución Local citada, se limita exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserve a los gobernados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del Pacto Federal, de manera que la mencionada Sala Constitucional carece de competencia para resolver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta Magna. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación de los derechos humanos que expresamente se reserven implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la propia Constitución Estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo federal.

Controversia constitucional 16/2000. Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz. 9 de mayo de 2002. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidentes: Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Andrea Zambrana Castañeda.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de agosto en curso, aprobó, con el número XXXIII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil dos.

Nota: En términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis no constituye jurisprudencia, en virtud de que no reúne la votación mínima requerida para tal efecto.

<sup>165</sup> Octava Época. No. Registro: 207030. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VII, Marzo de 1991. Materia(s): Constitucional Tesis: 3a./J. 10/91 Página: 56 Genealogía: Gaceta número 39, Marzo de 1991, página 47. Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 186, página 185.

LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional.

consecuencia es procedente la capacidad legislativa del estado para positivizar diversos derechos, y en consecuencia deberá de proporcionar los mecanismos procesales para hacerlos valer y no solo eso sino indicar el ente jurisdiccional competente para dirimir cualquier enfrentamiento de la Litis, posiciones secundarias con los preceptos constitucionales locales. Cabe aclarar que el criterio jurisdiccional que se comenta no es JURISPRUDENCIA por no haber obtenido la votación requerida.

Ahora bien nuestro máximo Tribunal ha indicado la delimitación, que da sustento o soporte a la justicia constitucional local, ya que establece que las normatividad del estado deberán de ser analizada por la entidad federativa.

Época: Novena Época Registro: 192088 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 30/2000 Página: 812

CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.

Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional

---

Amparo en revisión 1838/89. Bufete Jurídico Fiscal, S. A. de C.V. y otros. 14 de mayo de 1990. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña.  
Amparo en revisión 3776/89. Carrancedo Alimentos, S. A. de C.V. 18 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.  
Amparo en revisión 252/90. Direvex, S. A. de C.V. 18 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.  
Amparo en revisión 2118/89. Constructora Copan, S. A. de C.V. 6 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.  
Amparo en revisión 2010/90. Sales del Bajío, S. A. de C.V. 13 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Tesis de Jurisprudencia 10/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y uno. Por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Llanos Duarte.

suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que sólo se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.

Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Careño Rivas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XLIV/96), se publique como jurisprudencial, con el número 30/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

## **2.5 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMATIVA DE LA FEDERAL Y EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. (ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)**

Para iniciar, es pertinente precisar que los mecanismos de control constitucional mencionados son los mismos a pesar de la ligera variación de nombre entre controversia de

constitucionalidad (constitución federal) y control de inconstitucionalidad (constitución local), es decir, nos encontramos ante una variación de denominación más no de figura jurídica.

Para proceder al análisis de la competencia primero se compararán los supuestos jurídicos y en lo sucesivo las partes.

Legislaciones tomadas en cuenta para el análisis:

- a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
- b. Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
- c. Constitución Política del estado de Nuevo León y
- d. Ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del estado de Nuevo León.

El análisis de la normatividad tiene a bien presentar, que estamos en presencia de normativa de reflejo, donde la legislación local se acopla o copia de la estructura federal:

- a. Efecto de competencia,
- b. Partes, entes legitimados,
- c. Términos, plazo para interponer la demanda,
- d. Pruebas,
- e. Sentencia con efectos generales.

En cuanto la instrucción, es donde difiere, ya que estamos en frente de estructuras diferentes.

El tribunal local, como no es una actividad generalizada o de competencia especializada, se forma o estructura el tribunal constitucional local con base al pleno, el pleno designa quien resuelve. Y la votación en base a porcentaje dos terceras partes.

Si no existe reforma que reestructure y finque competencia, nunca funcionara el esquema constitucional local, con la solo mutilación de las fracciones h y l del artículo 105 fracción primera; fracción d del artículo 105 fracción II.<sup>166</sup>

Esta reforma Constitucional dará fortaleza a las estructuras locales de todas las entidades federativas.

Además traería Tribunales Constitucionales locales eficientes y eficaces.

### **Controversia Constitucional**

<p>CONSTITUCION ESTADO DE NUEVO LEON</p> <p>LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 95 CONSTITUCIONAL</p>	<p>CONSTITUCION FEDERAL</p> <p>LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 105 CONSSTITUCIONAL</p>
--	---

### **COMPETENCIA /actos**

<p>CONSTITUCION</p> <p>Artículo 95 fracción I</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver,</p>	<p>CONSTITUCION</p> <p>Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos</p>
--	--

<sup>166</sup> Época: Novena Época Registro: 192088 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J.30/2000 Página: 812

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.

Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.



<p>en los términos que señale la Ley reglamentaria, de los siguientes medios de control de la constitucionalidad local:</p> <p>I. De la controversia de inconstitucionalidad local, que podrá promover el Estado y municipios, así como los poderes u órganos públicos estatales o municipales, para impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan su competencia garantizada por esta Constitución, y que provengan de otro diverso poder u órgano estatal o municipal. El Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias.</p> <p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>Artículo 10. Las controversias de inconstitucionalidad tienen por objeto que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los municipios o los órganos públicos estatales o municipales, puedan impugnar actos de autoridad o normas generales provenientes de otro de los poderes estatales u órganos públicos, estatales o municipales, que invada su competencia o sus atribuciones otorgadas</p>	<p>siguientes:</p> <p>I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:</p> <p>Párrafo reformado DOF 08-12-2005, 15-10-2012</p> <p>a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;</p> <p>b) La Federación y un municipio;</p> <p>c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;</p> <p>d) Un Estado y otro;</p> <p>e) Un Estado y el Distrito Federal;</p> <p>f) El Distrito Federal y un municipio;</p> <p>g) Dos municipios de diversos Estados;</p> <p><i>h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;</i></p> <p><i>I) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o</i></p>
---	--

<p>por la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen.</p> <p>El Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias de inconstitucionalidad.</p>	<p><i>disposiciones generales;</i></p> <p>j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; Inciso reformado DOF 11-06-2013</p> <p>k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y Inciso reformado DOF 11-06-2013</p> <p>l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución. Inciso adicionado DOF 11-06-2013. Reformado DOF 07-02-2014</p> <p>Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá</p>
---	--

	<p>efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.</p> <p>En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.</p>
--	---

PARTES /carácter.

<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>Artículo 11. Tendrán el carácter de partes en las controversias de inconstitucionalidad:</p> <p>I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;</p> <p>II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;</p> <p>III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 95 de la Constitución Política del Estado, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse; y,</p> <p>IV. El Procurador General de Justicia del Estado.</p>	<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>ARTICULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:</p> <p>I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;</p> <p>II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;</p> <p>III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución</p>
---	---

	<p>Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y</p> <p>IV. El Procurador General de la República</p>
--	---

### **TERMINOS/ Plazo para interponer la demanda**

LEY REGLAMENTARIA	LEY REGLAMENTARIA
<p>Artículo 25. El plazo para la presentación de la demanda será:</p> <p>I. Cuando se impugnen actos de autoridad, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento directo de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; y</p> <p>II. Cuando se impugnen normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial o medio oficial en que tales normas se hubieren publicado; o del</p>	<p>ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:</p> <p>I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;</p> <p>II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en</p>

<p>día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia de inconstitucionalidad.</p>	<p>que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y</p> <p>III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.</p>
---	--

## INSTRUCCIÓN.

<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>Artículo 29. Recibida la demanda, el Presidente del Tribunal examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano.</p> <p>Si la controversia de inconstitucionalidad reúne los requisitos establecidos en esta Ley, el Presidente del Tribunal dictará el auto de admisión que corresponda.</p> <p>Si los escritos de demanda, contestación o ampliación de éstos fueren oscuros o irregulares, el Presidente del Tribunal prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.</p> <p>De no subsanarse las irregularidades requeridas, Presidente del Tribunal correrá traslado al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, en el caso de que no se subsanaran las irregularidades sobre las que se hubiere hecho el requerimiento y si a juicio de éste, la importancia y trascendencia del asunto lo amerita y, con vista en su pedimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.</p>	<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>ARTICULO 24. Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.</p>
--	---

## PRUEBAS

LEY REGLAMENTARIA	LEY REGLAMENTARIA
<p>Artículo 33. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional por posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al Presidente del Tribunal desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia de inconstitucionalidad o no influyan en la sentencia definitiva.</p>	<p>ARTICULO 31. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.</p>

## SENTENCIAS/Efectos generales

LEY REGLAMENTARIA	LEY REGLAMENTARIA
<p>Artículo 42. En las controversias de inconstitucionalidad que versen sobre normas generales, para que éstas se declaren inválidas es necesario el voto de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y la declaración tendrá efectos generales. De no alcanzarse esa votación, se declararán desestimadas dichas controversias.</p> <p>Las sentencias que resuelvan controversias</p>	<p>ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.</p>

de inconstitucionalidad que versen sobre actos, tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia de inconstitucionalidad.	<p>En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.</p> <p>En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.</p>
---	--

### **Acción de Inconstitucionalidad**

CONSTITUCION ESTADO DE NUEVO LEON LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 95 CONSTITUCIONAL	CONSTITUCION FEDERAL LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 105 CONSSTITUCIONAL
---	--

### **LEGITIMACION**

CONSTITUCION  ARTÍCULO 95.- El Tribunal Superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para	CONSTITUCION  Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que
---	---



<p>conocer y resolver, en los términos que señale la Ley reglamentaria, de los siguientes medios de control de la constitucionalidad local:</p> <p>II.- De la acción de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas emanados de esta Constitución, o violen la distribución de competencias que en esta Constitución se establecen para el Estado y los municipios, o para cualquiera de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados, tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, y por los regidores, tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento, en los términos que determine la Ley reglamentaria. Esta acción también podrá promoverla el Procurador General de Justicia del Estado.</p> <p>Las sentencias dictadas para resolver una controversia de inconstitucionalidad local o una acción de inconstitucionalidad local,</p>	<p>señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:</p> <p>II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.</p> <p>Párrafo reformado DOF 22-08-1996</p> <p>Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:</p> <p>a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;</p> <p>b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;</p> <p>c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de</p>
--	---

<p>que declaren inconstitucional una norma general, tendrán efectos generales en todo el Estado cuando sean votadas por la mayoría calificada que determine la ley reglamentaria, a partir de la fecha en que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado o de la fecha posterior a la publicación que la propia sentencia ordene.</p> <p>Artículo 56. La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto impugnar normas generales expedidas por el Congreso del Estado o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen la Constitución Política del Estado de Nuevo León.</p>	<p>las entidades federativas; Inciso reformado DOF 10-02-2014</p> <p>d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, Inciso reformado DOF 22-08-1996</p> <p>e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y Inciso reformado DOF 22-08-1996</p> <p>f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; Inciso adicionado DOF 22-08-1996. Reformado DOF 10-02-2014</p> <p>g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así</p>
--	---

<p>Artículo 57. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título Segundo de esta Ley.</p>	<p>como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>Inciso adicionado DOF 14-09-2006. Reformado DOF 10-06-2011</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea</p>
--	---

	<p>Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>Inciso adicionado DOF 07-02-2014</p> <p>i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;</p> <p>Inciso adicionado DOF 10-02-2014</p> <p>La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.</p> <p>Párrafo adicionado DOF 22-08-1996</p> <p>Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.</p> <p>Párrafo adicionado DOF 22-08-1996</p> <p>Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.</p>
--	---

	<p>LEY REGLAMENTATIA</p> <p>ARTICULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.</p>
<p>Artículo 61. Cuando lo que se impugne sean normas generales expedidas por el Congreso del Estado, la demanda en que se ejercite la acción de inconstitucionalidad deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los diputados integrantes del propio Congreso.</p> <p>Cuando lo que se impugne sean normas generales expedidas por un ayuntamiento, la demanda en que se ejercite la acción de inconstitucionalidad deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los regidores integrantes del respectivo Ayuntamiento.</p> <p>El Procurador General de Justicia del Estado también está legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de normas generales expedidas por el Congreso o cualquier Ayuntamiento.</p>	<p>ARTICULO 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.</p> <p>La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como representantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes</p>

	<p>y recursos previstos en esta ley.</p> <p>En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento.</p>
--	---

#### **TERMINOS/Presentación demanda**

<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>Artículo 58. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o la disposición de carácter general impugnada sean publicadas en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.</p> <p>En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.</p>	<p>LEY REGLAMENTARIA</p> <p>ARTICULO 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.</p>
--	---

## Sentencia

LEY REGLAMENTARIA	LEY REGLAMENTARIA
<p>Artículo 71. Al dictar sentencia, el Tribunal Superior de Justicia corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.</p> <p>En todos los casos, el Tribunal Superior de Justicia deberá suplir la deficiencia de los conceptos de invalidez cuando la norma general impugnada se funde en un precepto de la Constitución Política del Estado o en las leyes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en jurisprudencia, o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hubieren declarado inconstitucionales o nulas, según sea el caso.</p> <p>Artículo 72. Las sentencias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que resuelvan una acción de inconstitucionalidad sólo podrán declarar la invalidez de las normas</p>	<p>ARTÍCULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.</p> <p>Párrafo reformado DOF 27-01-2015</p> <p>Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.</p> <p>Párrafo adicionado DOF 22-11-1996</p>

<p>generales impugnadas cuando sean aprobadas con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno.</p> <p>Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia desestimaré la acción de inconstitucionalidad ejercitada y ordenará el archivo del asunto.</p>	<p>ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimaré la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.</p> <p>Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>
--	---



## **Criterios jurisprudenciales**

De esta tesis de jurisprudencia hay que tomar los siguientes puntos en cuenta:

- a) Diferencias entre Controversias constitucionales y la Acción de inconstitucionalidad.
- b) La función más importante de la figura Controversia Constitucional, es sin duda la salvaguarda de la teoría de división de poderes.

Época: Novena Época Registro: 191381 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 71/2000  
Página: 965

**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.**

Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la

existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.

Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 71/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 875, tesis P./J. 83/2001 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."

### **Legitimación, las partes**

Época: Novena Época Registro: 172641 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 7/2007 Página: 1513

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.

La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o

aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El Procurador General de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

Recurso de reclamación 340/2006-PL, derivado de la acción de inconstitucionalidad 44/2006. Movimiento Civilista Independiente, A.C. 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 7/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

El valor de la decisión, el valor de la votación, no existe penalidad para quien vota a favor en una legislatura y concurren ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formando parte del porcentaje que los legitime para la tramitación de la acción de inconstitucionalidad.

Época: Novena Época Registro: 190235 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Marzo de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2001 Página: 448

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.

Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal no se advierte que exija como requisito de procedencia de la acción de inconstitucionalidad que el porcentaje de los integrantes del órgano legislativo autorizado para ejercerla, deban ser necesariamente los legisladores que votaron en contra o disintieron de la opinión de la mayoría del órgano legislativo emisor de la norma. En efecto, el precepto constitucional en cita únicamente establece como requisito para su procedencia, que sea ejercida por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano legislativo estatal que haya expedido la norma que se combate, por lo que basta que se reúna ese porcentaje de legisladores para que se pueda promover dicha acción, sin importar que quienes lo hagan, hayan votado, o no, en contra de la norma expedida por el órgano legislativo al que pertenecen o, inclusive, que hubieran votado en favor de su aprobación, pues no debe pasar inadvertido que el referido medio de control de la constitucionalidad se promueve con el único interés genérico de preservar la supremacía constitucional, pues como lo señala la exposición de motivos correspondiente "... el hecho de que en las acciones de inconstitucionalidad no se presente una controversia entre un órgano legislativo y un porcentaje de sus integrantes o el procurador general de la

República, exige que su procedimiento de tramitación no deba plantearse como si se estuviera ante una verdadera litis.".

Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil uno.

Procedencia de la Acción de inconstitucionalidad, en cuanto a reformas constitucionales de las entidades federadas, y el derecho procesal constitucional local, sin desarrollo, hasta este momento.

Época: Novena Época Registro: 190234 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Marzo de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 18/2001 Página: 469

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO LOS MISMOS DEBAN INTERVENIR.

De lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, se desprende que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de algún órgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio órgano, la demanda correspondiente deberá estar firmada cuando menos por el equivalente al

treinta y tres por ciento de quienes integran el mismo. En este sentido, por "órgano legislativo estatal" debe entenderse aquel en el que se deposita el Poder Legislativo de un Estado conforme a su propia Constitución, pues éste y no otro es el depositario de dicha función legislativa. Por tanto, cuando en la mencionada vía se plantea la invalidez de una reforma o adición a una Constitución Local para lo cual la misma norma requiera la intervención de los Ayuntamientos del propio Estado, como lo establece la Constitución de Tabasco, tal circunstancia no modifica la naturaleza del Congreso Estatal como depositario del Poder Legislativo y órgano emisor de la ley, por lo que el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de dicho cuerpo legislativo sí está legitimado para impugnar dicha reforma o adición. Ello es así, porque del mismo modo en que la aprobación, promulgación y publicación de las leyes que realiza el titular del Poder Ejecutivo no hace que éste forme parte integrante del Congreso, ni que deba tomársele en cuenta para calcular el treinta y tres por ciento de sus miembros, la participación de los Ayuntamientos en el acto de aprobación de las reformas constitucionales que expida el Congreso, no da lugar a que se les considere parte integrante del "órgano legislativo" pues no actúan como diputados, ni forman un órgano deliberante, sino que, en su carácter de entidades políticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a la Constitución Estatal; esto es, son entes públicos que intervienen en el proceso de formación de las normas locales supremas para validar con su voto las modificaciones a la Constitución, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso Local como órgano legislativo que permanentemente ejerce esa función.

Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 18/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil uno.

## 2.6 VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN

El Estado para realizar su actividad y dar cumplimiento a sus atribuciones que se enumeran en el cuerpo constitucional y leyes secundarias, requiere ciertas facultades y la realización de actividades que en algunas ocasiones trae un perjuicio directo al gobernado ya que ese acto de autoridad ha lesionado su campo de derecho el cual se encuentra protegido por el mismo cuerpo normativo. En algunas ocasiones dicha actividad lesiona directamente un precepto constitucional y con ello da como resultado una violación directa a nuestra constitución. Entendiendo por “*Constitución*”<sup>167</sup>, *una Constitución se define como la ley fundamental y suprema de un Estado, que atañe tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos del hombre y pueblo de un Estado*. Además, la Constitución estipula los derechos y deberes tanto de los gobernantes como de los gobernados en orden a la solidaridad social, para algunos constitucionalistas es el conjunto de normas que reglamentan diversas instituciones.

Ahora bien la actividad realizada por el Estado,. . . “para dar cumplimiento a sus atribuciones, se traduce en el ejercicio del poder público, y que como consecuencia, genera lo que se conoce como acto de autoridad”.<sup>168</sup> Cuando este acto de autoridad en contrario a la Constitución estaremos en presencia de una violación directa a la Constitución. Por lo que tendremos que entender por violaciones directas a la Constitución a las actuaciones de la autoridad, que infringen y vulneran de forma directa un derecho fundamental, de forma concreta de una obligación deber del estado y material sobre un derecho subjetivo público, de los gobernados.

---

<sup>167</sup> DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa, México, 2007, páginas 790 y 791.

<sup>168</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, Hugo. *El nuevo juicio de amparo en México*. Rehtikal. Primera ed. México, 2013. Pág. 191



El acto de autoridad, en la contienda procesal se convierte en el acto reclamo dentro del procedimiento constitucional del juicio de amparo,[. . .] “donde debemos de entender por acto reclamado, lo consiste en hacer, un no hacer e incluso la probabilidad de hacer, que el quejoso o agraviado imputa a la autoridad responsable, como violatorio”.<sup>169</sup> De lo anterior se desprende que el acto reclamado se le puede imputar a la autoridad en tres tipos: a) los que impiden un hacer (positivos); b) los que conlleven un no hacer o abstención (actos negativos), y c) los que aún no se han realizado, pero respecto de los cuales el titular de la acción de amparo puede probar, que se van a producir por consecuencia natural de otros efectuados por la autoridad.

Las violaciones *directas a la constitución* constituyen una contradicción literal de los preceptos constitucionales. Otra forma de observar que se está en frente de una violación directa con la constitución es cuando los mismos preceptos constitucionales o diversas articulaciones de normas secundarias permiten ir directo al juicio de amparo sin agotar los mecanismos ordinarios (principio de definitividad), ello lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia en diversas Tesis o Jurisprudencias.

Época: Décima Época Registro: 2009153 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 15 de mayo de 2015 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: I.2o.P.39 P (10a.)

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO INCIDENTAL EN QUE SE REALIZA EL CÓMPUTO DE COMPURGACIÓN DE LA PENA PREVENTIVA CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLO.

---

<sup>169</sup> RUIZ TORRES Humberto Enrique. *Diccionario del juicio de amparo*. Ed. Oxford. México, 2005. Pag.7

La determinación incidental en la que la autoridad judicial determina que no es procedente realizar el cálculo de compurgación de la pena preventiva en los términos pretendidos por el promovente del amparo, constituye una resolución dictada dentro de juicio que afecta la libertad personal, en tanto que incide en los términos y lapso en que el sentenciado permanecerá afectado de su libertad de ambulatoria, o modifica las condiciones en las que tal privación deba ejecutarse, de modo tal que esa resolución afecta dicha autonomía personal, en tanto que incide en los términos y lapso en que el sentenciado permanecerá afectado de aquélla, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 6/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.", por lo que constituye una excepción al principio de definitividad y, por ende, el juicio de amparo indirecto en su contra puede promoverse sin agotar los recursos ordinarios legalmente establecidos, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 165/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig. Secretario: Alejandro Rodríguez García.

Nota: La tesis 1a./J. 6/2011 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2181.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época Registro: 2009267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de mayo de 2015 09:40 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: I.3o.C.64 K (10a.)

## PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la

incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa.

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 117/2013. Corporativo Zéndere I, S.A. Promotora de Inversión de C.V. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de mayo de 2015 a las 09:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Las violaciones procesales serán las violaciones indirectas a la constitución, que debemos de tener presente ya que cualquier violación de legalidad acorde a las articulaciones de la ley en estudio o en su caso de la Constitución, se dará dicha violación indirecta por no haber atendido la secuela procesal, violaciones que podrán ser objeto de análisis del tribunal constitucional.

Hay que tener en cuenta de la importancia del principio de definitividad planteado dentro de la estructura del juicio de amparo, ya que de no existir dicho principio, el juicio de amparo se convertiría en el mecanismo procesal para hacer valer cualquier violación de carácter procesal. Sobre lo anterior ya se ha manifestado en recientes tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "... en el caso de temas relativos a violaciones indirectas, la regla general sería la no admisión; existían abusos tratándose de los amparos directos..."<sup>170</sup>

Para el Maestro Hugo MARTÍNEZ GARCÍA. "Significa que antes de ocurrir al juicio de amparo, se deben de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, previstos por la ley ordinaria o reglamento de donde deriva el acto autoritario, y a través de los cuales sea posible revocarlos o modificarlos. La finalidad es la de evitar el abuso del amparo".<sup>171</sup> Pero debemos tener en cuenta lo expresado por Juventino V. CASTRO respecto del principio que se analiza. "La esencia de este principio resalta por sí mismo, ya que pretende que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de los actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual si el resultado que se pretende el agraviado

---

<sup>170</sup> Época: Décima Época. Registro: 2007363. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A.91 A (10a.), Página: 2357. RUBRO: AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. MOTIVOS DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN EL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINÓ LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011 Y DEL EMISOR DE LA LEY DE AMPARO, QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO Y EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 170, FRACCIONES I Y II, DE DICHO ORDENAMIENTO Y DEFINIR CONCRETAMENTE EL SISTEMA JURÍDICO CONCERNIENTE A LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA RELATIVOS.

<sup>171</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, Hugo. El proceso constitucional de amparo en México. Facdyc, UANL, Monterrey, N.L., invierno de 2014, Pág. 47.

puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, se impide la utilización innecesaria del proceso constitucional, o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios, o bien se traduzcan en resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos”.<sup>172</sup>

Ahora bien, nuestro máximo Tribunal, en su momento de las primeras controversias que se presentaron antes de la reforma constitucional de 1995, tuvo un enfrentamiento teórico de gran trascendencia ya que lo que buscaba en esos momentos era discutir sobre los límites competenciales, ya que no existía una formación teórica, doctrina o jurisprudencial en el estado Mexicano, de aceptable alcance, tocaba construir y con ello los primeros razonamientos.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia por medio de tres resoluciones (tres criterios), deja claro que en cuanto a la Controversia Constitucional, ser el Tribunal competente, para dirimir la violación de invasión de esfera de competencia.

Primera. Solo se podrá estudiar, planteamientos, donde se hagan valer violaciones directas a la constitución federal y no violaciones indirectas.

Época: Novena Época Registro: 192088 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 30/2000 Página: 812

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.

Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en

---

<sup>172</sup> CASTRO, Juventino V. Garantías y amparo. Ed. Porrúa, México, 1974, Pág. 334.

consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. *Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que sólo se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.*

Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Careño Rivas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XLIV/96), se publique como jurisprudencial, con el número 30/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

Segunda. Por medio de la controversia no se pueden tramitar violaciones indirectas a la Constitución, general.

Época: Novena Época Registro: 198912 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Abril de 1997 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 23/97 Página: 134

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS.

Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, *si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían.* Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.

Controversia constitucional 6/96. Alfonso Vázquez Reyes y Margarito Solano Díaz, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapam, del Estado de Oaxaca, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 10 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número 23/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

Nota: El criterio contenido en esta tesis ha sido superado por el contenido en la tesis P./J. 98/99, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."



Tercera. Se conoce como caso tabasco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pronuncia que las controversias constitucionales su ámbito de competencia solo será invasión de esferas de competencia.

Cabe destacar que los tres casos fueron presentados antes de la entrada de la reforma constitucional del 1995.

## CONCLUSIONES.

1. Reforma constitucional,
2. Tribunal Constitucional estructurado bajo la teoría del sistema concentrado, y
3. Tribunal de legalidad.

En busca de la eficiencia y eficacia de un Tribunal Local caso Nuevo León, solo tres conclusiones se desprenden para encontrar lo que se busca con esta investigación.

### Primera.

Los Tribunales Federales, hasta el día de hoy, gozan de un respeto, a sus instituciones, por diversas circunstancias la más respetable son sus resoluciones que en ciertos momentos han detenido el abuso de los otros poderes hacia el gobernado, se han manifestado absurdos donde la nueva ley o reglamento con tintes de inconstitucionalidad desde su creación, los legisladores han indicado dejemos que la Corte nos diga quien tiene la razón. Lo que no han entendido, es que no siempre la Corte, puede pronunciarse ante su ineficiente trabajo. En el supuesto de que uno, de todos los mexicanos manifieste su violación y llegue a los Tribunales ya ganamos por que la Corte tendrá que pronunciarse, y si las inconstitucionalidades planteadas, han sido planteadas, se logró que no se diera el abuso de los otros poderes, hacia el gobernado.

Dentro esa posición de confianza, se le permite que todo ciudadano que tenga que plantear una inconstitucionalidad vayan a la Corte, sin fijarse que en algunos casos no sería el Tribunal inmediatamente competente por que puede existir un Tribunal o una estructura de Tribunal Constitucional en dicha entidad federada, pero concurrirnos a la Corte.

Para fijar la competencia de los Tribunales Constitucionales, se requiere de una reforma Constitucional donde se suprima del artículo 105 constitucional<sup>173</sup> de la fracción I

---

<sup>173</sup> Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

los incisos (h y i), de la fracción II inciso (d) y con ello fijan competencia, dando inicio a la teoría constitucional procesal en dicha entidad federativa, si no se da la reforma en comento, no podríamos ver funcionar un Tribunal Constitucional local, el cual buscara reconocimiento, confianza, ser un Tribunal Constitucional Local eficiente y eficaz.

Fijar competencia a los tribunales locales de constitucionalidad no debe ser tomado como un retroceso, sino por el contrario debe ofrecer confianza en que serán órganos jurisdiccionales especializados los que tendrán a su cargo ese efecto de competencia para dirimir cualquier enfrentamiento constitucional y hacer valer la supremacía constitucional local. Alcanzando lo anterior estaríamos inmediatamente sumergidos en otra problemática que sería obtener la plena jurisdicción, aspecto al que podremos aspirar por medio del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Local.

El ámbito de la magistratura se ha especializado, a un ritmo lento pero las resoluciones emitidas los han ido legitimando en su estructura de especialidad y sin dudarlo los Tribunales se van exteriorizar de forma eficaz y eficiente por medio de sus resoluciones, según avance la especialización de los tribunales a ahora porque resistirse a una modificación constitucional para suprimirle competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ofrecérsela a los Tribunales local.

- 
- I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
    - h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    - i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
  - II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.  
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
    - d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano,

## **Segunda.**

Para que cumpla con los planteamientos teóricos debemos de estructurar nuestro Tribunal dentro del sistema concentrado, imaginemos un organigrama de la división de poderes, y ver una estructura de poder por encima de la teoría clásica de la división de poderes. En adición tendrá la libertad de pronunciarse en todo lo que se incite, adicionalmente debe ser un Tribunal Permanente que se advierta, los demás poderes que existe un guardián de la supremacía constitucional, otorgándole mayor ámbito de competencia.

Cabe destacar los siguientes datos estadísticos planteados por la investigación realizada por *CESAR CAMACHO QUIROZ*, donde se puede observar que de los treinta y un estados que forma parte del nuestro país, solo veintiséis han logrado establecer dentro de su cuerpo constitucional; las reformas que dan soporte a la estructura de tribunales locales de constitucionalidad, pero que su contenido no permite una eficacia o en su caso ser eficiente, de los veintiséis entidades que nos referimos solo cuatro tienen un Tribunal Constitucional permanente, con diversa nomenclatura al referirse al Tribunal Constitucional del Estado. Pero la eficacia que estamos buscando de estos Tribunales no se puede y no se va a dar por que están sometidos al Poder Judicial de la entidad federada a la que pertenecen. Por ejemplo:

### *1. Chiapas.*

Artículo 56 Constitucional. El poder judicial para su ejercicio de sus atribuciones se deposita en los órganos siguientes:

- I. El Tribunal Superior de Justicia. (...)

Artículo 57 Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia se integra por:

- I. **El Tribunal Constitucional,**
- II. Salas regionales colegiadas.

## 2. Estado de México.

Artículo 88.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en:

a) Un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno, **Sala Constitucional**, Salas Colegiadas y Unitarias Regionales; (...)

Artículo 88 BIS.- Corresponde a la Sala Constitucional: I. Garantizar la supremacía y control de esta Constitución; II. Substanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se deriven de esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, surgidos entre: a) El Estado y uno o más Municipios; b) Un Municipio y otro; c) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado; d) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado. III. Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de leyes, reglamentos estatales o municipales, bandos municipales o decretos de carácter general por considerarse contrarios a esta Constitución, y que sean promovidos dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma en el medio oficial correspondiente, por: a) El Gobernador del Estado; b) Cuando menos el treinta y tres por ciento de los miembros de la Legislatura; c) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de un Ayuntamiento del Estado; d) La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos. IV. La Sala Constitucional conocerá de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas en donde se inapliquen normas en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad, en los términos que señale la ley. Las resoluciones dictadas en los procesos a que se refiere este artículo, que declaren la invalidez de disposiciones generales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los Municipios, tendrán efectos generales cuando se han aprobados cuando menos por cuatro votos de los integrantes de la Sala Constitucional. Las resoluciones que no fueren aprobadas por cuatro de cinco votos, tendrán efectos particulares. Contra la resolución emitida por la Sala Constitucional en primera instancia, podrá interponer el recurso de revisión, mismo que será resuelto por la propia Sala, y para su aprobación se requerirá de unanimidad de votos. En caso de que la controversia o acción de inconstitucionalidad verse sobre la constitucionalidad de actos, o presunta violación o contradicción de preceptos constitucionales federales, se estará a lo dispuesto en la

Constitución General de la Republica, así como a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

### 3. Oaxaca

Artículo 106.- Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia: A. (...)

B. Corresponde a la **Sala Constitucional**, en los términos que señale la ley: I.- Conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre, a) Dos o más municipios; b) Uno o más municipios y el Poder Legislativo; c) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo; d) El Poder Ejecutivo y el Legislativo; y e) Entre Órganos Autónomos, o entre éstos y el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, o los Municipios. Cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, y surtirá efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; II.- Conocer, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales locales, de las acciones de inconstitucionalidad contra una norma de carácter general que se considere contraria a esta Constitución y que dentro de los treinta días siguientes a su publicación, se ejerciten por: (Fracción II del apartado B del artículo 106 reformada mediante decreto número 1263 aprobado el 30 de junio del 2015 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 30 de junio del 2015) a) Cuando menos treinta por ciento de los Diputados, b) El Gobernador del Estado, y c) Los órganos autónomos del Estado, en las materias de sus respectivas competencias. Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por las dos terceras partes de los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y surtirán sus efectos a partir de su publicación, sin poder aplicarse retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos del orden penal y en beneficio del inculcado; H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LXI Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas PODER LEGISLATIVO 74 III.- Conocer de las peticiones formuladas por los demás Tribunales y Jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley

local, en el proceso sobre el cual tengan conocimiento, en los términos que disponga la Ley. Las resoluciones dictadas por las dos terceras partes de los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrán efectos de criterios orientadores no vinculantes; IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado o por los órganos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros; V.- Substanciar el juicio para la protección de los derechos humanos, por incumplimiento de las recomendaciones hechas a la autoridad por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. VI.- Solventar y resolver los recursos relativos a los requisitos de la revocación del mandato señalados en el artículo 25 de la Constitución, en los términos y plazos señalados por la Ley.

#### 4. Quintana Roo

Artículo 105.- Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII del artículo 103 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una **Sala Constitucional y Administrativa**, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en los términos de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los siguientes medios de control:

I. De las Controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, surjan entre:

- A) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo;
- B) El Poder Ejecutivo y uno de los municipios;
- C) El Poder Legislativo y uno de los municipios; y
- D) Dos o más municipios del Estado.

Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá acreditar el interés jurídico.

La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y los casos en que proceda la suspensión del acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse cuando se demande la invalidez de disposiciones generales.

La misma ley establecerá las condiciones para que tengan efectos generales, las resoluciones sobre controversias que impugnen la validez constitucional de disposiciones generales;

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, siempre que se ejerzan dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

A) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del Estado;

B) El Procurador General de Justicia del Estado, en contra de leyes de carácter estatal.

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma impugnada.

Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando menos las dos terceras partes del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal;

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto, y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, siempre y cuando sean interpuestas por:

A) El Gobernador del Estado; o

B) Un Ayuntamiento del Estado.



La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o Decreto de que se trate la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse o el inmediato siguiente de la Legislatura del Estado; pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.

La Sala Constitucional y Administrativa, de oficio o a petición de parte, también conocerá de las contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la fracción IX del artículo 103 de esta Constitución. La Ley establecerá los términos en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

En los cuatro casos se puede observar plenamente las figuras de la jurisdicción y competencia, pero aun siendo Tribunales establecidos y permanentes y adolecen de autonomía ya que solo procesan la denuncia al momento de la resolución ellos formulan o proyectan la resolución pero se pone a consideración del pleno, para su votación.

Tribunales estructurados bajo el sistema de control concentrado, pero nuevamente híbrido.

Al construir este Tribunal y habiendo establecido que sería bajo los postulados del sistema de control concentrado no pueden dejar pasar el primer y más importante postulado de este sistema que es su posición geográfica en una muestra del organigrama deberá aparecer por encima del Poder Judicial y con ello dará muestra de su autonomía. Que en consecuencia será un Tribunal eficaz en sus resoluciones y eficiente en sus procedimientos internos.

Cabe precisar que el caso de la entidad federada de Quintana Roo, hay una ampliación a efectos de competencia donde se puede apreciar que tendrá a su cargo a demás la materia administrativa.

### **Tercera.**

En cuanto al control de legalidad en una nueva configuración, que resulta indispensable porque se requiere obligar no solo a los gobernados sino también a la administración pública, en lo general pero en cuanto lo particular sería a los jueces, todo apegarse al mandato e imperio de la ley escrita.

A lo anterior, en diversos momentos se han diseñado diversos instrumentos procesales como la casación, cuyo objetivo se encontraba en revisar la resolución impugnada, estuviera acorde al estipulado por la letra de la ley (legalidad).

El transcurso del tiempo ha ofrecido diversas modificaciones al control de legalidad, llegando a consolidarse; pasa de ser un instrumento encargado de verificar la estricta aplicación de las normas escritas, a un control de evaluar la correcta aplicación de la ley.

Para darle firmeza al Tribunal Constitucional Local debemos de tapar otra salida, que son las violaciones indirectas a la constitución federal que se pueden traducir en legalidad.

Porque de lo anterior, el Tribunal Constitucional dentro de la instrucción (etapa procesal de fijación de la Litis, ofrecimiento calificación y desahogo de pruebas ofrecidas), el Tribunal constitucional podría en su caso cometer una violación procesal, que puede producirse en una violación indirecta a la constitución Federal, sino es atendida y resuelta.

Se presentan dos circunstancias:

1. Al resolver el Tribunal Constitucional no entraría al análisis del procedimiento,
2. Antes de resolver la Constitucionalidad, un Tribunal de Legalidad calificaría el procedimiento, donde determinaría que no se haya producido, violación procesal.

En la primera circunstancia, podríamos ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por violaciones indirectas a la Constitución Federal.

En caso de que se estructurará y se pusiera en práctica ese tribunal competente para analizar la legalidad se evitaría que sea analizado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, bajo el concepto de violaciones indirectas a la Constitución Federal.

Lo anterior daría fortaleza a las decisiones jurisdiccionales en base a la competencia constitucional local.

El órgano jurisdiccional en construcción, deberá de estar contemplado dentro del Poder Jurisdiccional del Estado, recordando que el Tribunal Constitucional local estaría basado en la teoría del sistema concentrado, por encima de los demás poderes.

Podría ser una Sala de Legalidad (basado en el esquema de la casación).

## BIBLIOGRAFÍA

ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. Madrid, 2002.

ACUÑA MÉNDEZ, Francisco. “La Controversia constitucional en México”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2004.

AGRAZ, Cesar Eduardo. Hacia una nueva legitimación de la acción de inconstitucionalidad. Porrúa, México, 2005.

AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique y otros. Neoconstitucionalismo democracia y derechos fundamentales. Porrúa. México, D.F., 2010.

AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique. La democracia en el estado constitucional. Porrúa. México, D.F., 2009.

\_\_\_\_\_. Pensamiento político contemporáneo. Una panorámica. Porrúa. México, D.F., 2008.

\_\_\_\_\_. Teoría de los derechos humanos. Grijley. Perú, 2011.

\_\_\_\_\_. Teoría política y jurídica. Porrúa. México, D.F., 2008.

AGUILO REGLA, Josep. “La Constitución del Estado Constitucional”. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia. 2004.

\_\_\_\_\_, Teoría general de las fuentes del Derecho. Ariel. Barcelona, 2000.

ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Gedisa. Barcelona, 1994.

\_\_\_\_\_, Teoría de la argumentación jurídica. CEPC. Madrid, 2007.

ALMANZA VEGA, Rigoberto Delfino. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y los nuevos paradigmas del juicio de amparo. Porrúa. México, 2015.

- ALVAREZ Cibrián Felipe de Jesús y otros. El constitucionalismo ante el control de convencionalidad su debate actual. Porrúa, México, D.F., 2015.
- ANZOLA GIL, Caballero Sierra. Teoría constitucional. Temis. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995.
- ARAGÓN REYES, Manuel, Constitución, democracia y control, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.
- ARMENTA LÓPEZ, Leonel Alejandro. La forma federal del estado. Unam. México, D.F., 2005.
- ARTEAGA NAVA, Elisur La controversia Constitucional, la acción de inconstitucional y la facultad de investigación de la corte el caso Tabasco y otros. Editorial Montenalto, Tercera edición. México, D.F. 1997.
- \_\_\_\_\_, “Derecho Constitucional”. Editorial Oxford México, S.A, Segunda edición, México, 1999.
- \_\_\_\_\_, El sistema federal mexicano. Porrúa. México, D.F., 2013.
- \_\_\_\_\_, La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la facultad investigadora de la Corte el caso tabasco y otros. Montealto. Tercera edición. México, D.F., 1997.
- Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Tribunal constitucional y dialogo entre Tribunales. Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid, 2013.
- ASTUDILLO, Cesar. El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México. Tirant lo Blanch, México, D.F., 2014.
- ASTUDILLO, Cesar y otro. Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2007.
- ATIENZA Manuel y VIGO, Rodolfo L. argumentación constitucional, teoría y práctica. Porrúa. Instituto Mexicano de Derecho procesal Constitucional. México, D.F., 2011.

- AYLLON GONZÁLEZ María Estela. Manual de derecho constitucional mexicano. Porrúa. México, D.F., 2010.
- AYLLON GONZÁLEZ, Ma. Estela. GARCÍA FERNÁNDEZ Dora. Coordinadoras. Temas selectos de derecho constitucional. Porrúa. Universidad Anáhuac. México, D.F., 2006.
- BALBUENA Cisneros, Arminda. Suprema Corte de Justicia de la Nación y jurisprudencia constitucional en México. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, Gto., 2005.
- BARCELO ROJAS, Daniel Armando. Introducción al derecho constitucional estatal estadounidense. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2009.
- BARRAGÁN BARRAGÁN, José. El federalismo mexicano. Unam. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2007.
- BARROSO, Luis Roberto. El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho. Unam. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2008.
- \_\_\_\_\_, El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho. Unam. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2008.
- BARRY, Brian. La teoría liberal de la justicia. Fondo de cultura económica. México, 1993.
- BAZÁN, Víctor. “Jurisdicción constitucional y control de la constitucionalidad de los tratados internacionales”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., México, D.F. 2003.
- BECERRA BAUTISTA, José. El proceso Civil en México. Porrúa. México, D.F., 2003.
- BENÍTEZ TREVIÑO, V. Humberto. La Sala Constitucional del Estado de México, como expresión del federalismo del siglo XXI. UNAM. México, D.F., 2005.
- BIDART CAMPOS, Germán, La Corte Suprema. El Tribunal de Garantías Constitucionales, 2a. ed., Ediar, Buenos Aires, 1984.
- BONILLA LÓPEZ, Miguel. Tribunales, normas y derechos. Tirant lo Blanch. México, D.F., 2015.

- BRAVO PERALTA, Martin Virgilio. Método del caso jurisprudencial. Porrúa. México, D.F., 2014.
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Estudios jurídicos en homenaje al doctor Diego Valadés. Porrúa. México, 2007.
- BURRUEL HUERTA, Leopoldo. Principios constitucionales. Desde la Constitución Mexicana hasta la Corte. Porrúa. México, D.F., 2013.
- BURRUEL HUERTA, Leopoldo. Principios constitucionales. Desde la Constitución Mexicana hasta la Corte. Porrúa. México, D.F., 2013.
- BUSTILLOS, Julio. La justicia constitucional en México. Análisis cuantitativo de las resoluciones judiciales en materia constitucional. Unam. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2009.
- CABALLERO SIERRA, Gaspar y Marcela Anzola Gil. “Teoría Constitucional”. Editorial Temis, S.A. Bogotá, Colombia. 1995.
- CAMACHO QUIROZ, Cesar. La dimensión del control constitucional local en México. Porrúa. México, D.F., 2014.
- CAMPDERRICH, Ramón. La palabra de Behemoth Derecho, política y orden internacional en la obra de Carl Schmitt. Trotta. Madrid, 2005.
- CARBONELL, Miguel y GARCÍA Jaramillo, Leonardo. El canon neoconstitucional. Trotta. Madrid, 2010
- CARBONELL, Miguel. El A B C de los derechos humanos y del control constitucional de convencionalidad. Porrúa, México, D.F., 2015.
- \_\_\_\_\_, Neoconstitucionalismo (s), Trotta, Madrid, 2005.
- \_\_\_\_\_, Compilador. Teoría de la constitución. Ensayos escogidos. Porrúa. UNAM. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_, Constitución reforma constitucional y fuentes del derecho en México. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Quinta edición, México, D.F. 2004.

- \_\_\_\_\_, Los derechos humanos en México. UNAM y Flores editor y distribuidor. México, D.F., 2015.
- \_\_\_\_\_, Teoría de la Constitución. Porrúa. México, 2005.
- CARPIZO, Enrique. La defensa constitucional en México. Porrúa, México, D.F., 2011.
- CARPIO MARCOS, Edgar y Gerardo ETO. CRUZ. El control de las omisiones inconstitucionales e ilegales en el derecho comparado. Editorial Fundap, S.C., Primera edición, Querétaro, Qro. 2004.
- CARPIZO, Jorge y CARBONELL Miguel. Derecho Constitucional. Porrúa, México, 2003.
- CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Octava edición, México, D.F. 2003.
- CARRANCO ZÚÑIGA, Joel. Poder Judicial. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2005.
- CASTELLANOS Madrazo. José francisco. El control de constitucionalidad de la ley en México. Porrúa, México, D.F., 2014.
- CARRILLO PRIETO, Ignacio. Cuestiones jurídico-políticas de la ilustración. UNAM. CERRADO.
- CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Derechos fundamentales y procesos constitucionales. Grijley. Lima Perú, 2008.
- CASTRO y CASTRO, Juventino V. La jurisdicción mexicana. Porrúa. México, D.F., 2003.
- \_\_\_\_\_, El artículo 105 Constitucional. Editorial Porrúa, Quinta edición, México, D.F. 2004.
- \_\_\_\_\_, El sistema constitucional en las declaraciones de procedencia. Porrúa. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_, Juventino V. Garantías y amparo. Ed. Porrúa, México, 1974.
- \_\_\_\_\_, Glosas constitucionales. Porrúa, México 2005.



- \_\_\_\_\_, La jurisdicción Mexicana. Porrúa, México, D.F., 2003.
- \_\_\_\_\_, Los desconocidos poderes políticos en la constitución. Editorial Porrúa, Primera edición, México, D.F. 2005.
- \_\_\_\_\_, Los Jueces Mexicanos y su Justicia. Editorial Porrúa, México, D.F. 2004.
- \_\_\_\_\_, Los jueces mexicanos y su justicia. Porrúa. México, D.F., 2004.
- CERVANTES BRAVO, Irina y otro. Coordinadores. Temas de control de constitucionalidad y convencionalidad en México. Porrúa. México, D.F., 2013.
- CIENFUEGOS SALGADO, David. Estado, derecho y democracia en el momento actual. Fondo editorial Jurídico. Monterrey, N.L., México. 2008.
- \_\_\_\_\_, Historia Constitucional de las entidades Federativas Mexicanas. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2007.
- \_\_\_\_\_, Constitucionalismo Local. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Quinta edición, México, D.F. 2005.
- CILIA López, José Francisco. Los jueces Nacionales frente a los derechos humanos. Porrúa, México, D.F., 2013
- CISNEROS Farías, German. Compilador. Derecho procesal constitucional. UANL, FACDYC. Nuevo León, México, 2004.
- COLOMBO MURÚA, Ignacio. Límites a las reformas constitucionales. Astrea. Buenos Aires, 2011.
- COMANDUCCI, Paolo. Hacia una teoría analítica del Derecho. CEPC. Madrid, 2010.
- CORTEZ SALINAS, Josafat. La suprema Corte de Justicia en México. ¿Cuándo Vota contra el presidente?, primera edición, México, 2014.
- CORTINA, Adela. Justicia cordial. Editorial Trotta. Madrid, 2010.
- CORZO SOSA, Edgar. Coordinador. I Congreso Internacional sobre justicia constitucional. Unam. Instituto de investigaciones Jurídicas. México, D.F., 2009.

- COSCULLUELA MONTANER, Luis, Manual de derecho administrativo, Madrid, Civitas, 1993.
- COSSÍO DÍAZ, José Ramón. Bosquejos Constitucionales I. Porrúa. México, D.F., 2015.
- \_\_\_\_\_, Bosquejos Constitucionales II. Porrúa. México, D.F., 2015.
- \_\_\_\_\_, Sistemas y modelos de control constitucional en México. UNAM y III. México, D.F., 2011.
- COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. B de F. Buenos Aires, 2010.
- CROSS, Rupert y HARRIS, J.W. El precedente en el Derecho inglés. Marcial Pons. Madrid, 2012.
- CRUZ PARCERO, Juan Antonio. El lenguaje de los derechos. Trotta. Madrid, 2007.
- CRUZ, Luis M., “estudios sobre Neoconstitucionalismo”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2006.
- DE CABO Martin, Carlos. Dialéctica del sujeto, dialéctica de la constitución. Trotta. Madrid, 2010.
- DE LA BERREDA SOLÓRZANO, Luis. Los derechos humanos. Tercer milenio. México, 2003.
- DE LA HIDALGA, Luis. Teoría constitucional. Porrúa. México, 2007.
- DE VEGA, Pedro, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1998.
- DEL ÁGUILA, Rafael. Ciencia política. Trotta. Madrid, 1997.
- DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos. Supremacía constitucional. Porrúa. México, 2009.
- DÍAZ, Elías, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Taurus, Madrid, 1969.
- DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. La racionalidad de las leyes penales. Trotta. Madrid, 2003.
- DWORKIN, Ronald. Justicia para erizos. Fondo de cultura económica. México, 2014.
- \_\_\_\_\_, La justicia con toga. Marcial Pons. Madrid, 2007.

- \_\_\_\_\_, Una cuestión de principios. Siglo veintiuno. Argentina, 2012.
- ENRÍQUEZ FUENTES, Gastón J. Artículo 133: la supremacía constitucional en México. Revista Mexican Statum Rei RomNe de Derecho Administrativo. Año III, Núm. 8, revista semestral. Director German Cisneros Farías, Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León, 2012.
- ESPARZA LEIBAR, Iñaki, El principio del proceso debido, Bosch, Barcelona, 1995.
- ESPINOSA, Gonzalo. Principios de derecho constitucional. Tribunal Electoral del poder judicial de la federación. México, D.F., 2006.
- ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, Apuntes sobre la jurisdicción constitucional hoy y sus principales tendencias y desafíos en Revista Jurídica del Perú, Normas Legales, Trujillo, Año LII, núm. 41, diciembre 2002. - Jurisdicción constitucional, impartición de justicia y debido proceso, Ara Editores, Lima, agosto 2003.
- FAVOREU, Louis. Los Tribunales constitucionales. Ariel, Barcelona, 1994.
- FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín Basave. Teoría de la Democracia. UANL. FACDYC, 2003.
- FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. Estudios de filosofía del derecho. NOVUM. México D.F., 2012.
- FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americanos y europeo-kelseniano. UNAM. México, D.F., 2004.
- FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía. Universidad externando de Colombia. Colombia, 2000.
- \_\_\_\_\_, Paradigmas de la democracia constitucional. EDIAR. Buenos Aires Argentina, 2009.
- \_\_\_\_\_, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Trotta. Madrid, 2001.
- FERRAJOLI, Luigi y RUIZ MANERO, Juan. Dos modelos de constitucionalismo. Trotta. Madrid, 2012.

- FERRER Beltrán, Jordi y otros. Neutralidad y teoría del derecho. Marcial Pons. Cerrado.
- FERRER MAC–GREGOR, Eduardo. Derecho procesal constitucional. Marcial Pons. Madrid, 2008.
- \_\_\_\_\_, El control difuso de convencionalidad. Fundap. Querétaro, 2012.
- \_\_\_\_\_, y otro. Efectos y contenidos de las sentencias de inconstitucionalidad. (Análisis teórico referido al caso “LEYDE MEDIOS”). Jurídicas, UNAM, México, 2009.
- \_\_\_\_\_, COORDINADOR. COLEGIO DE SECRETARIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, A.C. “Derecho Procesal Constitucional”. Cuatro tomos. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Cuarta edición, México, D.F. 2003.
- \_\_\_\_\_, Ensayos sobre derecho procesal constitucional. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Cuarta edición, México, D.F. 2004.
- \_\_\_\_\_, Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica”. Editorial Fundap, S.C., Primera edición, Querétaro, Qro. 2002.
- FERRER Mac-GREGOR, Eduardo. Y SILVA García Fernando. Los feminicidios de ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de los derechos humanos. (Caso Campo Algodonero). Porrúa. México, D.F., 2011.
- FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Porrúa. Instituto Mexicano de Derecho procesal Constitucional. México, D.F., 2011.
- FIORAVANTI, Maurizio. Constitución de la antigüedad a nuestros días. Trotta. Madrid, 2001.
- FIX ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona. Derecho Constitucional Mexicano y comparado. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Cuarta edición, México, D.F. 2007.
- FIX ZAMUDIO, Héctor. Estudio de la defensa de la Constitucional en el ordenamiento mexicano. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2006.

- \_\_\_\_\_, Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Editorial Fundap, S.C., Primera edición, Querétaro, Qro. 2002.
- FLORES MARTÍNEZ, Alejandra. Un nuevo canon interpretativo de los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales de la constitución Española. Miguel Ángel Porrúa, México, 2013.
- GAMIZ PARRAL, Máximo N. y otros Coordinadores. Derecho Constitucional Estatal. Memorias del VI y VII Congresos Nacionales de derecho Constitucional de los Estados. UNAM. México, D.F., 2009.
- GARCÍA AMADO, Juan Antonio. La filosofía del Derecho de Habermas y Luhmann. Universidad externando de Colombia. Colombia, 1997.
- GARCÍA CASTILLO, Tonatiuh. Consideraciones en torno a la relación de dos sistemas jurídicos no independientes. UNAM. México, D.F., 2004.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3ª. ed., Editorial Civitas, Madrid, 1985.
- GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Trotta. Madrid, 2009.
- GARCÍA RAMÍREZ, Cesar y Bernardo García Camino. Teoría Constitucional. Editorial Iure, S.A., Primera edición. México, D.F. 2004.
- GARCIA Morelos Gumesindo. Introducción al derecho procesal constitucional. Ubijus. México, D.F., 2009.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y otro. Compiladores. La reforma constitucional sobre derecho humano (2009-2011). Porrúa. México, D.F., 2012.
- GARGARELLA, Roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls. Paidós. Barcelona, 2004.
- GARRORENA MORALES, Ángel. Derecho constitucional. Teoría de la constitución y sistema de normas. Centro de estudios políticos y constitucionales. Segunda edición. Madrid, 2013.

- GARZA GARCÍA, Cesar Carlos. La defensa de la Constitución. Editorial Lazcano Garza Editores, S.A. Primera edición. Monterrey, Nuevo León, México. 1997
- GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso, La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales, Palestra Editores, Lima, 2003.
- GIL RENDÓN, Raymundo. Derecho Procesal Constitucional. Editorial Fundap, S.C., Primera edición, Querétaro, Qro. 2004.
- GINER, Salvador. La cultura de la democracia el futuro. Ariel. España, 2000.
- GÓMEZ MONTORO, Ángel J., El conflicto entre órganos constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.
- GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Coordinadores. “La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2006.
- GRÁNDEZ CASTRO, Pedro P. Tribunal constitucional y argumentación jurídica. Palestra. Lima, 2010.
- GROPPI, Tania. La justicia constitucional en Europa. Fundap. Querétaro, Qro, México. 2004.
- \_\_\_\_\_, La reforma constitucional en los estados federales. Fundap. Querétaro, 2003.
- GUASTINI, Riccardo. Interpretación, Estado y Constitución. Ara. Perú, 2010.
- GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. Controversia sobre controversia. Porrúa. México, D.F., 2001.
- \_\_\_\_\_, Ingeniería judicial y reforma del estado. Porrúa. México, D.F. 2003.
- GUTIÉRREZ ZAPATA, Iván Carlo. “La acción o recurso de inconstitucionalidad. Estudio comparativo entre España y Mexica. Editorial Fundap, S.C., Primera edición, Querétaro, Qro. 2005.
- HÄBERLE, Peter, La libertad fundamental en el Estado Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1997.

- \_\_\_\_\_, HÄBERLE, Peter. La imagen del ser humano dentro del Estado Constitucional, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.
- \_\_\_\_\_,(Traducción Ana María Montoya) Constitución como cultura. Instituto de estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Colombia, 2002.
- \_\_\_\_\_, Constitución como cultura. I.E.C.C.R.P. Colombia, 2002.
- \_\_\_\_\_, El Estado constitucional, México-Lima, UNAM y Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
- \_\_\_\_\_, El federalismo y el regionalismo como forma estructural del estado constitucional. Unam. México, D.F., 2006.
- \_\_\_\_\_, (Traducción Joaquín Brage Camazano) El Tribunal constitucional como tribunal ciudadano.
- \_\_\_\_\_, Libertad, igualdad, fraternidad. Trotta. España, 2002.
- \_\_\_\_\_, Libertad, igualdad, fraternidad. Trotta. Madrid, 1998.
- HARTO DE VERA, Fernando. Ciencia política y teoría política contemporáneas: Una relación problemática. Trotta. Madrid, 2005.
- HIDALGA, Luis De La. Teoría Constitucional. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2007.
- HÖFFE, OTFRIED. Derecho intercultural. Gedisa. Barcelona, 2008.
- HUERTA OCHOA, Carla. Teoría del derecho. Cuestiones relevantes. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2009.
- IBARRA GÜELL, Pedro. Democracia relacional. CEPC. Madrid, 2011.
- IZQUIERDO Muciño, Martha E. y otro. Análisis jurídico de la evolución de las acciones de inconstitucionalidad en México. Flores editor y distribuidor. México, D.F., 2010.
- JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado (trad. de Fernando de los Ríos), Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

- KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), (trad. de Rolando Tamayo y Salmorán), UNAM, México, 2001.
- LANDA ARROYO, Cesar. Tribunal Constitucional y estado democrático. Tercera edición. Palestra. Lima, Perú, 2007.
- LARA GUADARRAMA, Mauricio. Análisis crítico de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. México, 2007.
- LARON ARROYO, Cesar. Tribunal constitucional y Estado democrático. Palestra. Lima, 2007.
- LEÓN HERNÁNDEZ, Marco Antonio. Constitucionalismo Particular. FUNDAp. Querétaro, 2006.
- LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las leyes. 2a. ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 1970.
- LÓPEZ CALERA, Nicolás. ¿Hay derechos colectivos? Ariel. Barcelona, 2000.
- LÓPEZ GUERRA, Luis. El Poder Judicial en el Estado Constitucional, Lima, Palestra Editores, 2001.
- LÓPEZ HERNÁNDEZ, José. Lenguaje, normas y sistema jurídico. Tecnos. España, 2012.
- MACCORMICK, NEIL. H. L. Hart. Marcial Pons.
- \_\_\_\_\_, Instituciones del derecho. Marcial Pons.
- MANCILLA CASTRO, Roberto Gustavo. Derecho Adjetivo Constitucional. Novum. México, D.F. 2012.
- MARTÍNEZ GARCÍA, Hugo. El nuevo juicio de amparo en México. Rehtikal. Primera ed. México, 2013.
- \_\_\_\_\_, El proceso constitucional de amparo en México. Facdyc, UANL, Monterrey, N.L., invierno de 2014.
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, León Javier. La inconstitucionalidad por omisión legislativa. Miguel Ángel Porrúa. México, 2007.



- MEDINA Mora F. Alejandra. Derechos humanos y restricciones, los dilemas de la justicia. Porrúa, México, D.F., 2015.
- MENA ADAME, Carlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Porrúa, México, D.F. 2003.
- MONTERO ZANDEJAS, Daniel. “Derecho Constitucional Comparado”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., México, D.F. 2006.
- MORA RESTREPO, Gabriel. Justicia constitucional y arbitrariedad de los jueces. Marcial Pons. Buenos Aires, 2009.
- MORELLO, AUGUSTO Mario, El proceso justo: del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos, Librería editora platense, Abeledo Perrot, La Plata, 1994.
- MORELOS GARCÍA Gumersindo. Introducción al derecho procesal constitucional. Ed. Ubijus. México, 2009.
- MORENO-BONETT, Margarita. Los derechos humanos en perspectiva histórica. UNAM. 2014.
- MUÑOZ FRAGA, Rafael. Derecho Económico. Porrúa. México, 2014.
- NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Justicia y tribunales constitucionales en América del sur. Palestra. Lima, 2006.
- OJEDA BOHÓRQUEZ, Ricardo. El amparo contra normas con efectos generales. Porrúa. México, D.F., 2004.
- OROZCO GÓMEZ, Manuel. “Procedimientos Constitucionales: controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2004.
- ORTEGA GARCÍA, Ramón. El modelo constitucional de derechos humanos en México. Tirant lo Blanch. México, D.F., 2015.
- ORTEGA, Santiago y FABRA, Jorge. El PostScript de H.L.A. Hart. Ara. Perú, 2010.
- OVALLE FAVELA, José. Teoría general del proceso. Oxford. México, D.F., 2010.

- PACHECO PULIDO, Guillermo. "Supremacía Constitucional y federalismo Jurídico". Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Tercera edición, México, D.F. 2001.
- PEGORARO, Lucio. Derecho constitucional comparado. Fundap. Querétaro, 2011.
- PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos, Lecciones de Teoría Constitucional". Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2005.
- PÉREZ FERNÁNDEZ Ceja, Ydalia. "La suspensión en la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2006.
- PÉREZ LOZANO, Andrés. El control de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano. NOVUM. México, 2011.
- PISARELLO, Gerardo. Un largo Termidor. Trotta. Madrid, 2011.
- POPPER, Karl R. La sociedad Abierta y sus enemigos. Paidós. Madrid, 2010.
- POZZOLO, SUSANNA. Neoconstitucionalismo derecho y derechos. Palestra. Lima, 2011.
- PRIETO SANCHIS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003.
- \_\_\_\_\_, Apuntes de teoría del Derecho. Trotta. Madrid, 2005.
- \_\_\_\_\_, Luis. El constitucionalismo de los derechos. Trotta. Madrid, 2013.
- RABASA, Emilio. La Constitución y la dictadura. Porrúa. México, 2006.
- RABELL GARCÍA, Enrique, otros. Federalismo en México. Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 2013.
- RAMOS QUIROZ, Francisco. El control constitucional y la suprema cortes de Justicia: una perspectiva histórica. Ubijus. México, D.F., 2013.
- RAWLS, John. El liberalismo político. Critica. Barcelona, 2004.
- \_\_\_\_\_, La justicia como equidad. Paidós. Barcelona, 2002.
- \_\_\_\_\_, Liberalismo político. Fondo de cultura económica. México, 1993.

- \_\_\_\_\_, Teoría de la justicia. Fondo de cultura económica. México, 1995.
- RAZO GARCÍA, Luis Alberto. La decisión judicial en la sentencia penal. Suprema corte de justicia de la nación. México, 2007.
- RENDÓN, GIL Raymundo. Derecho Procesal Constitucional. FUNDAp. Querétaro, 2004.
- REQUEJO PAGES, Juan Luis, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998.
- REYNOSO DÁVILA, Roberto. La misión del Juez ante la ley injusta. Porrúa. México, D.F., 2004.
- RIDDALL, J.G. Teoría del Derecho. Gedisa. Barcelona, 1991.
- RODRIGUEZ, Marcos del Rosario. Supremacía Constitucional. Porrúa. México, D.F., 2009.
- RODRÍGUEZ MINAYA, Juan Ramón. “La facultad de consignación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Primera edición, México, D.F. 2006.
- \_\_\_\_\_, La suspensión en el juicio de amparo. Porrúa. México, 2007.
- ROJAS AMANDI, Víctor. La ética discursiva en las teorías del derecho de Habermas y Alexy. UNAM. México, 2012.
- ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto, Los derechos humanos en México. Porrúa, México, 2012.
- RUIZ MIGUEL, Alfonso. Una filosofía del derecho en modelos históricos. Trotta. Madrid, 2002.
- SALGADO LEDESMA, Eréndira. Manual de derecho procesal constitucional. Porrúa. México, 2011.
- SALINAS SOLÍS, Gary Richard y otro. La decisión judicial: la justificación externa y los casos difíciles. Grijley. Perú, 2009.

- SÁNCHEZ CORDERO Olga, “Controversia Constitucional”. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología. Primera Edición, Monterrey, Nuevo León, 1999.
- SCHMILL ORDOÑEZ; Ulises. El sistema de la constitución mexicana. Themis, México, D.F., 2014.
- SERNA DE LA GARZA, José María. El sistema federal mexicano. Unam, México, D.F., 2008.
- SOSPEDRA NAVAS, Francisco José. Justicia constitucional y procesos constitucionales. Civitas. España, 2011.
- SUAREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique. La fuerza de la razón. Nueva imagen. México, 1997.
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? México, D.F. 2001.
- \_\_\_\_\_ ¿Qué son las controversias constitucionales? México, D.F., 2001
- \_\_\_\_\_ Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, (compilación cronológica de sus modificaciones). Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda edición. México, 2013.
- \_\_\_\_\_ Décimo Aniversario de la Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Suprema corte de justicia de la nación. México, 2005.
- \_\_\_\_\_ Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Suprema corte de justicia de la nación. México, 2013.
- \_\_\_\_\_ El control de convencionalidad ex officio. Origen en el ámbito regional americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos, precisión de sus alcances y retos para el Poder Judicial de la Federación. Serie. Cuadernos de Jurisprudencia Núm. 8, México, 2012.
- \_\_\_\_\_ El control de convencionalidad y el Poder Judicial en México, mecanismo de protección nacional e internacional de los derechos humanos. Serie. Cuadernos de Jurisprudencia Núm. 7, México, 2012.

- \_\_\_\_\_ El Poder Judicial de la Federación en el siglo XX. Colección Episodios y personajes del poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, México, D.F. 2007.
- \_\_\_\_\_ Elementos de derecho procesal constitucional. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_ La actualidad de la defensa de la constitución. México, D.F., 1997.
- \_\_\_\_\_ La defensa de la Constitución. Colección Serie grandes temas del Constitucionalismo Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, México, D.F. 2005.
- \_\_\_\_\_ La división de poderes. Colección Serie grandes temas del Constitucionalismo Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, México, D.F. 2005.
- \_\_\_\_\_ La justicia Constitucional en las entidades federativas. México, 2008.
- \_\_\_\_\_ La reforma constitucional de los derechos humanos: el costo de su realización efectiva. Coordinador Carlos Pérez Vázquez. México, D.F., 2014.
- \_\_\_\_\_ Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. México, D.F., 2009.
- \_\_\_\_\_ Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera edición. México, 2006
- \_\_\_\_\_ Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera edición. México, D.F., 2014.
- \_\_\_\_\_ Series temas del Constitucionalismo Mexicano La Supremacía Constitucional. #1. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_ Series temas del Constitucionalismo Mexicano. La defensa de la Constitución #5. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_ Series temas del Constitucionalismo Mexicano. El Federalismo #3. México, D.F., 2005.

- \_\_\_\_\_ Series temas del Constitucionalismo Mexicano. La división de poderes. #2. México, D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_ Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica. 2010
- \_\_\_\_\_ Un dialogo entre jueces. Naciones unidas derechos humanos. México, 2012.
- TARUFFO, Michele. Páginas sobre justicia civil. Marcial Pons. Madrid, 2009.
- TAPIA Tovar, José. El señor magistrado. Porrúa. México, D.F., 2005.
- TENA RAMÍREZ, Felipe. “Derecho Constitucional Mexicano”. Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Trigésima séptima edición, México, D.F. 2005.
- THOMPSON, Dennis F. La ética Política y el ejercicio de cargos públicos. Gedisa. Barcelona, 1999.
- TORRES ESTRADA, Pedro. Compilador. Neoconstitucionalismo y estado de derecho. Editorial, Limusa, México, 2006.
- TORRES, Luis Fernando. Legitimad de la justicia constitucional. Librería jurídica Cevallos. Quito, 2003.
- TRUJILLO RINCÓN, María Antonia, Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1995.
- URIARTE, Edurne. Introducción a la ciencia política. Tecnos. Madrid, 2010.
- VALDÉS, Diego. Conversaciones académicas con Peter HABERLE. UNAM. III. México, D.F., 2006.
- VALDÉS, Diego. El control del poder. Porrúa. México, 2006.
- VALDÉS, S., Clemente, “Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 4, Porrúa, México, julio-diciembre 2005.
- VELASCO, Juan Carlos. Habermas. Alianza. Madrid, 2013.

- VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel y PATRON Sánchez, Fernando Coordinadores. *Varía Jurídica*. Universidad de Guanajuato. Editorial Ubijus. México, 2012.
- VIGO, Rodolfo Luis. *Constitucionalización y judicialización del derecho*. Porrúa. México, D.F., 2013.
- VILLASEÑOR GOYZUETA, Claudia Alejandra. *Proporcionalidad y límites de los derechos fundamentales*. Porrúa. México, D.F., 2011.
- VITALE, Ermanno. *Defenderse del poder*. Trotta. Madrid, 2012.
- ZABALA CASTILLO, José Francisco. *¿Formula Otero?* Fundap. Querétaro, 2005.
- ZAGREBELSKY, Gustavo y MARÍA Martini Carlo. *La exigencia de justicia*. Trotta. Madrid, 2006.
- ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia*, Madrid, Trotta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *¿Derecho procesal constitucional?* FUNDAp. Querétaro, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Historia y constitución*. Trotta. Madrid, 2005.
- \_\_\_\_\_, Gustavo. *Principios y votos*. Trotta. Madrid, 2008.

## **Diccionarios.**

- CARBONELL, Miguel. Coordinador. *Diccionario de Derecho Constitucional*. Porrúa UNAM. México, .D.F., 2005.
- \_\_\_\_\_, Coordinador. *Diccionario Jurídico básico*. Porrúa UNAM. México, .D.F., 2013.
- DE PINA, Rafael. *Diccionario de derecho*. Porrúa. México, D.F., 2003.

Diccionario de derecho procesal. Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de derecho de la UNAM. Oxford, México, D.F., 2004.

Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de investigaciones jurídicas. Porrúa. UNAM. Instituto de investigaciones jurídicas. México, D.F., 2005.

RUIZ Torres; Humberto. Diccionario de juico de Amparo Oxford, México, D.F., 2005.

VALADÉS, Diego. Coordinador. Presidente Diccionario Jurídico Mexicano. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, D.F. 2005.

### **Legislación.**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. UNAM. Porrúa. México, 2004.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

Constitución Política del estado de Nuevo León.

Ley de Amparo.

Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional.

Ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del estado de Nuevo León.

### **Formato digital.**

Constitución política y su interpretación por el poder Judicial de la Federación, 2014.

Copila. Legislación federal, 2014.

Jurisprudencia y criterios 2014.

Ley de amparo y su interpretación por el poder Judicial de la Federación, 2014.

Semanario Judicial de la Federación.